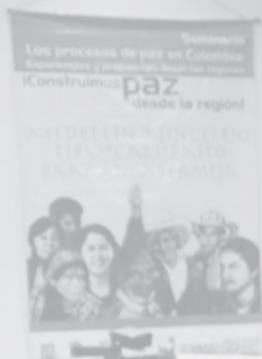


Seminario

Los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las regiones







SEMINARIO

**LOS PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA:
EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS DESDE LAS REGIONES**

EDICIÓN

FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA

BOGOTÁ DC, 2015

322,42

S354p

Seminario: los procesos de paz en Colombia experiencias y propuestas desde las ciudades regiones (Bogotá, Colombia, 2014)

Propuestas en siete ciudades- regiones de Colombia: Barrancabermeja (Magdalena Medio), Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Pasto (Nariño), Sincelejo (Montes de María), Tibú (Catatumbo) y Bogotá. / Compilación y edición Alvaro Villarraga Sarmiento.-- Bogotá: Fundación Cultura Democrática, 2015.

164 p. Fotografías

ISBN: 978-958-58025-3-7

Barrancabermeja, Cali, Medellín, Pasto, Sucre y Tibú: Contexto y documento regional. Elementos claves en paz y reconciliación. Lecciones aprendidas. Propuestas de paz y proyecciones regionales del Seminario. Bogotá: Un acumulado de experiencias y lecciones. Criterios y acciones generales emprendidas como insumos para la construcción de una política de paz distrital. Bogotá Humana, fundamento y antecedente. Una ruta para la construcción de la paz en el Distrito.

1. PROCESO DE PAZ - COLOMBIA.-- 2. NEGOCIACIONES DE PAZ
3. POLÍTICAS DE PAZ 4. GUERRILLAS - COLOMBIA 5. REGIONES DE COLOMBIA -
ASPECTOS SOCIALES I. Villarraga Sarmiento, Alvaro. II Tit.

© Fundación Cultura Democrática (FUCUDE)

© Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

© Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Esta publicación fue posible gracias al apoyo del Programa de Reintegración con Enfoque Comunitario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que cuenta con el respaldo económico del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de las organizaciones e instituciones participantes de los seminarios regionales en las 6 ciudades/ región y el Distrito Capital, y no necesariamente reflejan la opinión de FUCUDE, USAID o de la OIM.

Reconocimiento especial a organizaciones sociales e institucionales que participaron en las mesas ciudadanas como protagonistas en las regiones, sus voces contribuyeron en la elaboración del presente libro en las ciudades-regiones de Barrancabermeja, Magdalena Medio; Cali, Valle del Cauca; Medellín, Antioquia; Pasto, Nariño; Sincelejo, Montes de María; Tibú, Catatumbo y Bogotá, DC.

**SEMINARIO LOS PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA:
EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS DESDE LAS CIUDADES
REGIONES**

**PROPUESTAS EN SIETE CIUDADES – REGIONES DE
COLOMBIA: BARRANCABERMEJA (Magdalena Medio), CALI
(Valle del Cauca), MEDELLÍN (Antioquia), PASTO (Nariño),
SINCELEJO (Montes de María), TIBÚ (Catatumbo) y BOGOTÁ
DC.**

EDICIÓN

FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA

BOGOTÁ DC, 2015



Seminario los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las ciudades regiones.

Propuestas en siete ciudades –regiones de Colombia: Barrancabermeja (Magdalena Medio), Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Pasto (Nariño), Sincelejo (Montes de María), Tibú (Cataumbo) y Bogotá DC.

Coordinación de la edición:

Neila Amira Hernández Vásquez
Luis Yezid Beltrán Bautista

Edición:

Fundación Cultura Democrática

Coordinación del proyecto:

Neila Amira Hernández Vásquez

Asesoría pedagógica:

Luis Yezid Beltrán Bautista

Coordinaciones regionales:

José Francisco Restrepo. Sincelejo
Ingrid Cadena Obando. Pasto
Emiro Edsadis Carvajal Parra. Tibú
Max Yuri Gil Ramírez. Medellín
Patricia Conde. Barrancabermeja
Nelson Adrián Franco Díaz, Diego Arias, Eliana Ivet Toro. Cali

Área Administrativa:

Lucy Cubillos Beltrán
Pilar Andrea Lozada Bernal
Wilmar Enoc Obando Guerrero

Portada:

Marcela Vega Vargas

Revisión de textos:

Fernando Iriarte Martínez

ISBN 978-958-58025-3-7

Impresión:

Gente Nueva Editorial

IMPRESO Y HECHO EN COLOMBIA- PRINTED AND MADE IN COLOMBIA



Agradecimientos

En esta ruta para la acción en la construcción de la paz, damos nuestros más sinceros agradecimientos a Gustavo Petro Urrego, alcalde de Bogotá DC, y a los funcionarios de la alcaldía de la Bogotá Humana, Camilo Castellanos, Blanca Valle Zapata y Guillermo Banguero; igualmente, a las personas directivas y colectivos de trabajo de las organizaciones aliadas en las regiones como: Sembrando Paz, en Sincelejo; Corporación Región, el Programa Preparémonos para la Paz de la Gobernación de Antioquia, la Unidad Nacional de Atención a Víctimas, la Casa Museo de la Memoria y la Alcaldía, en Medellín; Bitácora Ciudadana, Aldea Global y Universidad Mariana, en Nariño; Diócesis de Tibú; Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, y Gobernación del Valle del Cauca, Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos, Universidad del Valle - Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos-, Alcaldía de Cali - Secretaría de Cultura y Turismo y Asesoría de Paz-, Arquidiócesis de Cali y Observatorio de Realidades Sociales, en la ciudad de Cali.

En este segundo escenario referente a construir paz desde las regiones fue importante el compromiso de múltiples conferencistas quienes abordaron las temáticas de la paz desde lo nacional y lo regional como: Álvaro Villarraga Sarmiento, compilador y editor de la obra “Los Procesos de Paz en Colombia - Biblioteca de la Paz”; Jaime Zuluaga Nieto, profesor de la Universidad Nacional y Externado de Colombia; Ubencil Duque, director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio; Ingrid Cadena, de la Fundación Bitácora Ciudadana; Max Yuri Gil Ramírez, miembro de Corporación Región;

José Girón, del Instituto Popular de Capacitación (IPC); José Cerrá, profesor e investigador social de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) y Federico Guillermo Muñoz, profesor de la Universidad del Valle.

Igualmente, destacamos el aporte de las personas colaboradoras de FUCUDE en Bogotá como: Nelson Plazas Niño, Katherine Torres, Yezid Beltrán Bautista, Marcela Vega Vargas, Néstor Torres, Carlos Serna, Pilar Lozada Bernal, Lucy Cubillos, Wilmar Enoc Obando. Las coordinaciones regionales en: Barrancabermeja, Patricia Conde; Tibú, Emiro Edsadis Carvajal Parra; Cali, Diego Arias, Nelson Adrián Franco y Eliana Ivet Toro; Pasto, Ingrid Cadena; Medellín, Max Yuri Gil Ramírez y Sincelejo, José Francisco Restrepo.

Nuestro reconocimiento a las iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias así como a las instituciones locales que hicieron posible realizar el seminario en las regiones, donde una vez más el espíritu de la paz fue el gran actor convocante.

Reiteramos los agradecimiento a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por el apoyo brindado al desarrollo del seminario “Los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las regiones”.

Contenido

Agradecimientos	7
Presentación	11
Introducción	15
Pasto - Nariño	19
Reconocimiento	21
I. Contexto	22
II. Documento regional	24
III. Enfoques de paz y reconciliación	30
IV. Lecciones aprendidas de los procesos de paz	33
V. Propuesta para la construcción de una agenda de paz en Nariño	36
VI. Proyecciones	39
Cali - Valle del Cauca	43
Reconocimiento	45
I. Contexto	46
II. Documento regional	48
III. Elementos clave sobre los conceptos de paz y reconciliación desde el Valle del Cauca	54
IV. Lecciones aprendidas de los procesos de paz	56
V. Propuestas regionales de paz desde el Valle del Cauca	59
VI. Proyecciones	68
Sucre - Montes de María	71
Reconocimiento	73
I. Contexto	74
II. Documento regional	76
III. Enfoque de paz	82
IV. Lecciones aprendidas de los procesos de paz	83
V. Propuestas regionales de paz en Sucre	85
VI. Proyecciones	89
Medellín - Antioquia	91
Reconocimiento	93
I. Contexto	94
II. Documento regional	97



III. Enfoques de paz y reconciliación	101
IV. Lecciones aprendidas	103
V. Propuestas	107
VI. Proyecciones	111
Barrancabermeja - Magdalena Medio	113
Reconocimiento	115
I. Contexto del Magdalena Medio: una región en construcción	117
II. Documento regional	120
III. Elementos clave en paz y reconciliación	124
IV. Lecciones aprendidas de los procesos de paz en el Magdalena Medio	126
V. Propuestas de paz del Magdalena Medio	128
VI. Proyecciones	133
Tibú - Catatumbo	135
Reconocimiento	137
I. Contexto	138
II. Documento regional	139
III. Enfoques de paz y reconciliación	143
IV. Lecciones aprendidas	145
V. Propuestas	147
VI. Proyecciones	151
Bogotá D.C.	153
Reconocimiento	155
I. Bogotá: un acumulado de experiencias y lecciones. Criterios y acciones generales emprendidas como insumos para la construcción de una política de paz distrital	156
II. El marco general: la Bogotá Humana, fundamento y antecedente para la construcción de una política de paz en el Distrito Capital	159
III. Una ruta para la construcción de paz en el distrito: aprovechar el acumulado, fortalecer desarrollos y consolidar una política	161
IV. Acercamiento a los enfoques pertinentes para la construcción de la política de paz	165
V. A manera de síntesis	169



Presentación

El proyecto seminario “Los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las regiones”, iniciativa promovida por la Fundación Cultura Democrática, se desarrolló en el contexto de conversaciones de negociación política del cese del conflicto armado sostenidas entre el Gobierno y la guerrilla de la FARC y de acercamientos con el ELN.

Los diálogos actuales en La Habana, enmarcados en una agenda para la finalización del conflicto, y los actuales avances para lograr bajar la intensidad del mismo, han posibilitado crear un clima favorable a la paz en Colombia así como estimular un espíritu y una opinión optimista y de respaldo a estos nuevos esfuerzos.

Bajo esa mirada, aun cuando los diálogos Gobierno- FARC se posicionan aún más, la anhelada paz debe transitar por otros caminos, más allá del cese de hostilidades y del silencio de los fusiles. Se hace entonces necesario alumbrar las vocerías públicas provenientes de las dinámicas de las iniciativas de paz, las organizaciones sociales y de derechos humanos y las múltiples y diversas iniciativas ciudadanas en las localidades y regiones del país, así como en el territorio de la capital de la república, expresiones civiles de fortalecimiento democrático de una ciudadanía que quiere superar una historia de violencia.

De tal manera que la construcción de la paz no está supeditada a las negociaciones entre quienes han estado haciendo la guerra por más de medio siglo. En este sentido, el seminario respondió al interés nacional y regional

de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y acciones institucionales y sociales orientadas al logro y la consolidación de la paz a través de la elaboración de propuestas desde las regiones.

Una paz firme y duradera desde los territorios debe ser construida a partir de una perspectiva multidimensional, abordando particularidades sociales, culturales, políticas y económicas, ingredientes fundamentales para la reconciliación y la convivencia.

El seminario fue entonces un método para subirle volumen a las expresiones y voces regionales en un marco de diálogo y negociación política entre guerrilla y Gobierno y abre la posibilidad del diálogo interactivo, el intercambio horizontal, la investigación, el análisis crítico y la valoración de experiencias, aprendizajes y lecciones que lleven a la construcción colectiva de propuestas de paz y se constituyan, de manera categórica, en herramientas para la incidencia política en favor de la paz.

El libro sobre el seminario “Los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las regiones” es producto de las memorias recogidas en el desarrollo de las sesiones pedagógicas. La autoría y el contenido corresponden a las organizaciones e instituciones participantes, las cuales elaboraron en el curso de las mesas ciudadanas organizadas con la finalidad de generar un intercambio de conceptos, análisis, opiniones y propuestas entre los diversos actores, que permitieran recoger los matices y puntos de vista frente a los elementos para tener en cuenta en una mirada integral en torno a la construcción de propuestas de paz desde los territorios. En esa medida surgieron los documentos que hoy presentamos en esta publicación, luego de un proceso de convalidación en acto público de clausura donde FUCUDE aportó a la facilitación y acopio de las propuestas para su edición.

Es importante resaltar de qué modo el seminario permitió desarrollar varias piezas comunicativas como herramientas pedagógicas útiles para el fortalecimiento de una cultura de paz, tales como el afiche “Ruta para la paz”; el libro sobre el seminario “Los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las ciudades regiones”, relativo a siete ciudades regiones de Colombia: Barrancabermeja (Magdalena Medio), Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Pasto (Nariño), Sincelejo (Montes de María), Tibú (Catatumbo) y Bogotá DC, como también seis piezas audiovisuales organizadas regionalmente donde, desde sus particularidades, se abordan las temáticas de contexto y las propuestas e iniciativas de paz, en formatos de



videos utilizables como apoyo pedagógico para la incidencia y movilización social en favor de la paz.

Las memorias del seminario así como las ponencias podrán ser consultadas en la página web de FUCUDE: www.fundacionculturademocratica.org

Igualmente, se elaborará un documento histórico de la síntesis de la Biblioteca de Paz en Colombia 1982-2002, cuya edición es una versión resumida de los nueve volúmenes de “Los Procesos de Paz en Colombia, Biblioteca de la Paz 1982-2002”, compilada y editada por Álvaro Villarraga Sarmiento.

Estas herramientas son un aporte a los diferentes actores institucionales y sociales para sensibilizar, promover, informar, difundir, visibilizar y estimular el análisis crítico, la discusión y construcción de nuevas propuestas en torno a la paz en los contextos y realidades locales, a partir de la suma de otras experiencias institucionales y sociales. Esto, porque el seminario no concluye con la finalización del proyecto.

La paz es palabra que camina por las regiones.

FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA



Introducción

El propósito general de la paz avanza de manera específica en conseguir los mejores resultados en la búsqueda de la solución política definitiva del conflicto armado interno; sin embargo, para el país, de manera general, la construcción de la paz implica fortalecer los esfuerzos existentes por preservar la vigencia del Estado social de derecho consagrado en la Constitución Política de 1991, atender de manera integral los derechos de las víctimas ocasionadas, aplicar agendas de transformación social y adoptar o reafirmar compromisos institucionales y sociales a favor de un régimen de garantías y derechos a todo nivel, como premisa para conseguir la reconciliación mediante el aporte tanto de actores institucionales y sociales como de las dinámicas de las iniciativas de paz, dirigida a los entornos distrital, regional y nacional.

En tal sentido, en el 2012 nos propusimos hacer un primer ejercicio denominado “Los procesos de paz en Colombia: políticas, experiencias y compromisos del Distrito Capital”, contando con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, teniendo en cuenta el énfasis particular que en la agenda pública cobraron los elementos relativos a la paz como asunto político prioritario en la coyuntura del país; en este caso especial, el documento del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, como referente de la acción.

Esta iniciativa madre buscó promover un espacio de entendimiento entre la institucionalidad y las organizaciones de la sociedad civil del Distrito Capital, con base en el tratamiento de temas referidos a la paz y sus consiguientes

implicaciones relacionadas con el desarrollo social, los derechos humanos, las garantías ciudadanas y la recuperación de la convivencia.

La puesta en marcha de una estrategia pedagógica, apoyada en una metodología de investigación, acción y participación con criterios en formación, participación, interacción, de construcción conjunta de conocimiento y de realización de prácticas pedagógicas democráticas a partir de un análisis de experiencias históricas referidas a la paz, proyecciones críticas en relación con el contexto actual y con sentido de prospectiva permitió el abordaje en diez sesiones de diversas temáticas orientadas a la construcción de respuestas sobre preguntas relacionadas con la dinámica del conflicto armado, los actores, las estrategias y los cambios en las circunstancias históricas en correspondencia con los contextos vividos durante las últimas tres décadas. Estas sesiones estuvieron orientadas al análisis de la políticas y los procesos de paz emprendidos por los distintos mandatarios nacionales durante las últimas tres décadas, los elementos centrales de una política pública de paz (sus apuestas, reformas asociadas, marco jurídico, consensos políticos y sociales requeridos), y los elementos propios de la metodología de tratamiento de los conflictos: aproximaciones, buenos oficios, intermediaciones, negociaciones, formas de acompañamiento, veedurías y apuestas propias del posconflicto.

De este ejercicio, en el cual participaron 35 personas representantes de diversas organizaciones sociales, comunitarias e institucionales, surgió un documento Memorando de lineamientos y propuestas para la formulación de una política pública de paz en Bogotá DC, donde se abordan aspectos de la política, estrategias y medidas por implementar en lo relativo a la paz en el posconflicto y la reconciliación en el Distrito Capital.

Si bien la estructuración y organización del documento es diferente a la aplicada en seis ciudades región de Colombia en el marco del seminario “Los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las regiones”, consideramos de vital importancia su visibilización, dado que el documento no fue publicado. Agradecemos, pues, a las organizaciones que apoyaron el seminario sobre paz desde la región, permitirnos publicar el documento síntesis del “Memorando” el cual aparece en el último capítulo del libro como un aporte a la Bogotá Humana.

Posteriormente, en el 2014 y con el objetivo de continuar fortaleciendo el rol de la sociedad civil, consideramos necesario ahondar en el ejercicio de construcción de paz desde las regiones con la finalidad de nutrir las acciones

nacionales por la paz, poniendo en marcha el proyecto del seminario “Los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las regiones”, con la intención de impulsar el desarrollo de acciones orientadas al logro y la consolidación de la paz a través del aprendizaje de experiencias anteriores de construcción de paz en el país, focalizando ciudades región como Sincelejo, Medellín, Cali, Pasto, Tibú y Barrancabermeja, según criterios históricos de iniciativas de paz desde la sociedad civil y complejidades del conflicto armado y social así como territorios con amplia trayectoria en acuerdos de paz a través de, negociaciones políticas.

Los criterios para la participación de 165 personas beneficiarias directas del seminario en las seis ciudades estuvieron referidos a delegados de procesos o iniciativas sociales que han concretado acciones para la construcción de consensos por la paz en los territorios, seleccionados después de haber respondido al llamado de la convocatoria y realizado su proceso de inscripción.

Frente a una nueva dinámica y a las pretensiones del seminario desde las regiones se hizo necesario un diseño programático diferente del aplicado en la ciudad de Bogotá DC, de tal manera que se procuró que la aplicación de la acción pedagógica basada en la metodología de investigación, acción y participación, a partir de ejercicios de diálogo interactivo, intercambio horizontal, investigación, análisis crítico, valoración de experiencias y debate, involucrara una perspectiva de valoración de las especificidades regionales.

La metodología aplicada permitió positivamente fortalecer la participación y las capacidades sociales e institucionales a través de las sesiones programadas en las jornadas establecidas para cada ciudad región, tales como los espacios autónomos de trabajo presenciales denominados “mesas ciudadanas” y los ejercicios extracurriculares, cuyos propósitos estaban encaminadas a que las personas participantes del proceso se aproximaran e identificaran experiencias a lo ancho y largo de sus territorios y debatieran sobre las mejores lecciones y formas de incidencia para la paz. Posteriormente, este ejercicio se maduraría con otros ejercicios programados en un encuentro de intercambio nacional, contando con la presencia de las regiones beneficiarias del proyecto, invitados del seminario de Bogotá y otras iniciativas como organizaciones e instituciones locales y plataformas nacionales, con la finalidad de dilucidar estrategias y medidas orientadas a la recuperación y la construcción de la paz en lo regional y local, que nutrieran las acciones locales, regionales y nacionales por la paz.

El libro sobre el seminario “Los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las ciudades regiones” contiene puntualmente una estructura organizativa temática homogénea para Barrancabermeja (Magdalena Medio), Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Pasto (Nariño), Sincelejo (Montes de María) y Tibú (Catatumbo), donde se reconoce que, en medio de la diferencia que surge desde los aportes con perspectiva de género, visión interétnica e intercultural, es posible hacer más rica una paz diversa.

La publicación cuenta con seis capítulos centrados en la experiencia desarrollada en las ciudades/región de Pasto (Nariño), Cali (Valle del Cauca), Sincelejo (Montes de María), Medellín (Antioquia), Barrancabermeja (Magdalena Medio), Tibú (Catatumbo) y Bogotá D.C. De manera homogénea se abordan varios capítulos que en su orden son así: contexto, documento regional, elementos o enfoques en paz y reconciliación, lecciones aprendidas, propuestas de paz y proyecciones.

Por lo anterior, FUCUDE ha visionado que más allá del seminario, de sus resultados y productos, el proceso debe continuar en el interior de cada una de las organizaciones e instituciones participantes. Igualmente, resalta la responsabilidad que nos convoca en la gran movilización por la paz y en el compromiso de hacer de este documento una herramienta política de acción para abrir la incidencia y fortalecer la interlocución política en los territorios, máxime cuando la paz territorial está sujeta a muchos desafíos.

Ojalá que a la vuelta de diez o veinte años las generaciones futuras puedan tener acceso a estos documentos y a otros, resultado de la acción de organizaciones hermanas afines al tema, en bibliotecas públicas, comunitarias y privadas, o como material de referencia para el estudio de la Cátedra por la Paz.



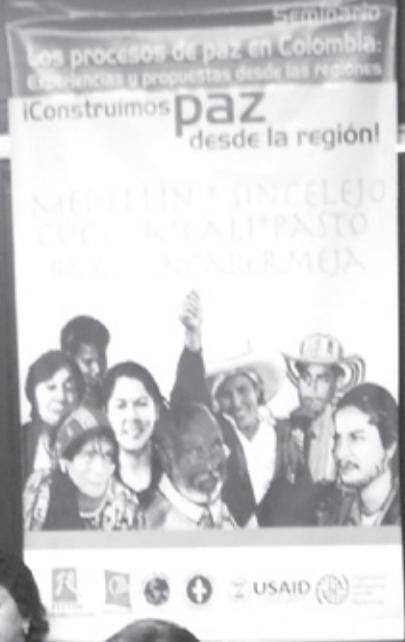
¡Construimos paz desde la región!

GLOBAL
FUNDACION



USAID

Pasto - Nariño



Reconocimiento

El presente documento de propuestas de paz, ha sido posible por el esfuerzo, aporte y contribución de las siguientes organizaciones sociales e instituciones del departamento de Nariño y de la ciudad de Pasto participantes en las sesiones del seminario:

Parmenio Cuéllar, exsenador nariñense; Mario Miguel Fajardo, Asesor de Paz de la Gobernación de Nariño, y los delegados del Equipo Técnico de la Agenda de Paz para Nariño, Juan Pablo Villota, de IMP; Aura Eraso, de la Corporación Nuevo Arco Iris, y Jaime Mejía, de la Universidad de Nariño.

Igualmente representantes de experiencias regionales como: Gustavo Moncayo de la Fundación Caminantes por la Paz (FUCAMPAZ), el CIMA Joven de San Lorenzo, la Iniciativa del Sector Montañoso de Samaniego, la Federación de Juntas de Acción Comunal en Nariño, el Pacto Local de Paz de Samaniego, la Escuela de Derecho Propio de los Pastos de Guachucal, la Asociación Cabildo de Género de Mujeres Indígenas de Cumbal, la Agencia de Desarrollo Local (ADEL), representantes de la Mesa Municipal de Víctimas de Pasto, Ipiales y Samaniego, las Asociaciones Esperanzas del Mañana y Trabajando por Tu Futuro, el Fondo Mixto de Cultura de Nariño, la Diócesis de Tumaco con el Servicio Civil por la Paz y el Teatro por la Paz, IMP Región Pacífico, REDEPAZ Nariño, la Asociación de Mujeres Lideresas del Pacífico Nariñense (ASOLIPNAR), la Asociación de Mujeres Samanieguenses, el Equipo Promotor Nariño y Semillas de Paz así como la OIM Nariño, la Escuela de Reparaciones de la UARIV en Nariño, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, la Gobernación de Nariño, la Personería de Pasto, la Defensoría del Pueblo, delegados de las diferentes facultades de la Universidad Mariana, la Fundación Aldea Global y la Fundación Bitácora Ciudadana.

I. Contexto

Nariño: tierra firme, pluriétnica y mestiza, con mar y frontera

El departamento de Nariño se encuentra ubicado al sur de Colombia, entre los departamentos de Cauca y Putumayo, el océano Pacífico y la frontera con el vecino país de Ecuador. Compuesto por 1.660.087 habitantes según censo (2005/2011), Nariño está conformado por las zonas de Llanura del Pacífico (Costa), Región Andina y Vertiente Amazónica (Sierra), con 3.265 km² y con la mayor representación pluriétnica del país: afrodescendientes, indígenas, mulatos y mestizos.

Es un territorio predominantemente rural, con categoría minifundista y medianamente con propiedad colectiva. En el actual plan de desarrollo se encuentra dividido geopolíticamente en 13 subregiones donde se agrupan sus 64 municipios. El departamento cuenta con un alto desempeño en la economía informal y muy poco desarrollo agroindustrial. Su ingreso no depende de la industria sino del comercio, lo que lo pone en desventaja frente a otros departamentos del interior del país, lo cual se refleja en los altos índices de desempleo, pues la mayor fuente y expectativa de trabajo en los municipios es la administración pública.

La posición geográfica de Nariño le permite adquirir una ubicación estratégica en materia de comunicación entre el interior del continente suramericano con el océano Pacífico. Por el hecho de hacer parte del cordón oriental transamazónico, interconectar varias rutas que se entrelazan con otras regiones de carácter mundial. Sin embargo, esta ventaja de conectividad ha sido aprovechada para el desarrollo de actividades ilegales tales como el contrabando de productos perecederos y no perecederos, el tráfico de armas, el narcotráfico y la movilización de grupos ilegales, entre otros fenómenos.

Históricamente, Nariño es reconocido como “territorio de paz”, pero la realidad de los últimos años lo ha convertido en un territorio de violencia, pues el conflicto armado se ha filtrado en la dinámica de la población, causando sufrimientos por toda clase de hechos victimizantes, el asentamiento de los grupos al margen de la ley—como FARC, ELN, paramilitares y las hoy llamadas

“bacrim”— involucrados en el cultivo, procesamiento y comercialización de la hoja coca o la amapola, producto de la migración de estos cultivos al sector montañoso y las zonas abandonadas por el Estado, sin presencia institucional y con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas.

El mapa del conflicto se mueve constantemente y se registra un gran impacto de violencia en todo el territorio nariñense, lo cual ha generado un panorama cada vez más complicado para los procesos sociales y ha provocado el debilitamiento de todas las formas organizativas, tanto en las zonas rurales como urbanas, ya que la violencia cruzó todas las fronteras y comenzó a afectar a todo el departamento.



II. Documento regional

Iniciativas de paz en el departamento de Nariño

Ingrid Cadena Obando¹

Retomar para escribir la historia y reescribir el futuro

Por muchos años, la guerra y la paz han hecho parte de la cotidianidad de las comunidades y hablar del movimiento de paz en Nariño es algo que solo pueden hacer quienes lo vivieron e hicieron parte de las acciones, propuestas, proyectos, mesas de trabajo y discusión establecidos aproximadamente a partir de 1996 y 1997 y que decidieron reaccionar frente a la situación de violencia que se comenzaba a vivir en esos años. Aunque se han hecho grandes esfuerzos por retomar y escribir la historia de las experiencias de construcción de paz desde las comunidades, falta mucho por recopilar, decir y reconocer. Con grandes esfuerzos de la población civil, las organizaciones, la institucionalidad y la cooperación internacional, se ha tratado de incidir en la construcción de la paz en el departamento.

Respuesta de la población civil frente al conflicto

Es importante hacer referencia a las dinámicas sociales de reivindicación popular y regional de las cuales el referente más destacado es el movimiento denominado “Inconformes”, el cual existió de 1981 a 1991, a partir de los educadores/as organizados en el movimiento sindical del magisterio de Nariño (SIMANA), proyectado a otros sectores sociales que lucharon por la defensa de intereses regionales frente al abandono histórico de los gobiernos centrales. Los movimientos sociales en Nariño tomaron fuerza en 1996, cuando se hicieron exigencias al Gobierno nacional a través de acciones como la toma del puente de Rumichaca, para presionar acuerdos de inversión en infraestructura, desarrollo económico y demandas políticas y sociales.

¹CADENA, O. (2014). Apartes de la ponencia Iniciativas de paz en el departamento de Nariño. La autora es psicóloga social comunitaria, especialista en pedagogía de la creatividad, tecnóloga en sistemas y tiene estudios en derechos humanos, DIH y todo el tema de víctimas. Es coordinadora en Pasto del seminario Los Procesos de Paz en Colombia.

Estos acuerdos, en su mayoría, fueron incumplidos y a finales de los años 90 las comunidades no solo debieron enfrentar el conflicto social, la pobreza y el abandono del Estado, sino la llegada de un fenómeno que en un principio generó una gran ola de recursos a muchas poblaciones, antes en total pobreza, pero que traería gravísimas consecuencias en el futuro: la llegada de los cultivos de uso ilícito al departamento.

Por la misma época, a nivel nacional ya se estaba trabajando una apuesta de paz que exigía el fin de las acciones violentas en todo el país a través del Movimiento Nacional de Paz, que logró llegar a Nariño, motivando acciones de convivencia en el territorio a partir de la primera Semana por la Paz realizada en Pasto en el año de 1996, a través del Programa Nacional de Reinserción, como parte del proceso de negociación que se dio con los grupos armados.

Un hecho que marcó a las organizaciones sociales, a las instituciones y a la comunidad en general, fue el Paro Armado del Putumayo en el año 2000, el cual tuvo una duración de aproximadamente 79 días, como algo que jamás se había presenciado en la región y que llevó a muchos sectores de la sociedad a unirse y trabajar por las poblaciones afectadas, porque las consecuencias del paro superaron todas las capacidades institucionales del departamento. La Iglesia, encabezada por la Diócesis de Pasto, convocó en ese momento a manifestarse y actuar a través de una Mesa de Trabajo de carácter ciudadano que reunió a instituciones, organizaciones, sociedad civil, gremios, fuerza pública y la Iglesia, con el propósito de llevar alimentos hasta la frontera con el Putumayo y lograr incidir de alguna manera para mitigar los efectos del paro armado.

Como resultado de esta movilización ciudadana, se consolidó el movimiento de paz en Nariño en el año 2000, como una propuesta que comenzó a gestar acciones de incidencia y de paz en la región. Con la llegada de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ), se logró incidir entre los años 1999 y 2008 en diferentes municipios de Nariño y otros departamentos del sur de Colombia, con iniciativas ciudadanas como la creación de la Mesa Departamental por la Vida, la Justicia y la Paz, un escenario político de participación ciudadana en la búsqueda de la paz liderado por la Iglesia católica y la sociedad civil, la cual logró convocar y comprometer en su accionar a la alcaldía de Pasto y a la Gobernación de Nariño que, entre otras cosas, realizó la Semana por la Paz, marchas y movilizaciones por la paz, la construcción de documentos de análisis sobre la situación del conflicto

armado y denuncias públicas frente a los efectos del desplazamiento forzado, los ataques de la guerrilla, la toma de la base militar de Patascoy, el Plan Colombia y las fumigaciones.

La Mesa por la Paz de Nariño alcanzó a consolidarse e incidir en la región por espacio de cinco años, una labor que repercutió en el sostenimiento de las acciones por la paz que posteriormente fueron retomadas por las organizaciones sociales y de sociedad civil. Ejemplos vigentes, como la Semana por la Paz, continúan abriendo las posibilidades de encuentro y articulación, en un trabajo por la paz que no se agota en estos 18 años y que se reproduce en las subregiones del departamento.

Experiencias de paz en Nariño desde las regiones

Once años de iniciativas de paz (1997-2008)

Como aporte de la población juvenil en la región, surgió un proceso universitario que logró llegar a todas las universidades de Nariño, Pasto y Cauca entre los años de 1997 y 1999, motivando acciones de convivencia desde pequeños espacios de trabajo en el municipio, transformado posteriormente en la Red Juvenil de Paz, como un proceso ciudadano adscrito a la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la guerra (REDEPAZ).

Se gestaron diferentes propuestas que llegaron a todo el departamento, como el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad en 1997; la Red Juvenil de Paz, con la estrategia de constructores y constructoras de paz de 1997 al 2010; el Movimiento de Niños y Niñas por la Paz, con la estrategia Manos a la Paz en los años 1999 al 2003; el proyecto Cien Municipios de Paz de 1999 a 2002; el acompañamiento y seguimiento a las comunidades afectadas por las fumigaciones del Plan Colombia de 1999 a 2004; la creación de la Fundación para la Paz en el Sur de Colombia – Bitácora Ciudadana adscrita a REDEPAZ, con presencia en Nariño, Cauca y Putumayo en el año 2000; el proyecto “Hacia la participación de las mujeres en la construcción de la paz” en 2001 y 2002; la audiencia pública: “violación de derechos humanos en Nariño” con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la campaña de sensibilización de la población civil colombiana frente a la impunidad promovida por la Corte Penal Internacional en el 2001; las Mesas por la Verdad, la Vida y la Reconciliación desde las Víctimas entre los años 2001 al 2004; el proyecto “Cien experiencias de participación ciudadana

y seguimiento electoral” en 2002 y 2003; la Cumbre de Autoridades Locales del Sur de Colombia en el 2002; la Escuela de Constructores y Constructoras de Paz, con la promoción de la pedagogía de la paz y los Consejos Municipales de Paz del 2003 al 2006; el proyecto “Fortalecimiento y acompañamiento a las víctimas y organizaciones de víctimas” en el 2007 y 2008, con la Estrategia del Movimiento de Madres por la Vida; la conformación de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) en municipios como Pasto, Buesaco, Tumaco y Samaniego, entre otros, del 2003 hasta el 2014, y la celebración de la Semana por la Paz, que ha sido una iniciativa que empezó en el 1996 y ha continuado hasta hoy.

De esta manera y en este escenario, se logró consolidar, sensibilizar y motivar la participación de la sociedad civil, destacándose los proyectos “Cien Municipios de Paz y Experiencias de Participación Ciudadana”, con acciones de convivencia y paz en diferentes municipios de todo el sur de Colombia y,

en Nariño, en municipios como Tumaco, San Pablo, Ipiales, Tablón de Gómez, Samaniego y Pasto, mediante la conformación o fortalecimiento de las Mesas por la Paz y la Declaratoria de Territorios de Paz del Grupo Scout No. 6 Quillasingas, el Barrio Popular y el Barrio Nuevo Sol de Aranda en Pasto, el corregimiento de Aponte y los municipios de San Pablo y Samaniego, entre muchos que se consolidaron, lo cual motivó al mismo tiempo procesos de niños y niñas, grupos juveniles, grupos de mujeres, población en situación de desplazamiento y víctimas del conflicto armado, todos a favor de la paz y en contra de la guerra que les tocó vivir pero que no era suya.

Samaniego: Territorio de Paz (1998-2000)

Como una apuesta de las comunidades y la Alcaldía Municipal de Samaniego (1998-2000), para contrarrestar el conflicto, la corrupción administrativa de años anteriores, la desinstitucionalización y el olvido del Estado, así como los permanentes ataques y hostigamientos de la guerrilla y las diferentes formas de violencia que afectaban a la población, decidieron los pobladores declararse en Territorio de Paz y la sociedad samanieguense se unió para construir una cultura de diálogo, concertación, convivencia y generar espacios de participación con las instituciones públicas, privadas, educativas y la comunidad en general, con el firme compromiso de convertirse en verdaderos constructores y constructoras de paz.

Pacto local de paz de Samaniego (2004-2006)

La nueva propuesta de paz y convivencia desde la Alcaldía de Samaniego en el periodo 2004-2006 surgió cuando los samanieguenses exigieron a los grupos armados una solución política y negociada al conflicto armado, que tuviera en cuenta el sentir de las comunidades y se articulara a los procesos de paz adelantados por el Gobierno nacional; ello, en carta abierta que dirigieron a los grupos armados presentes en la zona, mediante la cual se declararon neutrales y autónomos frente al conflicto armado, comprometiéndose a buscar formas pacíficas de resolver los conflictos desde el Pacto Local de Paz.

Plan alternativo de las gobernaciones de Nariño y Cauca (2001)

Frente a la preocupación por el tratamiento que daba a esta región el Gobierno nacional respecto de la problemática de los cultivos de uso ilícito, los gobernadores del sur de los departamentos de Nariño y Cauca (2001-2003) propusieron elaborar un Plan Alternativo el cual surgió de la convicción de que el Plan Colombia incentivaba la guerra y las fumigaciones, generando efectos negativos como el incremento de los conflictos sociales, el desplazamiento, el aumento de la violencia y la pobreza de la región. La propuesta buscó dar continuidad a una política, asumida por la comunidad indígena del Cauca, relativa a la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito como la amapola. Experiencia que fue asumida por organizaciones sociales a través de los planes de vida y de mejoramiento de las comunidades con una perspectiva de desarrollo integral y sostenible, enmarcada en la reconstrucción económica, social y cultural, dentro de un plan alternativo a la intensificación del conflicto armado.

Consejos Municipales de Paz (2011)

En Nariño se hizo sensibilización con REDEPAZ frente al significado de los Consejos Municipales de Paz entre los años 2001 y 2003, pero no fue sino hasta el año 2010 cuando la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, en el periodo 2008-2011, promovió la construcción de propuestas de reconciliación y paz en la región con la formulación del Plan de Acción Departamental en Derechos Humanos, cuyo principal resultado fue la conformación de 18 Consejos Municipales de Paz.

Tumaco, constructor de paz (2001-2014)

En la Costa Pacífica nariñense, quienes motivan y desarrollan acciones y programas para la construcción de la paz y los derechos humanos son la Diócesis de Tumaco y la Pastoral Social, articuladas a organizaciones sociales, líderes e instituciones. Realizan anualmente “Acciones por la Vida”, como han denominado el aporte desde las comunidades a la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos, tales como: Viacrucis por la Vida y Día Internacional de la Mujer, cuando en Tumaco más de 700 mujeres de distintas organizaciones de base, instituciones y ONG invitaron a la población a manifestarse contra la violencia doméstica, el abuso sexual y la discriminación; el Teatro por la Paz, como una propuesta reconocida regional y nacionalmente que destaca la importancia del teatro en los procesos de transformación de conflictos, construcción de paz, alternativa de negociación y promotor de empoderamiento para la conquista de nuevos espacios en la vida cotidiana; la Semana por la Paz en Tumaco, que se realiza cada año, como una propuesta de educación y movilización por la paz y la dignidad, con la conmemoración digna del asesinato de Yolanda Cerón Delgado, directora de la Pastoral Social muerta el 19 de septiembre de 2001 en manos de paramilitares; las Escuelas de Animadores/as Comunitarios por la Paz entre los años 2009-2010, con el fin de apoyar el crecimiento de nuevos líderes al servicio de la comunidad en temas como derechos humanos, manejo de conflictos y acompañamiento sicosocial, y la Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense, que abrió sus puertas en el año 2014 y en la cual se recoge la Galería de la Memoria hecha en años pasados, un espacio dedicado a construir la memoria colectiva de las personas víctimas de la violencia.

Adicionalmente, se destaca en Tumaco un fuerte movimiento de las mujeres, de las víctimas del conflicto armado, de las organizaciones de comunidades afrodescendientes y defensores de los derechos humanos, que en determinados momentos adquieren una trascendental importancia porque, a pesar de una violencia sistemática, que viene creciendo año tras año, han logrado sacar adelante apuestas desde las comunidades para mejorar las condiciones de vida de su población, escenarios que hacen parte de experiencias como ASOLIPONAR, FUNVIDA, RECOMPAS, REDEPAZ, IMP, entre muchas otras expresiones que toman fuerza en este municipio.

III. Enfoques de paz y reconciliación

En el contexto actual se entiende la paz como el respeto a los territorios y el derecho a vivir con tranquilidad y en armonía; se entiende también como la nueva ciudadanía en la cultura de la participación activa y crítica desde las comunidades, con una dimensión de lo público a partir de la justicia social y el cumplimiento de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta la pluriculturalidad.

La paz no solo es un concepto personal, la paz empieza por el reconocimiento de lo colectivo y del territorio; por eso se debe construir desde los aportes de la cosmovisión de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Nariño, sumado a las experiencias y pensamiento de las nuevas generaciones, donde sean incorporadas las voces de las mujeres, los jóvenes, los niños y las niñas y las víctimas del conflicto armado y social que se vive en todos los rincones del país.

La paz como derecho y complemento a la verdad, al perdón y la justicia, debe ser vista más allá de la negociación del conflicto armado y la dejación del uso de las armas en el marco de una confrontación que ha generado víctimas en todo el país. Por tanto, la paz exigible como derecho debe ser considerada como un proceso asociado a cambios estructurales (en el ideal de un desarrollo social y humano sostenible) y a la garantía de otros derechos como la educación, la salud, el empleo y la no repetición de los hechos de violencia que afectaron a las comunidades.

La construcción de paz debe apuntar al reconocimiento del territorio local, regional y nacional, que no es sinónimo de infraestructura para la paz y que, por el contrario, debe generar una estructura social y humana a través de un proceso encaminado a fortalecer la soberanía y la autonomía de los pueblos indígenas, comunidades afro y campesinos, considerando la consulta previa y la concertación como principio de buena fe entre todos los actores involucrados y como un mecanismo que aporta desde el conocimiento de las mismas comunidades a la construcción de agendas legítimas; teniendo en cuenta que un escenario de reconciliación es la aproximación social de la construcción de la verdad, el perdón, la justicia y las garantías de no repetición.

En Nariño se han realizado innumerables esfuerzos para la definición de propuestas de construcción de paz y en este sentido, como resultado del

seminario “Procesos de Paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las regiones”, realizado en la ciudad de Pasto, se propone, bajo las consideraciones de un ejercicio de mesas ciudadanas a través de encuentros reflexivos y de análisis, tener en cuenta anteriores agendas y propuestas elaboradas desde las comunidades así como presentar recomendaciones con la finalidad de ser tenidas en cuenta en la construcción de nuevas iniciativas locales y regionales de paz, que deberán promoverse desde diferentes sectores, organizaciones, instituciones y sociedad civil en el departamento.

Elementos constitutivos de la reconciliación

- ✓ No puede haber reconciliación si no hay una pedagogía de paz.
- ✓ Se debe hablar de una reconciliación a nivel social, que supere la simple delimitación entre víctima y victimario.
- ✓ Es necesario el fortalecimiento en la conformación de redes sociales de víctimas, con procesos ligados a la participación ciudadana.
- ✓ Es preciso reconstruir la historia no contada, no solo de los hechos violentos, sino de los ejercicios y acciones de paz que han surgido paralelamente en las comunidades.
- ✓ Se debe procurar la construcción del derecho en relación con el deber de hacer justicia, obtener la verdad y llegar a la reparación con garantías de no repetición.
- ✓ Se necesita la construcción de políticas públicas efectivas para la reintegración y la reparación integral.
- ✓ Hay que considerar que la tarea del movimiento por la paz no termina con la firma de los acuerdos; al contrario, se requiere reconfigurar y direccionar las acciones que lleven a integrar el proceso de construcción de escenarios de paz en el posacuerdo.

No nos podemos quedar en la disertación y en el concepto de reconciliación; es necesario que se reconozca lo que ya se ha hecho, explicándolo a partir del cuadro de reconciliación que retoma la posibilidad de construir la reconciliación a partir de la:

VERDAD: organización en el territorio de procesos de preparación de los victimarios, la sociedad y la institucionalidad para satisfacer el derecho de conocer la verdad (admisión, transparencia, revelación, claridad) así sea como reparación simbólica y/o proceso e investigación judicial; dignificar, exaltar la memoria de las víctimas u otras medidas que contribuyan a resarcirlas moralmente por los daños y pérdidas sufridas o aprestar y fortalecer los Comités Territoriales de Justicia Transicional.

MISERICORDIA: organizar en el territorio los procesos de preparación a las víctimas, la sociedad y las instituciones para el acceso a una misericordia con merecimiento. (Aceptación, gracia, apoyo, compasión, cicatrización). Cualificar la implementación de las medidas de satisfacción en la reparación individual y colectiva de las víctimas, articuladas con y contribuyendo a configurar escenarios ciertos de reconciliación.

JUSTICIA: dar respuesta a las demandas de la agenda social, en términos de equidad y justicia social. Es decir, articular la atención y ayuda humanitaria al desarrollo territorial, con respuestas estructurales a las causas del conflicto armado interno colombiano. (Igualdad, buenas relaciones, enderezar las cosas, restituir).

PAZ: acompañar y facilitar la participación de las víctimas para su incidencia en el punto quinto de los acuerdos de La Habana. Cualificar y tejer en torno de las iniciativas y procesos de las víctimas para contribuir a la construcción social de la paz y la reconciliación desde lo local. Fortalecer estructuralmente la Política Nacional de Garantías de No Repetición. Acompañar a los entes territoriales municipal y departamental y a los respectivos CTJT en el diseño e implementación de las órdenes, medidas e instrumentos definidos en el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 252 N°. 5 del decreto reglamentario 4800 de 2011, que establecen la competencia y función de los CTJT en cuanto a “Adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, programas, proyectos y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración” y hacer un seguimiento mancomunado por parte de la sociedad civil, el sector político, el sector privado empresarial y la comunidad internacional, en fuerte alianza. Fortalecer y cualificar la labor de visibilizar las capacidades locales para la paz. Articular a los ministerios nacionales en una estrategia territorial para la promoción y realización de una pedagogía social para la reconciliación nacional.

IV. Lecciones aprendidas de los procesos de paz

A partir de la experiencia del seminario se lograron identificar, entre otras, las siguientes lecciones:

- ✓ Es muy poco lo que se conoce de los procesos de paz en Colombia, por eso es importante conservar y reconstruir la memoria histórica desde los territorios, desde quienes vivieron las experiencias de violencia y paz en el país.
- ✓ Los diálogos de paz no deben ser la coyuntura que provoque apresurar las acciones de “consulta” con las comunidades, procesos en los cuales las víctimas y las comunidades no se han visto ampliamente representadas en sus posiciones frente al conflicto armado y en la construcción de propuestas de paz. Si bien la institucionalidad debe brindar estos espacios de discusión, también debe garantizar una participación amplia y una representación clara desde los diferentes sectores, sin permitir que esto sea tildado de “utópico o complejo”, dado que se tienen referentes de que los procesos de paz sí son posibles.
- ✓ Es relevante prepararse, corregir y no repetir los errores de otros procesos de paz, siendo definitiva la preparación y aprestamiento de las víctimas, de los victimarios y de las poblaciones para lograr su encuentro dentro del proceso y aplicación de los instrumentos normativos de justicia transicional, cuyo propósito y fin último será alcanzar la paz y la reconciliación.
- ✓ Los acuerdos de paz deben darse a conocer y difundir en los territorios, respetando las dinámicas propias de cada región, con la claridad de que la información abierta a la comunidad sobre los avances y acuerdos garantizarán su cumplimiento y definirán también qué hacer en caso de incumplimiento.
- ✓ Es necesario que a través de los Consejos Municipales de Paz y la sociedad civil en los territorios se cuente con las condiciones necesarias para hacer seguimiento a los acuerdos y a la implementación de los mismos.
- ✓ Teniendo en cuenta que la paz es un derecho fundamental y de obligatorio cumplimiento, se hace necesario convocar las voluntades del Estado y de todos los grupos ilegales que vulneran los derechos humanos en el departamento de

Nariño a que cumplan con los acuerdos y no continúen generando violencia en este territorio.

- ✓ A partir de los procesos de paz se han reconfigurado las organizaciones sociales y el movimiento por la paz, debido a los cambios y transformaciones que se requieren en cada contexto y tiempo; por eso, la tarea del movimiento por la paz no termina con la firma de los acuerdos. Al contrario, se requiere direccionar las acciones que conlleven integrar propuestas de participación efectiva en la construcción de escenarios de paz.
- ✓ Los procesos de paz tienen sus costos; la paz siempre ha tenido enemigos. Los costos han hecho referencia a las garantías políticas, como fueron los casos de la UP, del Frente Popular y otros referidos a organizaciones, líderes o lideresas provenientes de los procesos y que se proyectaron en la vida civil dirigiendo exigencias de reformas estructurales.
- ✓ En la búsqueda de la paz no es inútil ningún esfuerzo, sobre todo cuando las regiones son escenarios complejos en los dilemas que esta plantea.
- ✓ La paz es un tema de decisión y construcción ciudadana y también de políticas de Estado, porque a esta la construyen la sociedad y el Estado, pero se presupone una actitud abierta al tratamiento de los conflictos y a la superación de las causas que los hicieron posibles. Se trata de un propósito que lleva una base material en su resolución.
- ✓ Las lecciones aprendidas que dejaron los periodos de los acuerdos de paz, lograron la multiculturalidad y variedad de los procesos organizativos así como la sensibilización de las personas. Se cultivó un pensamiento más social y de derechos y surgió un pensamiento alternativo y diferente.
- ✓ Los acentos que ponen los gobiernos y los repertorios de los actores armados juegan un papel importante a la hora del tratamiento frente al tema de la paz. Por ejemplo, la política del gobierno de Uribe no puso acento en la negociación o salida negociada, sino en el tema de la seguridad. Igualmente, consideró que no existía un conflicto armado sino una amenaza terrorista.
- ✓ Lo ideal es que los países en conflicto tengan una política de paz, en el entendido de que la paz debe verse como transformadora, de ahí la necesidad de un buen esquema de negociación del cese del conflicto armado.



✓ En Nariño, la paz debe ser entendida más en lo colectivo, como las mingas y la construcción colectiva, y desde lo pluriétnico, desde la cosmovisión de cada pueblo de Nariño, retomada a partir de lo que se promulga en la constitución, como el buen vivir, la felicidad, la tranquilidad y el vivir en paz en el territorio. Estos deben ser los lineamientos que ambienten una agenda de paz en la región.



V. Propuesta para la construcción de una agenda de paz en Nariño

La construcción de la paz deberá comenzar por el reconocimiento de las capacidades locales y por la caracterización del conflicto que afectó al departamento de Nariño, que está asociada a un proceso de reconstrucción histórica desde los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y víctimas. En tanto no se trata de una historia reciente, es también un llamado a no olvidar, a recurrir a la memoria con la clara finalidad de llegar a la verdad y la justicia sobre los hechos ocurridos.

En este proceso hacia la construcción de una agenda de paz es necesario respetar el derecho a la consulta previa e informada como única garantía de los pueblos indígenas y afros para reconocer sus principios, cosmovisión y el desarrollo autónomo que cada comunidad necesita, y que se dé cuenta de las afectaciones sufridas por las comunidades en el marco del conflicto armado, con todos los efectos de la violencia. Al mismo tiempo, es importante avanzar en retomar y mostrar los aportes que tanto las comunidades urbanas como las rurales han elaborado en torno a la construcción y diseño de iniciativas, así como políticas públicas locales y regionales para la búsqueda de la paz.

Se trata de un acumulado que implica de manera urgente y efectiva establecer un Observatorio de Paz, como espacio encargado de recoger las agendas y experiencias del departamento y consolidar sus propuestas en aras de la definición de una ruta hacia la construcción de un proceso social de paz de Nariño. En esa medida, este escenario deberá establecer una metodología participativa y concertada entre los diversos actores de la sociedad, definiendo los lineamientos y la elaboración de informes con el propósito de incidir en las agendas departamentales y municipales. Sin embargo, el propósito de la construcción de paz es lograr un tejido de vida asociado con un proceso simultáneo de alfabetización y educación a través de estrategias coherentes que conduzcan a formar, divulgar, analizar y construir escenarios de paz desde un ejercicio individual del ciudadano, de la familia -dentro y fuera de las instituciones educativas- y desde todos los niveles de formación, donde se integren líderes y lideresas de las organizaciones sociales y comunitarias, se respete la participación y el pensamiento de las mujeres, jóvenes, niños y niñas y se incluyan los procesos de resistencia a la violencia. Para generar una mayor comprensión es importante garantizar la formación política que contribuya a la construcción de agendas públicas desde los principios de confianza, inclusión, participación, corresponsabilidad, valor humano y

social: por eso, consideramos que para lograr la paz se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

- ✓ Cerrar las brechas profundas que dividen la sociedad y lograr el cambio de los esquemas de la violencia y la guerra.
- ✓ Construir y conservar la memoria histórica en el territorio, lo vivido en las experiencias de violencia pero también lo avanzado, con los testimonios de buenas prácticas de paz desde las voces de sus poblaciones y conservando la riqueza cultural, étnica y ancestral. En lo posible, más que textos, reconocer los espacios de resignificación de derechos y oportunidades, propiciando escenarios de reconciliación.
- ✓ La construcción de la paz desde las regiones y lo local debe pasar por el reconocimiento pleno del territorio y sus capacidades para la paz, que no es sinónimo de infraestructura para la paz. Se necesita generar una estructura social y humanista con un proceso encaminado a fortalecer la soberanía y la autonomía de los pueblos; en esta medida, es importante considerar la consulta previa como principio de buena fe entre las partes y como mecanismo que aporta desde el conocimiento de las mismas comunidades a la construcción de propuestas legítimas y concertadas con las bases.
- ✓ La paz como nutriente social anima a fortalecer la participación, consulta y decisión de los espacios ya constituidos, como las mesas departamentales y municipales de víctimas y las mesas de mujeres y jóvenes en Nariño, y promover nuevos espacios intersectoriales en los que se propicie el conocimiento desde diversas experiencias comunitarias para la construcción de la política pública de paz.
- ✓ La construcción de la paz como un ejercicio colectivo requiere la promoción de rutas de intercambio, concertación e incidencia del movimiento social por la paz en Nariño, en un ejercicio donde el compartir la palabra a través de una verdadera comunicación social abra la puerta al reconocimiento de los colectivos que reúnen las organizaciones sociales, sectores poblacionales y las bases.
- ✓ Articular los planes de vida de los pueblos indígenas y comunidades negras, como experiencias de colectividades que se han autoconstruido según sus aprendizajes y sabidurías. Estas cuentan con sus propios planes de vida, en lo rural y urbano, a partir de sus condiciones particulares y de los aspectos comunes en el proceso de construcción de iniciativas de paz, teniendo en cuenta que la paz esencialmente es el respeto de los derechos humanos

y de los territorios. Por eso, una propuesta de paz coherente, sostenible y sustentable amerita la apertura de escenarios para la incidencia en la ruta de la construcción endógena de planes de vida que se constituirán en insumos para el proceso de planeación participativa en la elaboración de los planes de desarrollo.

- ✓ Sistematizar las experiencias de la vulneración de derechos y de las buenas prácticas desde las bases, ofreciendo las herramientas técnicas y tecnológicas a las organizaciones para la construcción de la memoria, gestión del conocimiento y conservación de las mismas, con principios y fines de denuncia, educación, verdad y justicia, más la exigibilidad y reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, asumiendo los derechos humanos como eje transversal de todo el proceso.
- ✓ Enriquecer el análisis del conflicto en el departamento de Nariño con el propósito de fortalecer los distintos escenarios de reconciliación, teniendo en cuenta que un escenario así es la aproximación social de la construcción de la verdad, el perdón, la justicia y la paz.
- ✓ Hacer más visible las consecuencias del conflicto desde los temas de tierras y el estado de abandono o despojo de las mismas, explotación y gran minería, minas antipersonal, MUSE, trampas explosivas, violación de niños y niñas, reclutamiento forzado y vinculación de niños y niñas al conflicto armado, analizando la presencia de grupos armados como las FARC, el ELN, las “bacrim”, el narcotráfico y la delincuencia común para entender cómo el conflicto armado afecta los territorios colectivos y los grupos étnicos en Nariño.
- ✓ Fortalecer los procesos sociales de construcción de paz desde la cultura y la comunicación como bien público, a través de estrategias potencializadoras de la reconstrucción de la sociedad, desde nuevos lenguajes, símbolos e imaginarios que faciliten la comprensión del conflicto y su resolución como elemento consustancial a toda sociedad. Una construcción de paz debe vincular la cultura con el territorio, considerando las prácticas y formas de ser de las comunidades, con expresiones de resistencia y paz.
- ✓ Se debe reconocer el compromiso cívico y social de distintas organizaciones y personas para que la sociedad en su conjunto se pueda sumar a este proceso social de construcción de la paz. Se requiere motivar diversas formas culturales y artísticas —como el teatro por la paz, colchas de la memoria, etc.— como espacios de formación y transformación social.

VI. Proyecciones

A partir del reconocimiento de los diferentes escenarios regionales se espera que esta propuesta pueda articularse y aportar a nuevos procesos de reflexión en el departamento de Nariño y que apoye otras actividades similares en construcción de paz que se están promoviendo desde diferentes sectores como las mujeres, los jóvenes, las víctimas, las organizaciones sociales y la propuesta que en 2014 presentaron las diócesis de Pasto, Ipiales, Tumaco, ADEL, PNUD y la Gobernación de Nariño, denominada “Agenda de Paz para Nariño”.

Por esta razón, la propuesta, resultado del seminario “Procesos de Paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las regiones”, fue llevada a la gobernación y al equipo técnico encargado de la construcción de la Agenda de Paz para Nariño, al Foro Departamental de Víctimas de Nariño por la Paz de Justicia Social (realizado en Pasto en el mes de julio), al Foro Regional y Nacional de Víctimas (realizado en la Cali en el mes de agosto) y a diferentes escenarios en los cuales se están generando encuentros y debates para contribuir a la construcción de la paz. Esta propuesta tiene en cuenta, entre otras recomendaciones para una agenda de paz en Nariño, las siguientes:

- ✓ Enriquecer la agenda de paz para Nariño con la participación de diferentes actores y organizaciones del territorio para que se le dé mayor legitimidad y que no sea un instrumento de un periodo de gobierno sino una ruta de la sociedad nariñense.
- ✓ Desde la perspectiva de la consecución de una paz estable y duradera, es primordial generar condiciones en el territorio para lograr un escenario de paz y reconciliación.
- ✓ Desde la experiencia en la construcción de escenarios de paz se reconoce que los tiempos no pueden ser limitados, porque se tienen topes en la incidencia institucional y se exigen logros a un corto, mediano y largo plazo, respetando las dinámicas de los territorios y sus organizaciones, que deben seguir un proceso con el mejor tiempo posible para lograr la mejor participación de los diferentes sectores y actores del departamento.
- ✓ A través de ejercicios de análisis y concertación se propone fomentar y animar la participación de las organizaciones, de tal forma que se promuevan escenarios de soberanía frente a la consulta previa que se requiere para la

construcción de propuestas relativas a la paz en el departamento. En ese sentido, la agenda de paz para Nariño deberá animar la participación íntegra y representativa de las organizaciones de base y de las comunidades. Debe haber una agenda respetuosa de los procedimientos de consulta interna en cada organización, que aborde las concepciones sobre la paz así como las estrategias e instrumentos para lograrla.

- ✓ Se debe pensar en una agenda de paz y de reconciliación como fin último de todo el marco normativo de justicia transicional, para sustentar una contribución al logro de una paz estable y duradera, cumpliendo con la generación de condiciones para llegar al fin de la guerra y el posconflicto.
- ✓ Se requiere generar un liderazgo desde la Iglesia, las ONG, los gremios, las universidades, el movimiento social y la población en general, para que haya más participación en el proceso.
- ✓ Es necesario involucrar diferentes herramientas en la construcción de una agenda de paz, porque hay otros ejercicios y experiencias significativas que deben ser incluidos y pueden aportar desde su propia vivencia a encontrar estrategias de resistencia desde las comunidades (como los testimonios de Andares del Sur, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la guerra REDEPAZ, Samaniego Territorio de Paz y el Pacto Local de Paz), con aprendizajes como la importancia de involucrar a las poblaciones más allá del proceso de validación o vinculación a una propuesta ya formulada, retomando los conocimientos y la legitimidad de las comunidades.
- ✓ La construcción de la agenda de paz debe ser un escenario cívico, incluyente, con difusión y con una estrategia pedagógica que pueda llegar a todas las poblaciones, donde en cada una de las 13 subregiones de Nariño y en lo local se hagan mesas de diálogo que recojan las ideas, problemáticas y situaciones que deben ser tenidas en cuenta para la construcción de contextos y propuestas pertinentes para el departamento.
- ✓ Se debe promover y fortalecer una mesa ciudadana que haga el análisis general y depure las propuestas e iniciativas regionales, para lograr organizar los puntos centrales de las subregiones y realmente construir una política de paz, con control social y veeduría, que permita medir los resultados, hacer seguimiento y dar cumplimiento a los acuerdos establecidos.
- ✓ Generar movilización social ligada al cabildeo y un gran pacto social nariñense de todos los sectores que contribuya a despolitizar la agenda, con el propósito de generar la movilización nariñense con directrices claras

frente a la política pública y que obligue a trabajar de manera conjunta a la sociedad civil, organizaciones, entidades e instituciones del departamento y municipios, buscando un punto medio que articule y retome el sentir de toda la sociedad nariñense.

- ✓ Retomar e implementar los Consejos Municipales de Paz, como un órgano constructor y regulador de las políticas de paz, promoviendo la participación y la reconciliación según la propuesta de cada municipio.
- ✓ Incluir la agenda de paz en el Observatorio de Paz, para que esta herramienta y/o espacio permita hacer la reconstrucción de los escenarios de paz del departamento de Nariño y, a la vez, sea quien construya la ruta de seguimiento y evaluación de las acciones de paz que surjan de las negociaciones de La Habana y de cualquier otro acuerdo de paz. Ello implica poder fijar en Nariño la territorialización de los acuerdos y los verdaderos hechos de paz que se determinen con las propias comunidades y con las víctimas.
- ✓ Frente al papel de las instituciones estatales en estos procesos, se entiende que es necesario el relacionamiento del Estado para que los entes territoriales responsables de los diferentes programas y políticas públicas lleguen a las comunidades y superen espacios consultivos y formales de participación, de tal manera que la política de paz y de víctimas sea una política estructural y no coyuntural.

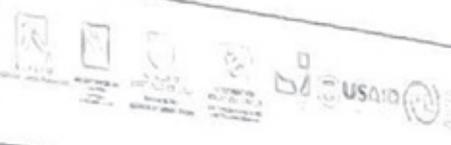


Seminario
Los procesos de paz en Colombia: Experiencias y propuestas desde las regiones



Lugar: Centro Cultural en Cali
Calle 5 N. 6-65
Fecha: 15 de mayo y 16 de mayo de 2014
Sectores: Grupo 02 (BAM, BAP)
Grupo Finalizado (América Latina)

Informes: Nelson Adrián Franco
Correo: nelsonadri@unicef.org.co
Teléfono: 301 528 2470



Cali - Valle del Cauca



Seminario
Los procesos de paz en Colombia: Experiencias y propuestas desde las regiones

Lugar: Centro Cultural de Cali
Carrera 5 N. 6-05
Fechas: 15, 16, 29 de agosto y 12 de septiembre de 2014
Sesiones: Cuatro (32 horas) 8 A.M. - 5 P.M.
Cupos limitados (inscripción previa)

Informes: Nelson Adrian Franco
Correo: nelsonadrianfranco@gmail.com
Celular: 301 583 2470





Reconocimiento

El presente documento de propuestas de paz, ha sido posible debido al esfuerzo, aporte y contribución de las siguientes organizaciones sociales e instituciones con amplia trayectoria en el tema de construcción de paz y derechos humanos en el departamento del Valle del Cauca y Cali, participantes en las sesiones del seminario:

Proceso de Comunidades Negras (PCN) de Buenaventura, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Organización Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), Ruta Pacífica de Mujeres, Unidad de Organizaciones Afrodescendientes del Cauca (UOAFROC), Corporación Nuevo Arco Iris, Fundación para el Bienestar y el Desarrollo Social, Círculo de Periodistas de Cali, organizaciones sindicales, Asesoría de Paz del Municipio de Cali, Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos, Arquidiócesis de Cali a través de la Pastoral Social de Buenaventura y la Vicaría para la Reconciliación, entre otras.

I. Contexto

De la región: un valle con mar, río y montaña

El Valle del Cauca es un territorio privilegiado en el contexto nacional, no solo por su ubicación geográfica, con Buenaventura como puerto de salida al océano Pacífico, sino también por sus riquezas, que proveen tierras fértiles, zonas de reserva y protegidas y variados pisos térmicos que se expresan en temperaturas que van de los 17° C a los 30° C, los cuales han favorecido el establecimiento de una fuerte cadena agroindustrial, además de que la costa pacífica posee antecedentes de rica producción aurífera. El departamento cuenta con 42 municipios, limita al norte con los departamentos de Chocó y Risaralda, al sur con Cauca, al oriente con Quindío y Tolima y al occidente con el océano Pacífico. Las dos cadenas montañosas que lo rodean -cordilleras occidental y central-, la salida al mar y su cercanía al departamento del Cauca han sido tanto un factor de disputa, en términos del control de los recursos del territorio, como un medio estratégico para el accionar bélico y el desarrollo de operaciones armadas y de narcotráfico, entre otros fenómenos.

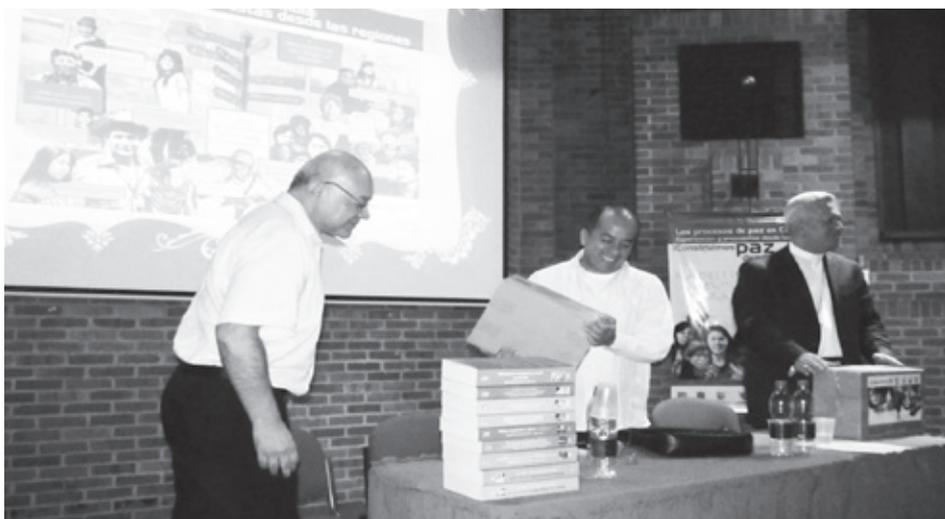
Las características geográficas del departamento han sido propicias para el desarrollo de actividades de vital importancia para la economía del país y la presencia de centros políticos, económicos y de infraestructura que le agregan importancia a la región, pero también lo han sido para el desarrollo de cultivos de uso ilícito, el narcotráfico y disputas territoriales por recursos. Cuenta con un puerto marítimo donde circulan -por exportación e importación- diferentes materias primas que aprovisionan a todo el interior del país. De la misma manera, posee el segundo afluente del río Magdalena de mayor importancia en el territorio nacional y su capital es epicentro de bienes y servicios en todo el suroccidente del país. Esta relevancia está atravesada contradictoriamente por una histórica ausencia del Estado en algunos territorios, una concentración excesiva de riqueza, un desarrollo desigual y una distribución inequitativa de las oportunidades, que favorece a unos pocos, lo cual ha generado una fuerte desigualdad territorial rural-urbana y centro-periferia, problemáticas sociales e insatisfacción de amplios sectores de la población, principalmente en los jóvenes, así como luchas reivindicativas de muchas de sus comunidades.

La riqueza también hace presencia en la diversidad demográfica; la gran cantidad de población afrodescendiente e indígena es uno de sus atributos. Se estima que en el departamento hay 26 resguardos indígenas de los 796 que



tiene el país y 31 territorios colectivos de comunidades afrodescendientes de los 159 del total nacional. Según censo del DANE, en el año 2005 el total de población en el departamento fue de 4.015.051, de los cuales 1.092.169 eran población afrocolombiana, que corresponde al 27.2%, y 22.313 población indígena, que corresponde al 0.56%. La población afro se encuentra ubicada principalmente en los municipios de Cali, Buenaventura, Jamundí, Palmira y Candelaria, y la población indígena en los municipios de Cali, Buenaventura, Dagua, Jamundí, Florida, Pradera y Bolívar. Contribuye a esta diversidad el proceso migratorio proveniente sobre todo del Pacífico colombiano por desastres naturales y de orden económico, profundizado desde finales de los años 90 hasta la actualidad por efectos del conflicto armado.

Algunos de los aspectos que han impactado particularmente las dinámicas de violencia y conflictividad en el departamento es el narcotráfico—el cual desde los años 80 ha generado altos índices de homicidios en las ciudades—, el control de territorios para el desarrollo del negocio, la cooptación de espacios de poder y el debilitamiento de la institucionalidad democrática.



II. Documento regional

Construcción de la paz en la región del Cauca y del Valle del Cauca: contexto, iniciativas, retos y desafíos

Federico Guillermo Muñoz¹

La mediación como un paso fundamental para construir confianza: el papel de un intelectual de la paz

La Arquidiócesis de Cali, bajo la coordinación de monseñor Darío de Jesús Monsalve, ha impulsado dos espacios que contribuyen a la construcción de la paz en el Valle del Cauca: el Observatorio de Realidades Sociales y la Mesa de Impulso para la Reconciliación y la Convivencia. Las contribuciones de la Iglesia católica a la construcción de la paz, a través de personas como el arzobispo Monsalve, también han implicado una labor de mediación con el Ejército de Liberación Nacional. El alto jerarca de la Iglesia participó en el acto de liberación del canadiense Jernoc Wobert, geólogo de una multinacional minera, ocurrido el 27 de agosto de 2013 en algún lugar del sur de Bolívar, el cual contó con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Monsalve es consciente de su labor y contribución a un proceso tan delicado: “ya he participado en tres liberaciones del ELN y también he tenido algunos encuentros en cárceles con prisioneros de esta guerrilla, que están autorizados para conversar conmigo. Esto lo he hecho para construir la paz” (Periódico El País (2014). “El desarme parcial es una limosna”: Monseñor Darío de Jesús Monsalve”, disponible en: <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/desarme-parcial-limosna-monsenor-dario-jesus-monsalve>.

Sus reflexiones sobre los diálogos de paz de La Habana apuntan a que el proceso aumente su visibilidad, sea más participativo, tenga mayor claridad en los mensajes a la sociedad colombiana y cumpla con unas mínimas condiciones para poder avanzar hacia un escenario de construcción de la paz en el que “la participación política es el camino indispensable y hay que

¹ MUÑOZ, Federico G. Extracto del documento “Construcción de la paz en la región del Cauca y del Valle del Cauca: contexto, iniciativas retos y desafíos”. El autor es comunicador social y periodista, magister en sociología y candidato a doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Granada. Profesor de estudios políticos de la Universidad del Valle.



favorecerlo, no se debe tener temor frente a esto ni actitudes de revancha. Frente a la condonación de las penas creo que lo importante es establecer las responsabilidades, decir la verdad, lograr justicia y hacer la reparación.

La reparación implica que se cree nuevamente el tejido social y se construya paz como compromiso colectivo.²

La Minga por el Derecho a la Vida, el Territorio y la Paz (mayo de 2012)

Esta Minga se propuso unos objetivos claros: “1) Visibilizar la agresión sistemática de la guerra en campos y ciudades. Ambientar iniciativas y hechos de paz. Sembrar en el corazón de la población la importancia de construir la paz. 2) Presentar ante la opinión pública una propuesta de consulta popular que nos permita a los colombianos y colombianas decidir y mandar el derecho y el deber de la paz” Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), 2012. “Porque la vida es sagrada, la paz la construimos los pueblos”, disponible en: <http://www.nasaacin.org/noticias/3-newsflash/3930-porque-la-vida-es-sagrada-la-paz-la-construimos-los-pueblos>

En la “Declaración de paz de Caloto y Villa Rica al pueblo colombiano” se reflejó una postura contundente de cómo comprenden el proceso de construcción de la paz: “la llave de la paz es la movilización de las comunidades”. La Minga tuvo una razón de ser y las actividades se realizaron “para concretar una certeza: que solo la movilización social, ciudadana, popular, comunitaria, abrirá el camino de la paz en Colombia. No serán el Estado ni la guerrilla los que aceleren la necesaria apertura de una negociación política para terminar el conflicto armado interno; los tiempos de la guerra, los cálculos de los ejércitos, se convierten en obstáculos reales a la apertura de tal escenario”.³

Pero, ¿qué tipo de paz exigieron?: “No queremos una ‘paz neoliberal’ ni una paz para facilitar el camino a la minería, las transnacionales y la locomotora minera, ni una paz sin cambios en el sistema político, sin modificar nada de

² Periódico El Pueblo (2013). “Participación política de desmovilizados es indispensable”: arzobispo de Cali”, disponible en: <http://elpueblo.com.co/participacion-politica-de-desmovilizados-es-indispensable-arzobispo-de-cali>.

³ Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), 2012. “Marchamos juntos porque todas las causas son nuestras”, disponible en: <http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/125-kueta-susuzza/3960-marchamos-juntos-porque-todas-las-causas-son-nuestras>.

la estructura socio–económica más desigual de todo el continente. Nosotros y nosotras queremos otra paz. Queremos una paz democrática. Una paz con cambios en la vida política y económica. Porque la única opción realista es acompañar el fin del conflicto armado con transformaciones importantes en las condiciones políticas y sociales de la vida nacional. El alcance de esas transformaciones no puede ser decidido en un espacio cerrado entre los actores armados, sino precisamente en un espacio amplio y plural de la sociedad colombiana, donde todos los actores políticos, económicos y militares acuerden un nuevo pacto político que permita a la sociedad vivir sin guerra y al movimiento popular luchar por la realización de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales sin temor a la muerte, al señalamiento o al desplazamiento”.⁴

AFAVIT: “Una gota de esperanza en un mar de impunidad”

Un caso emblemático de empoderamiento de las víctimas en sus procesos de exigibilidad de derechos en la región, ejemplo de perseverancia, de diversos mecanismos de afrontamiento desplegados y de recuperación frente a las adversidades, lo constituye la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT). Surgió en 1995 en el marco de una sistemática victimización de pobladores rurales de Río Frío y Trujillo (Valle del Cauca), y de control social y territorial por parte de una siniestra alianza entre narcotraficantes del norte del Valle, fuerzas paramilitares y miembros de las fuerzas militares.

Son diversas las iniciativas de memoria desplegadas por AFAVIT, de las que quisiéramos destacar: el Parque Monumento, el Muro Sombra del Amor, la Galería de la Memoria, la Peregrinación anual, la Ermita del Abrazo y el Sendero Nacional y Latinoamericano de la Memoria de las Víctimas. En el primer caso, AFAVIT cree que “el Parque Monumento es algo muy importante para nuestro municipio, es la memoria de nuestras víctimas que en silencio claman justicia para que nunca vuelva a suceder algo igual, para que la sociedad comprenda que no podemos olvidar lo que pasó, para que las futuras generaciones estén conscientes de no cometer estos errores” (AFAVIT 2009. Tomado de: <http://afavit.com>).

⁴ Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), 2012. “Declaración de paz de Caloto y Villa Rica al pueblo colombiano”, disponible en: <http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/125-kueta-susuza/3960-marchamos-juntos-porque-todas-las-causas-son-nuestras>.



Pero no ha sido sencilla la historia de AFAVIT, ya que quienes hicieron tanto daño a la comunidad y cambiaron su vida para siempre siguen ensañándose en procesos considerados de revictimización. El miedo ronda las montañas de Trujillo, escenario de una reconfiguración narco-paramilitar con nombre propio: Los Rastrojos, que controlan parte de la zona rural. La incertidumbre está latente.

Pese a este contexto adverso y riesgoso para la exigibilidad de derechos y a la ausencia de garantías para continuar sus luchas en contra del olvido y la impunidad, AFAVIT es una iniciativa ejemplar que ha conseguido visibilizar su situación a nivel nacional e internacional y continúa fortaleciéndose.

*El acompañamiento a las comunidades victimizadas:
en busca de estimular el empoderamiento y la exigibilidad de
derechos*

La Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC) ha enfocado sus actividades en las múltiples relaciones entre el conflicto y la minería, organizando actividades como el “Simposio Minero–Energético: Despojo en tiempos de seguridad democrática y unidad nacional” (Cali, Universidad del Valle, agosto 12 de 2011) y el “II Simposio Minero–Energético del suroccidente colombiano. Despojo en tiempos de Paz” (Cali, Universidad del Valle, diciembre 10 de 2012). Esto, en el marco de su particular forma de comprender el proceso de construcción de la paz.

Estos espacios de reflexión compaginan con su labor de acompañamiento a poblaciones victimizadas o en riesgo de victimización, la cual se materializa en la cercanía a ciertos procesos organizativos como la comunidad afrocolombiana del corregimiento de La Toma (Suárez, Cauca), que practica la minería artesanal y a la que han intentado desalojar de su territorio, en un acto que NOMADESC comprende como un despojo. El Consejo Comunitario de La Toma ha intercedido ante la Corte Constitucional en busca de la protección de sus derechos colectivos y étnico–territoriales, labor que ha acompañado esta ONG, documentando cómo: “...a la comunidad de La Toma se le está violando el derecho a la vida, a la paz, al territorio ancestral, a la dignidad y a la alimentación, entre muchos otros derechos, pues después de haber vivido 375 años en este territorio se le desconoce el derecho de propiedad”⁵.

⁵ Asociación para la Investigación y la Acción Social” (NOMADESC, 2010). “Boletín Informativo. Relatos desde La Toma: Presencia, Solidaridad y Resistencia frente al desalojo de mineros afrodescendientes”, disponible en: <http://nomadesc.blogspot.com/search/label/multinacionales%20en%20el%20norte%20del%20cauca>.

*Documentar las violaciones a los derechos humanos
y las infracciones al DIH: una labor fundamental para diseñar
medidas de reparación integral*

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” contribuye a visibilizar la crisis humanitaria y la presión de los actores armados sobre algunas comunidades rurales de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Esta red surge en el 2000 “como proceso alternativo de resistencia, protección, formación, prevención y denuncia en materia de Violaciones al DIDH.”⁶

Sus actividades son: “1. Apoyo a iniciativas organizativas. 2. Emisión de documentos públicos dirigidos a instancias no gubernamentales, gubernamentales e intergubernamentales, personalidades y luchadores populares en formatos de acciones urgentes, denuncias públicas, informes especiales, comunicados de prensa y material audiovisual (videos). 3. Radicación de oficios de denuncia ante instancias gubernamentales e intergubernamentales. 4. Conformación y seguimiento de casos en la base de datos de la red. 5. Apoyo y asesoría jurídica a través de la Barra de Abogados de la red. 6. Actividades de formación”⁷

*Con la reflexión y el análisis la academia
contribuye a la construcción de la paz*

La Red de Universidades para la Paz (REDUNIPAZ) es un espacio que reúne a distintas universidades del país con el objetivo de reflexionar sobre el proceso de construcción de la paz y la necesidad de una salida política y negociada al conflicto armado. Este espacio de encuentro, diálogo y reflexión periódicamente realiza encuentros nacionales. Entre octubre 23 y 26 de 2013 organizó en Cali el VI Congreso Nacional y el I Internacional “La academia construyendo caminos para la paz. Alfredo Correa de Adrés”.

No solo participaron personas provenientes de la academia sino que fue un espacio plural, con la presencia y contribución de algunas víctimas, funcionarios públicos, miembros de distintas iglesias, una delegación de la

⁶ Página web Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes. Tomado de: http://www.reddhfc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54

⁷ Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano (2014). “Quiénes somos”, disponible en: <http://www.reddhfc.org>.



guardia indígena, miembros de la comunidad afrocolombiana, grupos de mujeres organizadas (Ruta Pacífica de las Mujeres) y sindicatos. Las FARC-EP y el ELN enviaron videos sobre los aportes de este tipo de iniciativas y destacando la intención de ampliar el panorama de posibilidades para detener la guerra, transformar el conflicto armado, social y político, fortalecer el proceso de construcción de la paz y avanzar hacia el horizonte de la reconciliación. El siguiente encuentro se realizará en Ibagué.



III. Elementos clave sobre los conceptos de paz y reconciliación desde el Valle del Cauca

Frente a la idea de paz y reconciliación los aportes son los siguientes:

- ✓ La paz se percibe como el poder soñar con una sociedad transformadora y distinta que respete la diferencia, incluya los jóvenes y las mujeres y permita la diversidad.
- ✓ La paz va más allá del conflicto armado y de los acuerdos en La Habana.
- ✓ La paz empieza en la vida cotidiana, en los quehaceres y roles que las personas desempeñan.
- ✓ La paz debe verse como respeto al territorio y la permanencia en él con titulación colectiva, desarrollo incluyente y consulta previa, libre e informada por las comunidades negras e indígenas, donde cese la guerra y sus hijos tengan derecho a los ríos, montañas y valles que ancestralmente han habitado.
- ✓ La paz es un anhelo ancestral de los pueblos indígenas el cual han venido construyendo desde los territorios. Para las comunidades indígenas el territorio representa la relación con la madre tierra y, por ello, el punto de partida para la construcción de la paz. Si el territorio está afectado no hay garantía de paz.
- ✓ La paz se construye desde los territorios, con las comunidades, teniendo en cuenta los horizontes culturales de cada región y entendiendo que en los territorios urbanos se desarrollan distintos tipos de conflictos y situaciones de violencia que deben ser tratados y abordados desde propuestas locales de paz construidas con las gentes.
- ✓ La paz es educación y construcción de ciudadanía. Implica fomentar una pedagogía para la paz, la convivencia y mecanismos no violentos de resolución de conflictos. Esta dimensión comprende los distintos espacios de la vida social.
- ✓ La construcción de la paz requiere la revisión del rol de los grandes medios de comunicación en esta tarea. Es necesario que los medios de comunicación eviten la polarización, la desinformación y la estigmatización frente a las problemáticas y realidades de la región.



- ✓ La desigualdad social impide la paz en la medida en que existe inequidad y concentración de las riquezas. Es necesario un compromiso político de las élites para cambiar el modelo; transformar la visión económica del monocultivo y el extractivismo para que se generen condiciones duraderas para la paz.
- ✓ La reconciliación es un proceso que debe tener en cuenta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como el esclarecimiento histórico sobre las responsabilidades de los actores del conflicto, visto desde las propias comunidades y procesos sociales.
- ✓ La reconciliación demanda una mirada crítica al pasado que no ponga punto final de perdón y olvido, de tal manera que se pueda garantizar la no repetición de las violaciones, muchas de las cuales se han mantenido invisibilizadas.
- ✓ La reconciliación debe pasar por procesos de reparación y de verdad así como de perdón colectivo y de restablecimiento de derechos.
- ✓ La reconciliación implica que pensemos, conjuntamente con el Estado, las comunidades y los grupos insurgentes, cómo reintegrar y acoger a la población desmovilizada por parte de la sociedad.
- ✓ La reconciliación tiene dimensiones de cambio y de transformación estructural y cultural en lo social y político, indispensables para lograr la paz.

IV. Lecciones aprendidas de los procesos de paz

1. Hay un desconocimiento histórico de lo que ha pasado en la región, es decir, a partir del ejercicio realizado se evidencia que muchas organizaciones dedicadas de manera permanente al trabajo de la construcción de paz desconocen las particularidades de la historia regional y las implicaciones e impactos del conflicto armado. Esa es una primera barrera para apostarle a la construcción de la paz.
2. El Frente Nacional surgió para apaciguar la violencia liberal y conservadora. A nivel de la burguesía y del poder se comenzó a generar que los ingenios azucareros se volvieran gremios para fortalecer el monocultivo en la región, lo que consolidó una burguesía conservadora que se enquistó como élite de poder. Otro asunto importante es que mientras se estaba firmando el pacto de paz entre liberales y conservadores, con la figura del Frente Nacional, se estaba tratando de acaparar las tierras de campesinos, indígenas y negros. Se dice que en el norte del Cauca nunca se ha visto la paz porque las tierras las poseen los terratenientes.
3. Tras los acuerdos de paz en la década de los ochenta del siglo XX ocurrió la persecución política a excombatientes y organizaciones sociales y políticas que eran vistas como base social de las insurgencias (Unión Patriótica, Frente Social, A Luchar). En el caso del M-19, el acuerdo de paz permitió la apertura de una constituyente y muchos de sus líderes visibles ingresaron a la vida política democrática, con presencia hasta la actualidad.
4. Los procesos de desmovilización vividos con el M-19 y el MAQL dejan aportes diferenciados en lo que respecta a la situación de los excombatientes rasos y su reinserción en la vida social. En el caso del M-19, muchos de los excombatientes y de las milicias que fueron soporte de esta estructura insurgente quedaron solos y terminaron vinculándose a grupos armados y delincuenciales, que se convirtieron en factor de terror en las comunidades. Mientras tanto, en el caso del movimiento indígena insurgente MAQL, que actuaba especialmente en el departamento del Cauca, el proceso de reinserción de los excombatientes fue gestado y acompañado por las propias comunidades indígenas, las cuales crearon



las condiciones para acoger a los guerreros en sus territorios, de acuerdo con sus dinámicas culturales, por lo que el proceso de readaptación no generó impactos negativos para las comunidades.

5. El Consejo Nacional de Paz creado en el gobierno de Samper mediante la Ley 434 de 1998 fue importante porque instaló los Consejos Regionales y Municipales de Paz y formalizó las pautas de participación desde distintos sectores sociales en procura de la paz. Sin embargo, la situación política vivida con el “proceso ocho mil” generó, en el caso de la ciudad de Cali, una deslegitimación en dichos escenarios, por lo que no se sintieron repercusiones o impactos de este mecanismo organizativo y de participación. Los diferentes intentos de reactivación de estos espacios han sido infructuosos, dada la poca voluntad política por parte de algunos gobernantes.
6. La implementación del Plan Colombia favoreció un intervencionismo legal y autorizado del Estado, financiado por Estados Unidos, utilizado para la lucha contrainsurgente y en contra de los líderes sociales. Fue la época cuando se acentuó la guerra en la región, en el Caquetá y en el Putumayo. Bajo este plan, que dio comienzo a las fumigaciones masivas con glifosato, se afectaron irreparablemente los ecosistemas y las economías campesinas de pancoger, situación que vivieron comunidades del Pacífico y del suroccidente. Esta política favoreció el fortalecimiento de organizaciones paramilitares y aumentó el desplazamiento forzado de personas así como el traslado de cultivos a otras zonas del Pacífico colombiano, asuntos que generaron en las organizaciones sociales mayor conciencia política sobre las reales incidencias del citado plan. A escala regional, este ha tenido como desarrollo la persecución de grupos de narcotraficantes, lo que ha generado altos niveles de homicidio en la región, la disputa de territorios por parte de diferentes facciones y el surgimiento de otras nuevas por el control del negocio.
7. La Política de Seguridad Democrática, continuidad del Plan Colombia en la región, favoreció el fortalecimiento de las fuerzas militares en términos de infraestructura y número, pero se utilizó lo humanitario para llegar a objetivos militares. Hubo abusos contra la población civil, en algunos casos como escudo, por lo que esta resultó inserta en la disputa armada. La política opera mediante un lenguaje simbólico que simula control del Estado en el territorio nacional, en medio de la falta de presencia real de este en materia de garantía de derechos de las

comunidades rurales del país. La relativa seguridad en los territorios rurales no ha sido garantizada en las ciudades, lo cual muestra serias limitaciones en las lógicas de la seguridad ciudadana urbana.

8. El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue parcial. La mayoría de estos sigue operando como estructura armada y delincencial. Las que hoy se conocen como “bacrim” no son sino una nueva expresión simplemente mediática porque las lógicas y estructuras paramilitares siguen presentes en la región. Un ejemplo de ello se vive en Buenaventura, donde no hubo “desmovilización masiva” de paramilitares. Las redes que operaban siguen con su accionar de muerte y terror. También se reconocen lógicas de connivencia entre las Fuerzas Armadas y de policía y los grupos paramilitares.
9. Se menciona la importancia de un eventual proceso de paz con el ELN. En la región, las acciones insurgentes relacionadas con el secuestro de La María, y en lo que respecta a las FARC-EP el secuestro de los diputados, fueron pretextos para que gremios económicos y fuerzas militares favorecieran la incursión masiva de grupos paramilitares, los cuales empezaron a generar masacres y desplazamientos masivos.
10. En el actual contexto de diálogo y posibles acuerdos de paz con las FARC-EP y el ELN existe preocupación por parte de las comunidades por lo que puede llegar a significar que las guerrillas se desmovilicen y sus territorios queden a merced de grupos paramilitares y de multinacionales con intereses geoestratégicos. En muchas comunidades, la presencia de la guerrilla ha sido sinónimo de protección frente a las presiones que sobre el territorio ejercen multinacionales y grupos paramilitares. De nuevo, un ejemplo de ello es Buenaventura, donde los Consejos Comunitarios manifiestan sentir presión por la presencia de multinacionales en busca de concesiones para explotar los territorios. Existe la percepción de que la presencia de la insurgencia en estas zonas se convierte en un motivo para que las personas que quieren invadir sus territorios no lleguen con tanta fuerza y, en tal sentido, las comunidades tienen la preocupación de que en una eventual concreción de los diálogos de paz con la guerrilla estas tengan que salir.



V. Propuestas regionales de paz desde el Valle del Cauca

Las discusiones y análisis que se generaron sobre las dinámicas del conflicto y de los procesos de paz fueron parte de los insumos para la construcción de las propuestas de paz regionales. De la misma manera, también constituyeron valiosos aportes las contribuciones enviadas por la Ruta Pacífica de Mujeres de Cali, el Proceso de Comunidades Negras de Buenaventura y la Asociación de Municipios Usuarios Campesinos (AMUC). A continuación se presentan las propuestas de paz construidas:

1. La democracia es necesaria para que sea real la demanda de participación colectiva en las decisiones de la vida económica, política, cultural y social

Eje político

- ✓ Reactivar los Consejos Regionales y Locales de Paz.
- ✓ Fortalecer, desde lo individual y desde los movimientos sociales, las capacidades en torno a la construcción de una paz transformadora.
- ✓ Garantizar la verdadera participación y el diálogo en el proceso de construcción de paz, que integre las organizaciones sociales y políticas, los movimientos sociales, los sindicatos, las universidades, los colegios, los afrocolombianos, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los ambientalistas y las víctimas que pretendan el logro de la paz.
- ✓ Recuperar el Estado social de derecho, como garante de los derechos humanos y colectivos. (Garantías para ejercer la democracia participativa).
- ✓ Fortalecer espacios de construcción, profundización y discusión de las acciones y políticas de paz desde las regiones.
- ✓ Realizar un ejercicio de diseño regional que permita descentralizar el poder estatal de acuerdo con las vocaciones y necesidades de las regiones, y favorezca organizar el territorio según las necesidades de sus habitantes.
- ✓ Concertar la realización de ejercicios de planeación participativa, en especial la que involucra a territorios ancestrales, para que las comunidades tengan garantías de permanecer en ellos.

- ✓ Profundizar procesos de planeación participativa en las zonas urbanas, que ayuden a la solución de diversas problemáticas y expectativas de desarrollo local de colectividades en los barrios y comunas.
- ✓ Propiciar espacios para que los agentes, líderes sociales y comunitarios, interactúen desde sus experiencias y realidades con el Estado local y regional para el diseño y consolidación de nuevas políticas públicas.

Eje económico

- ✓ Propiciar la generación de mecanismos para la transformación del modelo económico, político y de seguridad del Estado en aras de la construcción de un modelo más equitativo e incluyente.

Eje sociocultural

- ✓ Dinamizar un gran movimiento por la paz, a partir del cual se generen una pedagogía y una educación ciudadana que favorezcan la cultura de paz y de convivencia pacífica.
- ✓ Transformar el modelo educativo, permitiendo la construcción de nuevos sujetos históricos donde prevalezca la solidaridad.
- ✓ Implementar procesos pedagógicos y educativos a largo plazo y desde la infancia para la construcción de un sujeto de derechos y en paz.
- ✓ Vigorizar iniciativas de fortalecimiento del Estado local y regional e iniciativas que persigan la corrupción y el clientelismo.
- ✓ Generar un proceso formativo de pedagogía y educación social y ciudadana, de cátedra de paz, que permita sensibilizar a diferentes grupos sociales y comunitarios para que no se repita la historia de violencia y guerra en el país.
- ✓ Fortalecer programas de formación en ciudadanía y derechos humanos que permitan la solución de conflictos y la reivindicación de derechos sin recurrir a la violencia.
- ✓ Establecer en los territorios estrategias que permitan la mediación y construcción de acuerdos y procesos de convivencia pacífica en conflictos sociales y comunitarios.



✓ Proveer mecanismos que permitan coordinar y aunar esfuerzos para la formulación, construcción y dinamización de acciones de consolidación de la paz.

2. El cese del conflicto armado es fundamental en el camino de la paz, pero un acuerdo no garantiza la consecución de la misma

Eje político

✓ Construir una ruta común para la paz que confluya en la gestación de un movimiento nacional e internacional para la paz e integre las organizaciones sociales y políticas, los movimientos sociales, las mujeres, los jóvenes, los ambientalistas, los sindicatos, las universidades, las víctimas, los indígenas, los afrocolombianos y los campesinos que pretendan el logro de la paz.

✓ Posicionar la solución política del conflicto como herramienta del movimiento por la paz, articulando las agendas humanitaria y social por la misma.

✓ Promover el desarme y la desmilitarización tanto del Estado como de la sociedad civil. No al salvoconducto para el porte de armas y no a las formas violentas de administrar control social y justicia.

✓ Diseñar y poner en marcha a escala urbana un modelo de prevención de la violencia.

✓ Elaborar propuestas que tengan como centro la construcción de una paz transformadora para la región del suroccidente colombiano, según la cultura y el territorio en su diversidad.

✓ Hacer de la paz transformadora un modelo de intervención y desarrollo de la región, que no se corresponda con efervescencias coyunturales.

✓ Plantear de una manera clara y precisa el rol de la fuerza pública, de modo que oriente sus esfuerzos para la consolidación de la paz y defienda los intereses de los ciudadanos.

✓ Implementar procesos integrales y concertados de desmovilización que permitan la vinculación efectiva de esta población a la vida en sociedad.

✓ Generar en el periodo de posconflicto líneas de investigación y observación en temas relativos a territorio, VJR, DDR, conflictividades,

violencia en ciudades, convivencia, construcción de paz, acciones colectivas y no violencia.

- ✓ Ampliar el término de la vigencia de la Ley 1448 de 2011, para continuar con los procesos de VJR.
- ✓ Fomentar la generación e implementación de iniciativas políticas y sociales que se estén llevando a cabo en las regiones en pro de la paz y la convivencia.

Eje económico

- ✓ Opciones productivas para la población víctima y/o en proceso de reintegración.

Eje sociocultural

- ✓ Conformación de redes comunitarias que posibiliten la atención individual y los grupos de apoyo comunitario con componentes de atención clínica especializada en psicología, psiquiatría y medicina general y especializada.
- ✓ Construir, realizar, impulsar y agenciar hechos de paz concretos en los territorios donde se está evidenciando el fortalecimiento de una cultura de violencia.
- ✓ Fortalecer políticas de igualdad de género, de interculturalidad y de inclusión e integración que permitan generar condiciones objetivas de igualdad de derechos.

3. Una paz duradera se logra si se eliminan las desigualdades sociales y se respetan los espacios de autodeterminación de colectividades diversas

Eje Político

- ✓ Programa de fortalecimiento organizativo y del tejido social de las comunidades negras, dirigido a consejos comunitarios, consejos interveredales, juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres y organizaciones de jóvenes, que tienda a recuperar la confianza, autonomía y respeto por las autoridades tradicionales y las formas de ejercer gobierno propio.



Eje Económico

- ✓ Formular propuestas de economía tradicional desde las comunidades étnicas, negros e indígenas.
- ✓ Adelantar reformas que permitan la democratización económica, ampliar el acceso a la tierra y disminuir la expansión de los monocultivos, garantizando la soberanía alimentaria del país. Revisar el modelo de los TLC que perjudican.
- ✓ Incidir en la dinamización y fortalecimiento de la economía solidaria como alternativa al modelo económico actual, mediante procesos de autonomía y empoderamiento comunitario.
- ✓ Diseñar y consolidar un plan nacional de retorno integral, que garantice a las personas que lo requieran la permanencia en su territorio, así como programas de salud, educación e infraestructuras comunitarias.

Eje sociocultural

- ✓ Propiciar escenarios de diálogo social e intercultural que permitan construir agendas de reconocimiento social a la diferencia, la integración, la aceptación de la diversidad y la mediación de conflictos entre diferentes grupos sociales.
- ✓ Vigorizar el fortalecimiento e implementación del modelo etnoeducativo y acceso a la educación superior.
- ✓ Impulsar prácticas ancestrales de intercambio económico y cultural para combatir el consumismo y la individualidad.

*4. La paz es económica, social, territorial y cultural
(está presente en los espacios cotidianos y empieza por la cama)*

Eje político

- ✓ Reconocer la autonomía administrativa de los grupos étnicos en los territorios ancestrales y realizar planes de vida que hagan parte integral del ordenamiento territorial.
- ✓ Tener derecho al territorio como expresión de paz, desde las culturas y en lo urbano y rural.

✓ Avanzar y profundizar el proceso de restitución de tierras y protección del territorio, sobre todo en zonas de conflicto, con participación del Gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, con presupuestos destinados para ello.

Eje económico

✓ Programas de fomento de las cadenas productivas, garantizando la autonomía alimentaria y la recuperación de productos propios.

✓ Capacitación y fomento de capacidades productivas a partir de las potencialidades del entorno urbano y rural, garantizando el acceso en los territorios.

✓ Creación del distrito especial integral de producción agroalimentaria, plan que se haría con la adquisición, retorno y restitución de las tierras y bienes que fueron arrebatadas durante la presencia del Bloque Calima en los años 2000 y 2004 en el extinto corregimiento de la Ruiza, y en los corregimientos Arenillo, Los Pinos, La Carbonera y El Retiro, sobre la hacienda La Ruiza en el suroccidente del Valle.

✓ Consolidar e implementar una propuesta de desarrollo agroindustrial que tenga como base la economía campesina.

✓ Diseñar un proceso de aprovisionamiento y distribución de productos agroalimentarios de manera local y regional a través de una política de soberanía alimentaria, que permita el desarrollo de la economía campesina y de productos propios de la región.

✓ Adelantar procesos de mejoramiento de condiciones de vida para los campesinos, indígenas y afros de la zona rural, a través de programas especiales de salud, educación, vivienda, recreación y deporte, fomento de la familia, unificación familiar, apoyo sicosocial, fortalecimiento de redes comunitarias, etc.

✓ Fortalecer y dinamizar alternativas económicas de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que permitan generar dinámicas incluyentes y solidarias.

Eje sociocultural

✓ Elaborar con las comunidades urbanas propuestas de paz desde las situaciones concretas, que permitan transformar sus realidades.



- ✓ Fortalecer el programa de recuperación de la identidad cultural y de prácticas ancestrales que impliquen componentes de medicina tradicional, gastronomía, autoridades tradicionales, recreación, cultivos tradicionales y rescate de prácticas mortuorias con enfoque de género y de edad.
- ✓ Construir procesos de reparación colectiva y simbólica que permitan reivindicar a las víctimas.

5. La paz y la reconciliación nacional demandan esclarecimiento histórico y que los diversos sectores de la sociedad asuman su responsabilidad en la generación y perpetuación del conflicto

Eje político

- ✓ Construir procesos de memoria y de reconciliación a nivel regional, que permitan el esclarecimiento de hechos y el establecimiento de responsabilidades, reconociendo que existen diferencias históricas, culturales, étnicas, etc.
- ✓ Realizar procesos de exhumación de fosas comunes en los corregimientos La Ruiza, El Arenillo y Los Pinos del municipio de Pradera para que las familias sepan qué pasó con sus familiares.

Eje económico

- ✓ Respeto y fortalecimiento de las formas de producción campesina y de minorías étnicas.
- ✓ Restitución de tierras modificando el marco jurídico de la Ley 1448 de 2011 para que sean reconocidos los derechos de las víctimas que fueron expulsadas de sus tierras antes de la Constitución de 1991.

Eje sociocultural

- ✓ Impulsar la transformación del rol de los medios de comunicación como agentes de paz.
- ✓ Fortalecer la actitud de reconciliación de los ciudadanos que contribuya a la construcción de paz en todas las regiones. Para una verdadera reconciliación es necesario ubicar en el centro a los seres humanos y cuestionar la violencia de manera permanente.

*6. La paz debe proponer otras relaciones con la naturaleza.
Es necesario construir una relación armónica de respeto
con ella y con los grupos étnicos que viven en los territorios*

Eje político

- ✓ Aplicar y fortalecer la consulta previa en los territorios donde se programen intervenciones estatales como requisito previo para el otorgamiento de licencias ambientales.
- ✓ Atender la región del Pacífico y combatir la política extractivista y de saqueo de los recursos naturales para generar una política de paz transformadora.

Eje económico

- ✓ Construir un modelo de desarrollo económico descentrado del paradigma desarrollista que ve la naturaleza como una despensa inagotable a la que hay que explotar.

Eje sociocultural

- ✓ Promover una educación que favorezca el cuidado y respeto por la naturaleza y todos los seres que viven en ella.

*7. La movilización y la protesta social son una expresión
y un derecho autónomo de las comunidades que debe ser respetado*

Eje político

- ✓ Fortalecer, impulsar, acompañar y apoyar las movilizaciones de sectores sociales y comunitarios en torno a la construcción de una paz transformadora.
- ✓ Reconocer a la sociedad civil como actor protagónico en la solución política del conflicto social y armado en el proceso de construcción de paz con perspectiva de un nuevo país.
- ✓ Exigir que cese la criminalización de la protesta social y todos los mecanismos de la guerra jurídica que pretenden deslegitimar y destruir las iniciativas y hechos de paz de las comunidades.



Eje sociocultural

✓ Promover el respeto de las diferencias políticas, sociales, de género, étnicas y culturales.



VI. Proyecciones

El seminario ha sido un camino, un buen inicio, el pretexto para encontrarse, volver a encauzar caminos y discutir como colectivo las posiciones ideológicas y políticas respecto de nuestras visiones sobre la paz. Este ejercicio ha dado frutos en el sentido de contribuir a alcanzar consensos en el nivel regional sobre las prioridades para tener en cuenta en un eventual contexto de posconflicto. De tal manera, esto ha sido una ganancia incalculable.

La propuesta, aún inacabada y perfectible, se percibe como una herramienta que permitirá avanzar con otros colectivos, organizaciones e instituciones para mejorarla, complementarla y empezar a propiciar acciones que permitan contribuir a construir paz desde nuestra región. Esta será una hoja de ruta de la esperanza colectiva de transformación y se pretende que sea una herramienta de vital importancia para discutir en las agendas públicas y particulares, y en los planes de desarrollo, pero sobre todo en los espacios de construcción cotidiana de la vida de los vallecaucanos.

La idea de consolidar un espacio regional ha sido definida por todos los participantes como una necesidad, algo deseable en lo cual trabajar. Dado que la dispersión y las individualidades han hecho mella en los trabajos y en su impacto, es la hora de trabajar concertada y colectivamente en este proyecto de la paz para Colombia. Sin embargo, el camino no es fácil: a veces habrá voluntad, en otras será necesario movilizarnos, y en otras actuar para generar incidencias y el logro de nuestros objetivos. En todo caso, quedó en evidencia que en la región hay sensibilidades, trabajo, convicción e iniciativas de gran valía para consolidar escenarios duraderos y transformadores de paz y convivencia en el país.

Lo que viene es un gran reto para quienes deseamos que se consolide la paz; por tanto, de manera conclusiva, nos permitimos proponer para la reflexión una serie de preguntas orientadoras sobre nuestro nuevo quehacer a partir de lo discutido, teniendo como eje la construcción de la paz y la reconciliación desde la región:



¿Cómo nos articulamos con otras experiencias de construcción de propuestas regionales de paz?

¿Cómo construir espacios de profundización, de mística, de esperanza, de sueños colectivos y compromiso en tiempos de paz?

¿Cómo hacemos entre todos un país con una paz solidaria, incluyente y transformadora?

¿Cómo se puede reivindicar el papel de las mujeres, los jóvenes y las minorías en el logro de una sociedad más igualitaria?

¿Cómo lograr hacer énfasis en lo que nos une, sin dejar de lado lo que nos diferencia, en la construcción de la paz?

¿Cómo financiar una gran agenda de construcción de paz regional con los recursos que habían sido destinados a la guerra y provenientes del narcotráfico?

¿Cómo fortalecer e incidir en los procesos políticos locales y regionales, que profundicen la democracia a nivel nacional y regional?

¿Cómo influir en la consolidación de instituciones democráticas que obedezcan a los intereses de la población, que sean libres de escenarios políticos permeados por la corrupción y los intereses privados?

¿Cómo formar ciudadanos y sujetos políticos incidentes y constructores de paz?

¿Cómo desmilitarizar y desarmar la vida en sociedad?

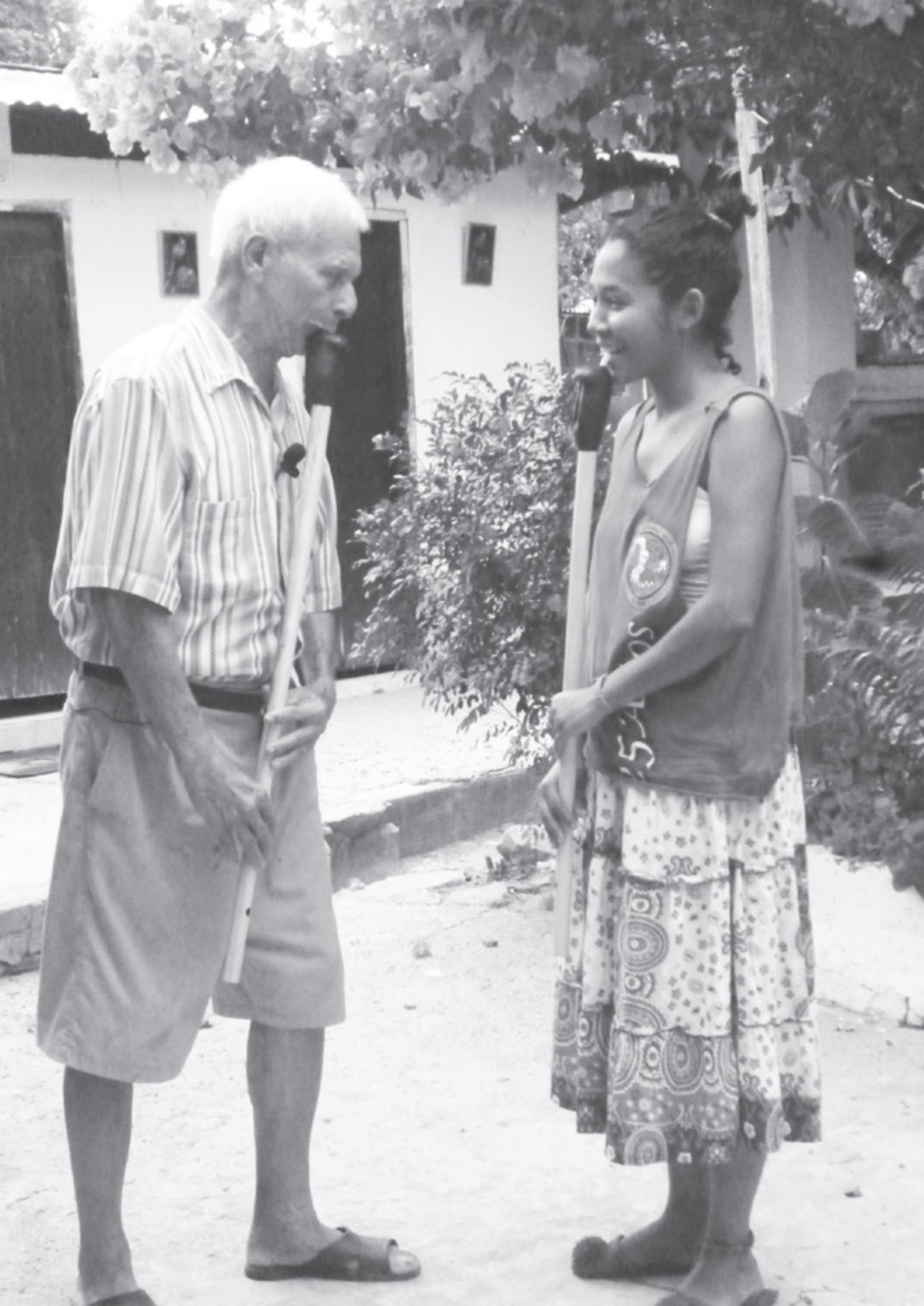
¿Cómo disminuir la violencia en las ciudades?

¿Cómo generamos escenarios de diálogo y construcción social e intercultural?

Desde el Valle decimos: ¡Es la hora de la paz!



Sucre - Montes de María





Reconocimiento

El presente documento de propuestas de paz, ha sido posible por esfuerzo, aporte y contribución de las siguientes organizaciones sociales e instituciones de Sincelejo y la región de los Montes de María, participantes en las sesiones del seminario:

Fundación Hijos de la Sierra Flor, DIAKONIA de la Paz, Red Campesina Monteriana, Red Voces y Sonido, Universidad CECAR, Corporación Nuevo Arco Iris capítulo Sucre, Red de Personeros Municipales, Corporación Nueva Esperanza, Corporación SÍ CARIBE, Fundación Palito Renace con Talento Social (PARETASO), MAMPUJAN, Fundación CEPROD, PICHILIN, Alta Montaña, MOVICE, Consejo Comunitario Nuevo Horizonte, Asociación para la Vida Digna y Solidaria de los Montes de María, Corregimiento San Rafael de Ovejas, Programa Desarrollo y Paz de Montes de María, Universidad de Cartagena, Semillero: Conflicto, Derechos y Paz del Centro de investigaciones Socio Jurídicas de CECAR, Mesa Campesina, Corporación Cultural Amistad con Cuba, Paz Caribe y Periodista de Paz.

I. Contexto

Sucre y la región de los Montes de María tienen una amplia y larga experiencia de movimientos sociales que en determinados momentos históricos ha aportado a la construcción de escenarios de paz desde una perspectiva de generar condiciones para el fortalecimiento de las organizaciones sociales de base, aumentar las capacidades de los gobiernos locales y, sobre todo, tener entornos de desarrollo económico necesarios para superar las brechas de la desigualdad y la inequidad en la región.

Es importante recordar que el municipio de Ovejas fue testigo de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y las guerrillas del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en la década de los noventa del siglo anterior; procesos de paz parcelados que, aunque contribuyeron a mejorar el clima de convivencia en la región, no fueron suficientes, toda vez que la espiral de la violencia alcanzó sus máximos niveles en la década del 2000 tras varias masacres perpetradas por grupos paramilitares.

A esta situación se le sumaron los constantes enfrentamientos entre la fuerza pública y las FARC, con los consecuentes impactos en la población civil. No obstante, desde 2007 la dinámica del conflicto armado ha cambiado de manera sustancial, como evidenciada el descenso, en su momento, de hechos victimizantes como la tasa de homicidio, situación que obedece a dos factores: al debilitamiento y retirada del territorio de las FARC y la desmovilización de los grupos paramilitares.

En el contexto actual existen nuevos elementos que afectan la construcción de la paz en la región, asociados a la presencia de grupos paramilitares, como la compra masiva de tierras por parte de multinacionales (Cementos Argos) en las regiones de los Montes de María, el Golfo de Morrosquillo y La Mojana, para el cultivo de árboles maderables y de biocombustible (palma de aceite y yuca industrial), que afectan seriamente el ambiente y la propiedad sobre la tierra y amenazan la pequeña propiedad y los cultivos de pancoger.

El latifundio, por efecto de la compra masiva de tierra a bajos precios, se expandió en zonas caracterizadas fundamentalmente como de minifundio, tales como los municipios de Ovejas, Chalán y Colosó, entre otros, lo que explica en gran medida los conflictos presentes, como el de la finca La Europa,



con más 1000 hectáreas, reclamada hoy por la empresa Arepa Don Chicho, después de más de cincuenta años de posesión y adjudicación por el INCORA a los campesinos.

Además de los anteriores elementos, una paz integral con justicia social debe mejorar las condiciones sociales de bienestar de la población en las zonas que por efectos de la confrontación armada resultaron afectadas en sus ingresos y bienestar social. Por ejemplo, en municipios como Colosó las necesidades básicas insatisfechas se incrementaron de un 59% a un 69%, igual que cientos de familias fueron desplazadas forzosamente y más de 125 pueblos resultaron desalojados a sangre y fuego en los Montes de María.

A estas circunstancias se suman otros elementos, como las alianzas parapolíticas, la corrupción en la contratación estatal, la captura del Estado local, la financiación de campañas con dinero del narcotráfico, la imposibilidad de competir los actores alternativos minoritarios, la cooptación de líderes y lideresas sociales y comunitarios y la corrupción del votante.

Todo esto ha traído como consecuencia la fragmentación y aniquilamiento de las organizaciones sociales. Existen también otros elementos, relativos a la niñez, que tienen que ver con los altos índices de violencia sexual, la utilización y reclutamientos de niños, niñas y adolescentes, y otros como la falta de escenarios de participación con poder de incidir en la política pública para influir en las decisiones sobre los territorios étnico – culturales.

II. Documento regional

Iniciativas y prácticas de paz desde lo local: la paz en concreto

Robín José Cerrá Álvarez¹.

La región tiene una amplia y larga experiencia de movimientos sociales que en determinados momentos históricos han aportado a la construcción de escenarios de paz desde una perspectiva que pretende generar condiciones para el fortalecimiento de las organizaciones sociales de base, aumentar las capacidades de los gobiernos locales y, sobre todo, lograr entornos de desarrollo económico necesarios para superar las brechas de la desigualdad y la inequidad.

El contexto de violencia en la región se tradujo en hechos victimizantes asociados a masacres, asesinatos selectivos, homicidios indiscriminados, desplazamiento forzado y amenazas que llenaron de terror los campos y poblados. Entre 1997 y 2003 los paramilitares desplazaron a unas 100.000 personas y mataron al menos 115 en masacres como las de Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, El Salado, Mampuján, Chengue y Macayepos. Se acabó con el tejido social que había construido la población. A punta de asesinatos y amenazas debilitaron la ANUC, las juntas de acción comunal, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos.

En su momento, como lo advierte Restrepo,² fueron múltiples las iniciativas para conjurar la situación de violencia en la región. Surgieron importantes experiencias de paz como la Mesa Sucreña, nacida de la convocatoria que hizo la Comisión de Conciliación, la cual realizó varias actividades; igualmente,

¹ CERRA, A., Robín. Extracto del documento “Iniciativas y prácticas de paz desde lo local: la paz en concreto”. Su autor es sociólogo, especialista en planificación del desarrollo regional, con estudios en gobernabilidad, DDHH y desarrollo económico local y una amplia experiencia de trabajo en programas de desarrollo y paz de los Montes de María así como proyectos de desarrollo comunitario. Es también docente de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR).

² Restrepo, José. (2014) Paz y Guerra en Sucre. Su autor es sociólogo, docente de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) y coordinador del seminario Los Procesos de Paz en Colombia y en Sucre.



la Mesa Caribe por la paz y la Reunión de Obispos del Caribe para tratar aspectos relacionados con la paz. Del mismo modo se impulsaron en algunos municipios del departamento, especialmente los de los Montes de María, los Consejos Municipales y el Departamental de paz, el cual nunca se reunió a pesar de haberse expedido una ordenanza.

Así mismo, se manifestaron otras iniciativas de carácter nacional como el Mandato Ciudadano por la Paz y la Red de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra. Conforme a estas iniciativas, se dieron en el departamento innumerables seminarios y talleres sobre la paz, entre los cuales se destaca el trabajo con las instituciones educativas Escuelas Territorios de Paz y Reporteritos de Paz.

Al escenario de violencia se sumaron otros, relacionados con la “parapolítica”, como resultado de años de clientelismo y de corrupción en lo local. Se trata del máximo fenómeno de cooptación del Estado en manos privadas, promovido precisamente por la clase política, que fue quien recurrió a los paramilitares para promover sus propios intereses³.

Iniciativas de construcción de paz en la región

Se puede observar una gran diversidad de actores e iniciativas dirigidas a la construcción de la paz. Entre estos: sectores poblacionales, las iglesias, los campesinos, los grupos étnicos, las organizaciones de mujeres y algunos representantes de las instituciones públicas. Se observa una gran fuerza en comunidades que han impulsado acciones y que se movilizan en una perspectiva de construcción de escenarios de paz⁴.

Algunas de estas han sido acompañadas por varias organizaciones nacionales de carácter no gubernamental (en un proceso de confluencia, articulación y de alianzas regionales) como Redepaz, la Asamblea por la Paz, y universidades como la Nacional, la Javeriana, los Andes, la Corporación Universitaria del Caribe y la Universidad de Cartagena. A ellas también se han articulado organismos públicos nacionales y la cooperación internacional.

³ Ver. Centro de Memoria Histórica. La Tierra en Disputa. Bogotá, 2010.

⁴ Un preciso análisis al respecto se puede encontrar en PNUD: “Los Montes de María: análisis de la conflictividad”. Bogotá, 2010.

Estas iniciativas cumplen de manera general con las características de los movimientos de paz que se han dado en el país; sin embargo, dos particularidades son especialmente visibles en la región: la resistencia civil y la incidencia política para la democracia local o para el fortalecimiento institucional⁵:

Resistencia civil

Algunos ejemplos son las marchas por la paz en El Carmen en 1996; la peregrinación por la paz y la libertad en Ovejas en 1997; la declaración de zona de paz de la vereda Camarón (El Carmen) en 2002, y la marcha de pañuelos blancos en Ovejas en 2004.

En numerosos corregimientos de los Montes de María, mientras la región era azotada por el desplazamiento, algunas familias se resistieron a salir, en un acto de defensa de su territorio, sus bienes y su dignidad. Tal fue el caso de Libertad (San Onofre) y Paraíso (Colosó) y muchos otros.

Incidencia política para la democracia local

Muchas de las organizaciones comunitarias se han formado para su participación ciudadana con miras a fortalecer la gobernabilidad y la transformación de las instituciones en escenarios promotores de equidad, transparencia, desarrollo y paz. Se puede destacar aquí el Pacto Democrático para los Montes de María apoyado por diferentes redes sociales.

Otra experiencias hacen referencia a los Programas de Desarrollo y Paz, iniciativas lideradas por la sociedad civil que convocan tanto a las comunidades como a actores institucionales para construir propuestas de trabajo conjunto encaminadas a fomentar condiciones de desarrollo y paz en las regiones, acompañando diversas expresiones ciudadanas de mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, iglesias y afrodescendientes, entre otras.

Rostros de la paz en Sucre

Una experiencia para resaltar en construcción de paz lo constituyó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en 1961 con la intención de resolver los problemas del campo, modernizarlo, aumentar la productividad,

⁵ PNUD. Op. Cit.



buscar su integración al desarrollo capitalista e intervenir las zonas en donde tenían presencia las guerrillas. Con la llegada a la región de las guerrillas de las FARC (procedentes principalmente del Magdalena Medio) y después con la llegada de los grupos de paramilitares, el movimiento campesino entró en un proceso de debilitamiento debido a los señalamientos y la estigmatización.

En ese sentido, según la percepción de los campesinos, la guerra ocurría a causa de la lucha por dos objetivos: uno, cobrar la tierra que habían conquistado, fomentando la contrarreforma agraria; y dos, amedrentar a la gente para que de alguna manera se uniera a alguno de los bandos.⁶

En el escenario actual encontramos otro tipo de experiencias para resaltar, tal como el trabajo que han venido realizando las mujeres y sus organizaciones a partir de 2005, cuando se desmovilizaron los grupos paramilitares. Ellas construyeron una agenda pública de las mujeres de los Montes de María e incorporaron un enfoque diferencial en los planes de desarrollo de por lo menos 10 municipios así como llevaron a cabo audiencias públicas con autoridades locales regionales y nacionales en las que han presentado el diagnóstico de la situación de la mujer montemariana.

A su vez, los jóvenes tienen un especialmente empeño por no dejarse absorber por la guerra así como por cambiar las condiciones que llevaron al horror de las masacres y los homicidios de sus familiares; como, por ejemplo, el teatro La Calle de Zambrano.

Los campesinos son el ejemplo máximo de resistencia en la región, mediante acciones que exigen la desconcentración de la tierra e impiden el progreso del fenómeno de contrarreforma agraria. Con más de 760 líderes y lideresas provenientes de diferentes asociaciones, hoy se encuentra conformada la Mesa Campesina.

Otra forma de resistencia visible es la que encabezan los grupos étnicos, como los colectivos afrocolombianos, conformados por población afectada por la violencia y la usurpación, cuyos líderes trabajan por reconstruir el tejido social resquebrajado y consolidarlo como una iniciativa de paz.

Por su parte, la Mesa Indígena, con una tradición organizativa ancestral, concentra cerca de 50 cabildos que trabajan por elaborar y desarrollar sus

⁶ Ver Pérez, Jesús. Op. Cit.

planes de vida así como promover su cultura a través de la etno-educación y la autonomía.

Otros sectores de paz que buscan hacer incidencia son las organizaciones de víctimas, las de mayor crecimiento y actividad después de la desmovilización de algunos grupos paramilitares en 2005 y los procesos de verdad, justicia y reparación y de recuperación de memoria histórica.

A ello se agrega una iniciativa relevante en la región: las Iglesias Santuarios de Paz, de la Iglesia menonita, que han construido con sus propias manos barrios, escuelas y demás condiciones para el restablecimiento de familias sometidas al desplazamiento.

La mesa regional de derechos humanos, que articula a cerca de 25 organizaciones de base, tiene como propósito proyectar en la región una pedagogía en derechos humanos e incidir en la institucionalidad, de tal manera que se logre el respeto de los derechos, en especial el derecho a la vida, que muchos de ellos tienen amenazado.

La Red de Comunicadores Populares de los Montes de María ha fortalecido la labor periodística que realizan en diversos medios de comunicación local, trabajando el tema de paz y el conflicto. Las experiencias positivas de construcción de paz y el posicionamiento de las redes sociales y los derechos de las víctimas del conflicto son sus principales temas.

Unas de estas iniciativas es la experiencia del Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María – Línea 21 en el Carmen de Bolívar. Esta organización, creada en 1994, recibió el premio nacional de paz en 2003, por sus esfuerzos de construcción de condiciones de paz en la región⁷.

En general, gran parte de la experiencia exitosa de estas iniciativas se debe a que han logrado concertar unos objetivos entre sus socios y articulan a más de una organización que comparte sus propósitos; sin embargo, para la continuidad, el fortalecimiento y la consolidación de estas iniciativas o prácticas de paz es necesario que se resuelva el siguiente desafío: la débil sostenibilidad de las iniciativas, que las pone en un alto riesgo de desaparecer, ya que no cuentan con los recursos suficientes para la realización de las acciones y actividades propuestas.

⁷ Ver: <http://colectivolinea21.galeon.com/>



Para ello, se deben plantear estrategias eficaces de gestión de alianzas nacionales con la cooperación internacional, que les ayuden a resolver el tema del acompañamiento y asistencia permanente, el apoyo político que posicione la pertinencia de sus propósitos y la disponibilidad de recursos para la realización de sus acciones.

La precariedad institucional en la región es persistente. Por esta razón, la mayoría de veces que se han articulado a la institucionalidad pública han tenido muchísimos problemas. Son por ello necesarias las alianzas con la institucionalidad pública del orden nacional (Ministerios, por ejemplo) que, con estrategias conjuntas, concreten salidas efectivas a las dificultades encontradas. Se debe insistir en la participación en los espacios de incidencia y decisión política territorial como, por ejemplo, los presupuestos participativos y los planes de desarrollo municipal y departamental.



III. Enfoque de paz

- ✓ La paz demanda el reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos.
- ✓ La paz reclama el respeto y promoción de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes propios de cada quien.
- ✓ La paz exige la equitativa distribución de los bienes y, particularmente, de la riqueza del saber, del tener y del poder.
- ✓ La paz pide configurar unas estructuras que impulsen el desarrollo económico y social y aseguren la participación, el compromiso solidario y el diálogo como rasgo de la sociedad.
- ✓ La paz únicamente puede alcanzarse por medios justos. La violencia no es el medio para lograr un orden justo ni, por ende, para obtener la paz. La violencia tan solo engendra más violencia.





IV. Lecciones aprendidas de los procesos de paz

Acogiendo las opiniones de diferentes sectores sociales, como la Diócesis de Sincelejo, la Mesa Campesina, las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las organizaciones de víctimas de la violencia, los jóvenes, las mujeres y los afrodescendientes presentes en el seminario en el departamento de Sucre, hemos identificado las siguientes lecciones aprendidas de los procesos de paz en nuestro territorio:

- ✓ Una de ellas tiene que ver con la actual coyuntura de negociación en La Habana, donde el Gobierno nacional, en cabeza de su comisionado de paz, ha abierto el debate señalando la necesidad de una paz territorial, en la que se pretende darle mayor importancia y participación a las regiones, para afianzar en ellas los posibles acuerdos. Si bien este es un aspecto muy importante, a la propuesta le falta mayor sustentación y desarrollo para su aplicación regional.
- ✓ El grupo de trabajo considera imprescindible que el concepto de paz desde la región tenga fundamento en la justicia social, en el entendido de que un acuerdo de paz debe dar cuenta de unas nuevas condiciones sociales, económicas y políticas para la sociedad colombiana.
- ✓ Expresamos nuestra preocupación por la insistencia en una paz parcelada, toda vez que la experiencia de los 90, aunque dejó muchos elementos positivos, presentó dificultades al no lograr la convivencia ni siquiera en las zonas de control de los grupos desmovilizados. Con base en lo anterior, se deben hacer esfuerzos por sentar en la mesa de negociación al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a efectos de lograr una paz con todos los sectores insurgentes, para evitar la parcelación de los acuerdos y lograr una situación de posconflicto más real.
- ✓ Es necesario que en el marco de la construcción de la paz a través de la superación del conflicto armado se formule una política integral de reintegración para las personas que han pertenecido a grupos armados ilegales, para que estas puedan contar con plenas garantías para el ejercicio político y su articulación al mercado laboral.
- ✓ Se requiere que las élites locales que controlan el Estado local no vean en los nuevos movimientos políticos una amenaza para sus intereses, lo que

para el caso de Sucre, en la paz del noventa, significó el exterminio de estos movimientos.

✓ Es preocupante, que no haya una delimitación de las Zonas de Reservas Campesinas y continúe la informalización de la propiedad sobre la tierra. Como también que no se aplique la consulta previa a las comunidades en sus territorios, que hoy ven vulnerados sus derechos a la autonomía.





V. Propuestas regionales de paz en Sucre

Propuesta en lo político

- ✓ **Reestructuración del Estado:** se requiere de un Estado local respetuoso de los derechos humanos, que promueva la libre participación democrática imparta justicia pero que también actúe como gestor de bienestar, responda de manera eficiente a las demandas de sus ciudadanos, goce de la confianza de ellos y promueva buenas prácticas administrativas, libres de la clientelización y la corrupción.
- ✓ La paz necesita una infraestructura social y política que garantice su desarrollo para la tramitación pacífica de los conflictos y dé repuesta a las demandas de acceso a la justicia como las mesas de víctimas, los comités de justicia transicional, las mesas de derechos humanos, la mesa campesina, etc.
- ✓ Es indispensable fortalecer la participación y los escenarios de encuentro entre la sociedad civil y el Estado para la construcción de una política de paz regional, como los consejos municipales y departamentales de paz y los fondos y planes para la paz, especialmente en los municipios mayormente afectados por el conflicto. Los planes de paz deben proyectarse a un plazo de 10 años, de manera que supere los años de gobierno de las administraciones locales.
- ✓ Es necesario poner en práctica una política de reincorporación regional que, de acuerdo con las condiciones regionales y locales, brinde garantías para la inserción a la vida política, económica y social de las personas que integraron grupos armados ilegales. Además, que se brinde un respaldo en materia de seguridad a las personas desmovilizadas y se promueva en la sociedad sucreña los encuentros de reconciliación, paz y perdón. Uno de los problemas más acuciantes para los grupos desmovilizados son los riesgos y pocas garantías para acceder al poder local por las vías democráticas, pues las elites locales han visto en los grupos políticos alternos una amenaza para sus intereses y han recurrido al exterminio de ellos, como sucedió con el movimiento cívico de Corozal y San Onofre en la década de los noventa.
- ✓ Se precisa diseñar un plan de reconciliación amplio en las subregiones que resultaron afectadas por el conflicto armado. Ello implica una política

de sanación de heridas y aplicación de elementos de justicia transicional, de verdad, justicia y reparación. Un plan de reconciliación es una herramienta muy importante que permitirá redefinir las relaciones entre sectores que por razones de la guerra resultaron afectados. Hoy es común, como es el caso del municipio de San Onofre, que víctimas y victimarios compartan los mismos sitios de residencia, generando tensiones y temor sobre todo en las víctimas.

Propuestas en lo económico: tierras, vocación y fortalecimiento del sector campesino

Es conveniente:

- ✓ Formalizar la tierra; ello implica la legalización y titulación. En este punto el Estado debe elaborar un censo de los predios que presenten dificultades y garantizar la propiedad a aquellos campesinos que por años los han venido ocupando.
- ✓ Diseñar un programa para la economía campesina que la inserte en los mercados locales, nacionales e internacionales. Ello significa adecuación de la infraestructura para la competitividad, nuevas y mejores vías, centros de acopio y organización y formación técnica del campesino, que garantice la sostenibilidad.
- ✓ Implementar una política pública que proteja la producción campesina de las amenazas que representa el proceso de expansión de los cultivos agroindustriales destinados a la producción de madera y biocombustible.
- ✓ Establecer zonas de reservas campesinas en las subregiones de La Mojana y Montes de María, que le pongan límites al proceso de concentración de la tierra, al uso inadecuado de los recursos naturales y a la explotación minera sin control.
- ✓ Fortalecer las capacidades de liderazgo rural y de la organización campesina. Una de las riquezas del departamento es la capacidad organizacional del campesino, hito que se ha ganado a partir de la experiencia con la ANUC y la creación de los sindicatos agrarios por la defensa de sus intereses.
- ✓ Crear una mesa regional minera para La Mojana, con la participación de la sociedad civil, las corporaciones regionales, los alcaldes y gobernadores de Antioquia, Córdoba, Bolívar y Sucre.



- ✓ Mejorar la infraestructura de servicio público, especialmente en las zonas rurales: agua potable, programas de salud, educación técnica y superior, masificación de gas doméstico y del Internet.

Propuesta en lo sociocultural

Se deben:

- ✓ Apropiar los mecanismos de participación ciudadana para que sean incluyentes y representen a todos los sectores de la sociedad colombiana con enfoque étnico - cultural y diferencial.
- ✓ Activar todos los espacios de participación donde los territorios, representados por sus autoridades ancestrales (consejos comunitarios afros y cabildos indígenas), tengan el derecho a participar en espacios de concertación como: consejo municipal de desarrollo, consejo territorial de planeación, plan de ordenamiento territorial y consejo de desarrollo rural.
- ✓ Llevar a cabo construcciones concertadas y participativas de los planes de desarrollo en sus diferentes niveles: municipal, departamental y nacional con enfoque étnico – cultural.
- ✓ Activar las consultas previas con garantías en los territorios étnico – culturales.
- ✓ Presentar una iniciativa legislativa que posibilite que esta propuesta haga parte del bloque de constitucionalidad.
- ✓ Implementación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos a través de la justicia comunitaria.
- ✓ Promover la formación de formadores en procesos participativos con enfoque étnico y cultural.

Víctimas

Vale tener en cuenta:

- ✓ MIS LÍMITES LOS PONGO YO: Una propuesta contra la violencia sexual, la utilización y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto.

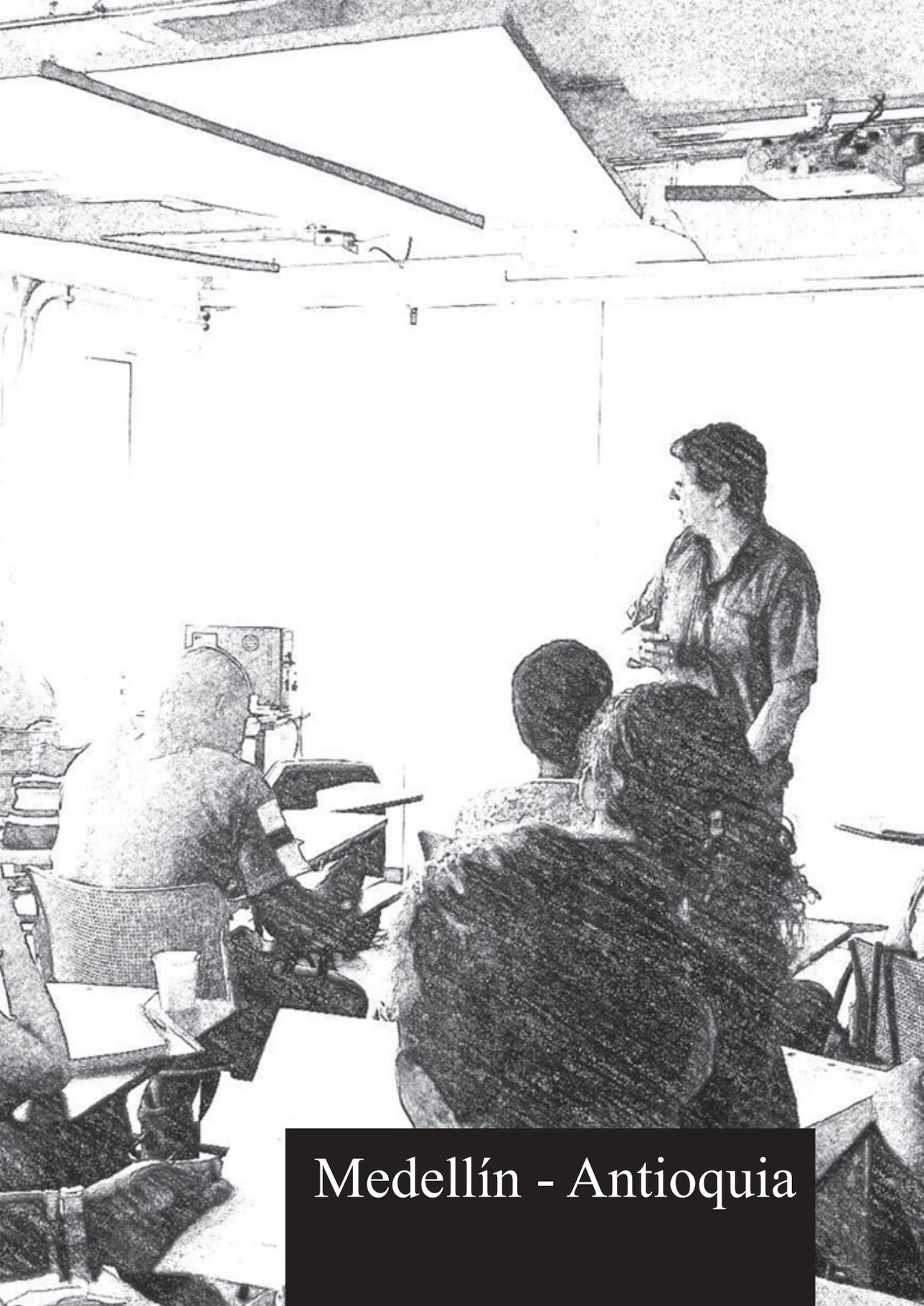
- ✓ Generar espacios desde la sociedad civil donde se hagan visibles los impactos del conflicto armado en los NNJA, como también el compromiso por parte de los actores armados de no continuar reclutándolos forzosamente ni utilizándolos al servicio de la guerra: igualmente hacer un fuerte llamado a detener la victimización por violencia sexual.
- ✓ Promover desde la institucionalidad y la sociedad procesos reflexivos que contribuyan a resignificar la identidad de los niños, niñas y adolescentes que han vivido en zonas de alta conflictividad armada, de tal modo que se generen servicios básicos y de seguridad humana a la población infantil y adolescente.
- ✓ Realizar procesos de sensibilización con agentes educativos orientados a prevenir la utilización, el reclutamiento forzado y la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes en los municipios más impactados con este flagelo (La Mojana y Golfo de Morrosquillo).
- ✓ Incentivar la creación de redes de apoyo locales para la prevención y denuncia de estos delitos, partiendo de que lesionan gravemente a un segmento importante del presente y futuro de la nación.
- ✓ Involucrar a los medios de comunicación para que diseñen, promuevan y difundan espacios de reflexión endógenos y exógenos que contribuyan al desmonte de los imaginarios de guerra y la instrumentalización del cuerpo de las niñas y niños adolescentes en los municipios de La Mojana y Golfo de Morrosquillo.
- ✓ Establecer articulaciones entre las comunidades/grupos organizados con el Ministerio Público, las comisarías de familia y los medios de comunicación, para difundir los derechos de esta población en perspectiva de prevención de utilización, reclutamiento forzado y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
- ✓ Crear redes de estudiantes y profesionales de las ciencias humanas para que realicen buenos procesos de atención sociojurídica que se encaminen a fortalecer el restablecimiento o diseño de proyecto de vida de los adolescentes que sufrieron directa o indirectamente los impactos de la violencia.



VI. Proyecciones

- ✓ Para considerar la sostenibilidad de un proceso de paz se hace necesario pensar qué acciones hay que realizar para hacerla permanente en esa medida, se propone lo siguiente:
- ✓ Elaborar un plan de trabajo que recoja las principales actividades por realizar. Dado que se prevé que en unos 15 meses pueden darse los acuerdos de paz en La Habana, se dispondría de poco tiempo para su elaboración.
- ✓ Es necesario definir en los territorios quiénes son las personas que pueden ayudar a concretar las acciones de paz. No se trata de cualquiera, se debe escoger por su capacidad para influir sobre otros que puedan ayudar a la sostenibilidad del proceso.
- ✓ Se requiere darle continuidad a los procesos pedagógicos iniciados en los territorios, ya que es evidente que estos ayudan a mejorar la calidad de las acciones y propician consensos en sectores opuestos.
- ✓ La paz requiere una infraestructura social, de redes sociales y canales de comunicación con capacidad de convocar a los diferentes sectores favorables y no favorables a los procesos de paz.





Medellín - Antioquia



SESION III - Viernes 20 de junio

- 9:00 - 9:30 a.m. Instalación y presentación de las sesiones III y IV del Seminario Cultural Democrático "Español del Sur"
- 9:30 - 10:30 a.m. Trabajo en Mesa Ciudadana: Excepciones, suspensiones y programas especiales
- 10:30 - 11:30 a.m. Sesiones de instalación e identificación de comités de mesa
- 11:30 - 12:30 p.m. Pausa para comer
- 12:30 - 1:30 p.m. Trabajo en Mesa Ciudadana: Compartir experiencias de participación y procedimientos de elección
- 1:30 - 2:30 p.m. Sesiones de instalación en mesas de trabajo en Mesa Ciudadana
- 2:30 - 3:30 p.m. Sesiones de instalación en mesas de trabajo en Mesa Ciudadana
- 3:30 - 4:30 p.m. Sesiones de instalación en mesas de trabajo en Mesa Ciudadana
- 4:30 - 5:30 p.m. Sesiones de instalación en mesas de trabajo en Mesa Ciudadana
- 5:30 - 6:30 p.m. Sesiones de instalación en mesas de trabajo en Mesa Ciudadana



Reconocimiento

El presente documento de propuestas de paz ha sido posible gracias al esfuerzo, aporte y contribución de los integrantes de entidades estatales, organizaciones sociales y académicas y líderes de organizaciones de víctimas de subregiones de Antioquia como: Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Occidente, y Oriente y Medellín, participantes en las sesiones del seminario, tales como:

Observatorio de Seguridad Humana, grupo de investigación adscrito a la Universidad de Antioquia; docentes de las universidades Autónoma Latinoamericana y Remington; la Unidad Municipal de Víctimas; Instituto Popular de Capacitación; el Museo Casa de la Memoria, el Programa Preparémonos para la Paz de la Gobernación de Antioquia. Así mismo, de organizaciones sociales de Medellín y del Valle de Aburrá.

Las principales entidades que hicieron parte del proceso fueron organizaciones sociales de la ciudad, organizaciones de paz de Medellín, organizaciones de víctimas de subregiones de Antioquia, organizaciones académicas y organizaciones estatales. Entre ellas encontramos: Asociación Ambientalista Semilla de Esperanza, Mesa Departamental de Víctimas de Caucasia, Organización Comunitaria ASCOMPAS, Corporación Gente Unida Copacabana, Mesa Departamental de Víctimas de la Sociedad Civil, Fundación Unión Darién, Corporación La Rueda Flotante, Central Unitaria de Trabajadores, Corporación Volver, Red de Paz de Antioquia, Asamblea Permanente por la Paz y Corporación Despertar Juvenil.

I. Contexto

Según las más recientes estadísticas de la Unidad para la Atención y la Reparación integral a las Víctimas del Gobierno colombiano (en agosto de 2014), en nuestro país se han registrado 6.541.351 personas como víctimas de diferentes formas de violencia en el marco del conflicto armado, al menos desde mediados de la década de los 60 del siglo pasado. De ellas, el 80% ha sufrido desplazamiento forzado, el 12% homicidio y el 8% un amplio número de conductas violentas, desaparición forzada, secuestros, actos terroristas, violencia sexual, reclutamiento forzado de menores, y amenazas, entre otras.¹

Según la misma fuente, en Antioquia hay 1.317.016 personas que se han declarado como víctimas, lo cual significa que son el 20.1% del total de víctimas del país. De nuevo, la conducta predominante es el desplazamiento forzado, responsable del 76.6% de las afectaciones, seguida por los homicidios, con el 16% y con el 8% con otras conductas.²

De otro lado, según el informe elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se verificado desde 1965 la comisión de 220.000 homicidios, 5.712.506 víctimas de desplazamiento forzado, 25.007 desaparecidos, 1.982 masacres, 27.023 secuestrados, 1.754 víctimas de violencia sexual y 6.421 casos de reclutamiento forzado.³ En los procesos de construcción de los casos emblemáticos tenidos en cuenta durante los últimos años por esta dependencia oficial, se han documentado hechos en Antioquia como los de las masacres en Remedios y Segovia, el desplazamiento forzado en el municipio de San Carlos y en la Comuna 13 de Medellín y, así mismo, se han constatado conductas como el despojo de tierras, el secuestro y la desaparición forzada, que destacan el preocupante protagonismo de Antioquia, sus campos, cabeceras y ciudades, en lo relacionado con todo tipo de conductas violentas.

¿Cuál ha sido la explicación para esta oleada de violencia desbordada que se ha vivido en Colombia y cómo comprender lo que ha ocurrido en el departamento de Antioquia? Al igual que lo planteado por el Centro Nacional de Memoria Histórica para explicar lo que ocurrió en el país en las últimas décadas, en Antioquia ha confluído un conjunto de factores estructurales entre los cuales se pueden identificar como elementos fundamentales la disputa,

¹ <http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes>

² <http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes>

³ <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/index.html>



el despojo y la reconfiguración de la propiedad agraria, junto con otras dinámicas como lo que se ha denominado—en el informe Basta Ya— como miedo a la democracia, es decir, la resistencia armada de sectores de las elites tradicionales, en alianza con otros grupos sociales y políticos y con sectores institucionales, para aceptar en el escenario político local tanto procesos de modernización institucional como, especialmente, la irrupción de fuerzas alternativas, sobre todo de izquierda.

En cuanto a la primera situación, en Antioquia se ha arraigado en varias de sus subregiones un orden agrario basado en el predominio de los grandes latifundios dedicados a la ganadería extensiva, el desarrollo de proyectos agroindustriales de productos como el banano, la madera y la palma de aceite, entre otros y, junto a estos usos, la utilización de las mejores tierras de los valles interandinos para fincas de recreo, en muchos casos propiedad de capos del narcotráfico. Este orden agrario en muchos lugares se construyó con base en el desplazamiento masivo de grandes contingentes de campesinos expulsados por grupos paramilitares al servicio de los intereses del latifundio, la agroindustria y el narcotráfico.

En otros territorios, la confrontación armada entre la fuerza pública, los grupos paramilitares y las organizaciones insurgentes provocó un impacto humanitario sobre miles de personas, víctimas de las estrategias de control de la población y el territorio.

Al impacto generado por esta dinámica de confrontación se debe sumar que en nuestro departamento es evidente la presencia de un sector de las elites regionales opuesto históricamente a procesos de modernización que afecten sus intereses y el control que por décadas han tenido sobre la vida política local. Esto explica el desarrollo de procesos contrainsurgentes que han cerrado a sangre y fuego los espacios para la participación de fuerzas políticas alternativas, la destrucción de procesos colectivos de movilización y las acciones de castigo contra los pobladores que han “desobedecido” el dominio tradicional, como lo ejemplifica el caso de la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988, ejecutada por paramilitares con la complicidad de la fuerza pública, pero ordenada por un político regional como castigo por el triunfo electoral de la Unión Patriótica en varios municipios de la subregión.

A esto se suma, y en el caso de Antioquia es muy evidente, la existencia del negocio del narcotráfico, tanto su cultivo como el procesamiento, transporte y consumo doméstico, que ha servido como un detonante de otras conflictividades

y, al tiempo, ha propiciado la escalada de algunas modalidades de violencia. Desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado se hizo evidente la confluencia entre carteles del narcotráfico y organizaciones políticas, como el caso de la elección de Pablo Escobar en calidad de representante suplente a la Cámara, con el aval del Movimiento de Renovación Liberal. Luego, una buena parte de la violencia, especialmente la que vivió Medellín, fue consecuencia del enfrentamiento entre Escobar y el Estado colombiano, el cual terminó en 1993 tras la muerte del primero.

Sin embargo, las relaciones entre narcotráfico, política y violencia se han mantenido, como lo demuestra el hecho de que en este departamento surgió la alianza entre diversos grupos del narcotráfico, el paramilitarismo y organismos de seguridad del Estado para derrotar a Escobar, lo cual se concretó en el grupo Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES). Integrantes del mismo participarían más adelante en la creación, primero, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y luego, de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización en la que confluyeron diferentes organizaciones del narcotráfico, entre ellas la denominada Oficina de Envigado, grupo hegemónico del narcotráfico en la ciudad y heredera del imperio de Escobar. Una evidencia final de esta relación es que de los congresistas vinculados en el país a la denominada investigación de la “parapolítica”, adelantada por la Corte Suprema de Justicia, la inmensa mayoría de la bancada antioqueña del periodo 2002-2010 terminó en la cárcel.

No existe en Colombia ni en Antioquia una sola causa explicativa de la violencia que hemos sufrido, pero sí confluencias que deben ser consideradas como estructurantes, aunque es innegable que hubo componentes regionales que potenciaron en muchos casos esta situación. Antioquia tiene uno de los peores niveles de victimización y esto aún se debe profundizar. Sin embargo, es evidente que avanzar en el establecimiento de la verdad histórica de lo que hemos vivido como sociedad es un componente fundamental como expresión de los derechos de las víctimas a la verdad, como un deber del Estado y la sociedad y como una forma de garantizar la no repetición.



II. Documento regional

Notas en torno a la construcción de la paz desde la región antioqueña

Max Yuri Gil Ramírez⁴

La organización y lucha por la paz

En el departamento de Antioquia, pero en especial en la ciudad de Medellín, hay una larga historia de acción en pro de los derechos humanos y la paz. Esto es necesario relacionarlo, dado que la mayoría de las acciones colectivas, de organización, movilización y denuncia surgieron entre las décadas de los 70 y 80 del siglo anterior en relación con las demandas por el respeto a la vida, la integridad y la libertad, dentro de la confrontación tanto por la acción represiva desatada desde el gobierno, como ocurrió en el tiempo de Turbay Ayala (1978-1982), como por lo que posteriormente fue uno de los peores momentos de la guerra sucia en el país (1982-1990).

Luego, una parte del movimiento social derivó hacia la formación ciudadana en el marco de la euforia posterior a la promulgación de la Constitución política de 1991, periodo en el cual, junto a las demandas tradicionales por la defensa de los derechos civiles y políticos, surgió una noción de la importancia de sujetos plenos de derecho, que no solo están preocupados por sus derechos de primera generación sino que requieren que la propuesta de la carta constitucional de un Estado social y democrático de derecho pase por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

De manera casi paralela comenzó a crecer en el país la conciencia y movilización en torno a la necesidad de concluir el proyecto de pacto de paz que fue la Constitución del 91 con un sector de la insurgencia colombiana, y esto se concretó en el surgimiento de un movimiento social a nivel nacional del cual hizo parte un buen número de las ONG que, junto a diferentes organizaciones

⁴ GIL R. Max Yuri. Extracto del documento “Notas en torno a la construcción de la paz desde la región antioqueña”. El autor es sociólogo, magister en ciencia política, investigador de la Corporación Región y profesor de cátedra de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

sociales de un carácter más comunitario, territorial y poblacional, demandaron la necesidad de un proceso de paz que posibilitara la concreción del modelo de sociedad proyectado en la Carta del 91. En Antioquia y Medellín surgieron en este periodo, primero, la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ), que se incorporó a la Mesa por la Vida de Medellín. Posteriormente surgió la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, así como la Iniciativa de Mujeres por la Paz, todas ellas organizaciones y plataformas nacionales que tienen su expresión en el departamento y en la ciudad.

Este proceso de crecimiento organizativo se expresó, por ejemplo, en la convocatoria al Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, en 1997 y, luego, en la movilización en torno a que en las elecciones presidenciales de 1998 hubiera un voto que demandara la concreción de un proceso de paz, lo cual se materializó en el proceso con las FARC en la zona de San Vicente del Caguán.

Aunque era una demanda del movimiento ciudadano, no hubo una decisión ni una apuesta estratégica por parte de las organizaciones de paz sobre qué hacer con el proceso del Caguán. Y en el caso de Antioquia, el mayor esfuerzo de la movilización ciudadana se volcó en torno a la necesidad de atender los impactos que la guerra seguía causando en el territorio, con especial énfasis en subregiones como el oriente antioqueño, en las cuales se incrementaron las acciones de violencia contra la población civil de todos los actores de la confrontación, lo cual fue respondido, desde la institucionalidad, con iniciativas como el Acuerdo de los Alcaldes del Oriente Antioqueño buscando el respeto al derecho internacional humanitario o la propuesta de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz sobre la necesidad y viabilidad de hacer acuerdos humanitarios especiales como mecanismo para aliviar, así fuera parcialmente, el impacto de la guerra sobre la población. Junto con estas iniciativas se produjeron muchas otras de carácter territorial y/o poblacional, expresión de la acción ciudadana por la paz, en una historia que aún está por escribirse.

De manera simultánea se produjeron dos hechos de carácter contradictorio en el departamento. Mientras en el país aparecía una creciente sensación de frustración ante el rumbo errático y ya casi agónico del proceso de paz entre el Gobierno nacional y las FARC, en enero de 2001 el nuevo gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, lanzó su propuesta de construir un plan congruente de paz para Antioquia, el cual se planteó como objetivo mejorar



las condiciones de convivencia y seguridad democrática de Antioquia, en un medio ambiente de equidad, inclusión y paz, que contribuyera al desarrollo humano integral de toda su población y a una mejor calidad de vida en todo su territorio. Aunque hubo recelo e inquietud sobre la verdadera voluntad política de la gobernación al impulsar este proceso, lentamente fue generando alianzas con algunos sectores de la población, en especial de las subregiones de Antioquia por fuera del Valle de Aburrá, proceso que luego derivó parcialmente en el de Asamblea Constituyente de Antioquia, que tuvo una importante expresión territorial. Sin embargo, el cambio en la orientación política de la gobernación en 2008 produjo la interrupción de dicho proceso.

El fracaso del proceso de paz con las FARC, pero sobre todo el triunfo de Uribe Vélez y la implementación de una política de guerra contra la insurgencia, tuvo un impacto demoledor sobre el movimiento social por la paz en el departamento, no solo desde el punto de vista de pérdida de la relativa iniciativa política que se había logrado generar, sino también por el cierre de espacios para el trabajo por la paz, la estigmatización e incluso el hostigamiento hacia las organizaciones de derechos humanos y por la paz.

Sin embargo, el proceso de desmovilización con los paramilitares, a pesar de sus evidentes fallas y vacíos, paradójicamente abrió una ventana de oportunidad para la creación y constitución de un movimiento social en torno a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, movimiento en el cual confluyen organizaciones que han luchado por años en pro de sus derechos, como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), o las Madres de la Candelaria, conformada por madres víctimas de la desaparición o el secuestro de sus seres queridos, junto con el surgimiento de una red de organizaciones de diferentes tipos de víctimas, en especial de desplazamiento forzado, quienes aprovecharon los debates sobre los derechos de las víctimas en el marco de la discusión de la llamada Ley de Justicia y Paz, 975 de 2005, para construir un espacio de actuación y lucha por sus derechos.

En la actualidad, en el departamento subsisten expresiones del movimiento ciudadano por la paz, pero debe destacarse que su estado y capacidad de organización, convocatoria, movilización y expresión continúa siendo muy débil, y esto no puede deslindarse de la larga historia de violencias que han sufrido las organizaciones sociales en el departamento y la ciudad, así como por el hecho innegable de que en esta región existe un baluarte cultural de la propuesta de seguir la guerra, como quedó demostrado en las pasadas

elecciones para presidencia de la república. Lamentablemente, esta es una de las regiones del país donde la opción por la guerra es más fuerte y ello genera unos retos mayúsculos para el movimiento ciudadano por la paz, para el posicionamiento de una opción de salida negociada y para la construcción de la sociedad posconflicto.

No obstante, hay que destacar la existencia de un nutrido pero disperso y fragmentado movimiento de organizaciones de víctimas que hace presencia en buena parte de los municipios del departamento y de las subregiones. Aunque es evidente que la mayoría de las organizaciones de víctimas que hoy existen ha sido creada al calor de la promulgación e implementación de la Ley de Víctimas con graves problemas de formación en torno a sus derechos, liderazgos y estilos de trabajo democrático— es preciso entender su lugar como sujetos de derechos que exigen su reconocimiento y no como víctimas a la espera de ayuda, razón por la cual son un potencial para la construcción y fortalecimiento de una opción ciudadana por la paz y un actor central de cara a la construcción de la futura sociedad del posconflicto.

Respecto de la base social e institucional para la paz también se debe considerar que en el departamento y la ciudad existe una experiencia construida desde la institucionalidad. Como se anotó anteriormente, desde la Gobernación de Antioquia se impulsaron iniciativas como el Plan Congruente de Paz, la Asamblea Constituyente de Antioquia y en la ciudad, a comienzos de los 90, la Consejería Presidencial para Medellín, luego la Asesoría de Paz y Convivencia a mediados de la década de los 90, encargada de la negociación con grupos armados de delincuencia común y narcotráfico y después, en el marco del proceso de desmovilización de los paramilitares, la Oficina de Paz y Reconciliación. En 2008 se crearon la Gerencia para el Desplazamiento Forzado y el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado.

En la actualidad existe en el departamento el programa Preparémonos para la Paz, impulsado por la Gobernación de Antioquia, y a nivel municipal la Unidad Municipal de Víctimas, el Museo Casa de la Memoria y la Alta Consejería para la Vida, la Paz y la Reconciliación.

Finalmente, se debe destacar el impulso en el departamento de dos iniciativas de proyectos de desarrollo y paz: una en el oriente de Antioquia y la otra en la zona del Magdalena Medio, que incluye algunos municipios antioqueños.



III. Enfoques de paz y reconciliación

En desarrollo del seminario se observaron algunos elementos en torno a estos conceptos:

Se considera que la reconciliación es un proceso que tiene que ver con lo individual pero trasciende lo familiar y colectivo y requiere acompañamiento institucional. Se identifica que las instituciones no se articulan de manera suficiente y por tanto no se generará la reparación que se requiere. Para que haya reconciliación es imprescindible una reparación a toda la sociedad, pero en especial a las víctimas del conflicto.

Hay procesos en el territorio (como por ejemplo las abrazadas en el Oriente) que trabajan por el reconocimiento —con iguales— de la condición de dignidad de las víctimas y sus aprendizajes, o experiencias similares en Urabá.

La reconciliación se concibe como el construir y tejer comunidad, el reconocimiento y la reconstrucción del tejido social, aceptar la diferencia y convivir en la diversidad así como la necesidad del reconocimiento por lo que hemos pasado y reconocer al otro. Se habla desde los espacios de reconciliación que reconocen las capacidades e iniciativas que tienen las organizaciones y se considera el componente espiritual, dirigido a la dimensión interna del sujeto para sanarse personalmente, de modo que luego permita la reconstrucción de la sociedad en la que se resalten las relaciones sociales.

El proceso de reconciliación tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades colectivas de las organizaciones de víctimas. Se debe considerar el derecho a la verdad como dimensión de la reconciliación, conocer la importancia de la verdad, la justicia y la reparación, así como la construcción colectiva de las verdades.

La paz implica el goce pleno de los derechos y garantías y el acceso a los diferentes programas en condiciones de equidad. La paz no es igual para todos, se deben hacer construcciones desde las realidades del territorio, la cultura y los grupos poblacionales, en la búsqueda de un equilibrio económico, político y del poder ciudadano. La paz tiene que ver con los espacios de participación que tenga la ciudadanía y hay conciencia de que esta no es solo ausencia de combates, sino solución de los conflictos de forma diferente a las acciones bélicas. Debe haber una paz desde un enfoque diferenciado, de género.

Es necesario pensar y generar acciones en torno a la inequidad, exclusión, desigualdades sociales y derechos básicos.

La paz requiere el conocimiento de lo que como sociedad nos ha pasado y ajustar el sistema económico, e igualmente replantear este modelo, así como el educativo, porque nos educa para la competencia.





IV. Lecciones aprendidas

Antioquia y Medellín han sido escenarios de un variado proceso de desmovilizaciones, algunas de ellas como parte del proceso nacional de desarme y desmovilización y otras, lo que constituye un caso particular, protagonizadas por grupos de carácter local.

En primer lugar, de los procesos adelantados entre el Gobierno colombiano y diferentes organizaciones insurgentes a finales de 1990 y 1991, como el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y los Comandos de Autodefensa Obrera (ADO), hay que destacar que su presencia en la región antioqueña no fue tan notoria como sí ocurrió en otras zonas del país. En el caso de Antioquia y Medellín estos procesos estuvieron vinculados principalmente a la zona de Urabá, donde existía una considerable presencia de integrantes de las guerrillas del EPL, así como en la ciudad de Medellín, y también hubo algunas personas integrantes del PRT que fueron trasladadas desde la capital de Antioquia al acto de dejación de armas en Ovejas, Sucre, en enero de 1991.

Luego, el 9 de abril de 1994, se produjo la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), disidencia del ELN. Para este acto de dejación de armas ocurrido en Flor del Monte, Sucre, igualmente fue trasladado un grupo de integrantes de algunas milicias cercanas a esta organización política, las cuales actuaban en algunos barrios del nororiente y el noroccidente de Medellín.

Pero es importante destacar que luego de estas desmovilizaciones, que tuvieron un carácter más nacional, hubo algunos procesos locales. Por ejemplo, pocos días después de la desmovilización de la CRS se produjo la de algunos de los grupos de milicias que actuaban en varios barrios de Medellín. Los que hicieron el acuerdo fueron las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Las Milicias Independientes del Valle de Aburra y Las Milicias Metropolitanas.

Estas organizaciones habían surgido a mediados de la década de los 80 como una forma de respuesta societal a la acción predatoria de los grupos de delincuencia común aliados al cartel de Medellín, quienes asolaban los

territorios donde residían, con un alto costo en tranquilidad y seguridad para los habitantes de estos sectores. Como respuesta, algunas personas que habían hecho parte de organizaciones insurgentes promovieron la conformación de estos grupos para enfrentar las bandas de delincuencia, lo cual recibió un gran respaldo por parte de sectores de la población agotados por el dominio y el miedo que imponían los grupos al servicio de Pablo Escobar. Este proceso tuvo un éxito inmediato, al responder a las demandas de orden y seguridad de miles de personas en la ciudad, lo que provocó su crecimiento de manera acelerada y un amplio respaldo en sectores de las zonas nororiental, noroccidental y centrorientales de la ciudad, lugares en los cuales tenían presencia y dominio. No obstante, debe destacarse que este rápido crecimiento también llevó a una de las principales críticas que se hicieron en su momento y fue la adopción de prácticas de eliminación de jóvenes, considerados por ellos un riesgo para la convivencia ciudadana, lo cual se tradujo en el asesinato de centenares de muchachos en los barrios de la ciudad, ejecutados sin ninguna consideración.

En 1994, algunos de estos grupos, luego de un proceso de conversaciones con el Gobierno nacional, el gobierno local y el acompañamiento de la Iglesia y algunas organizaciones civiles, decidieron desmovilizarse. Según un estudio reciente de Jorge Giraldo y Juan Pablo Mesa (2013), “El Acuerdo tuvo una estructura muy similar a los cinco previos que llegaron al objetivo previsto (M-19, EPL, PRT, MAQL y CRS). Incluía dos capítulos sobre reintegración y reinserción y otros sobre protección, favorabilidad política y beneficios jurídicos”, y del acto de dejación de armas hicieron parte 843 integrantes.

Posteriormente, en 1998, se produjo la desmovilización de un grupo miliciano que actuaba en sectores del occidente de la ciudad: el Movimiento de Integración Revolucionaria (MIR-COAR). En el acto de dejación de armas, el 29 de julio de 1998, participaron 171 integrantes.

Finalmente, para cerrar este apartado, hay que considerar cómo el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares tuvo un capítulo que se escribió con actores centrales de la violencia de la ciudad. Aunque este tuvo otras características, y hay todavía un largo debate sobre su condición de grupos con amplios niveles de contacto tanto con sectores institucionales como con organizaciones dedicadas de manera central al narcotráfico, en Medellín se presentó el primer proceso de desmovilización en el marco de los acuerdos entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas



de Colombia (AUC), protagonizado el 25 de noviembre de 2003 por 865 integrantes del denominado Bloque Cacique Nutibara (conformado por una mezcla de integrantes de “combos” y bandas al servicio del narcotráfico, delincuencia común, unos pocos paramilitares profesionales y un número aún incierto de jóvenes pobres reclutados con ofertas de trabajo y empleo a última hora en varios barrios de la ciudad). Posteriormente, en un proceso bastante similar al anterior, en agosto de 2005 se produjo la desmovilización del denominado Bloque Héroes de Granada, en un acto con participación de cerca de 2000 integrantes.

Aunque era un proceso nacional y la agenda estaba centrada en la dimensión jurídica para obtener la libertad con impunidad, es importante destacar la creación en la ciudad de Medellín de la Oficina de Paz y Reconciliación, la cual, a pesar del alud de críticas que recibió por su papel en la defensa a ultranza del proceso y sus protagonistas, generó un acumulado de conocimiento sobre diferentes estrategias para el acompañamiento de desmovilizados, aunque hay que considerar que muchos de ellos o nunca se desmovilizaron o se revincularon a actividades criminales y en no pocos casos esto terminó con su asesinato.

Algunas consideraciones sobre las desmovilizaciones

Luego de este breve recorrido sobre la experiencia de los procesos que se han escenificado en la ciudad y la región, podemos afirmar que el balance general deja algunas lecciones que pueden ser útiles para el actual proceso desarrollado con las FARC y ojalá para el que prontamente se espera con el ELN.

En primer lugar, es evidente que, por el momento histórico que se vivió, una buena parte de estos procesos no tuvieron ninguna consideración especial en torno al tema de los derechos de las víctimas, con excepción de su inclusión forzada por las organizaciones de víctimas, en el que se adelantó con los grupos paramilitares. Esto se puede atribuir fundamentalmente al hecho de que este tema no ha entrado con fuerza en las agendas de negociación sino en los últimos 20 años. Los procesos de desmovilización han estado centrados sobre todo en lo relativo a las demandas políticas y económicas de los grupos en el proceso de paz, así como en las condiciones para la desmovilización de sus integrantes, tanto en materia de beneficios judiciales como de los incentivos económicos, sociales y de atención sicosocial para los combatientes en proceso de reintegración a la vida civil.

No obstante, hay un elemento que es muy contundente al momento de pensar en la valoración de estas situaciones y es que al haberse desarrollado en el marco de procesos de paz fragmentados y parciales, en los cuales unos grupos abandonan las armas mientras otros se mantienen en la confrontación, hay no solo graves problemas de reincidencia por la revinculación de combatientes a las organizaciones que quedan (como sucedió en Urabá con integrantes del desmovilizado Esperanza, Paz y Libertad, que terminaron en las filas de los grupos paramilitares, especialmente de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), sino que muchos combatientes profesionales han acabado reforzando estructuras criminales, en particular las que operan en el departamento de Antioquia vinculadas al narcotráfico, como ha sido evidente con una buena parte de los desmovilizados de las milicias de 1994 (muchos de ellos ya asesinados) o con los desmovilizados de grupos paramilitares como los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada.

En algunos casos, estos modelos ponen en evidencia la necesidad de un acuerdo de paz integral que involucre la mayoría de los actores de violencia, aunque esto se estrella contra las dificultades de negociar con actores del mundo criminal como los que operan en Antioquia y el Valle de Aburrá.

Hay un elemento adicional, a la hora de evaluar los modelos de desmovilización, relacionado con el hecho de que no es lo mismo implementar un proceso de negociación con organizaciones insurgentes, contraestatales, cuyo principal poder proviene de sus combatientes, dada su representación de sectores marginales de la sociedad, que otro con los desmovilizados de grupos mercenarios, paraestatales, como los paramilitares colombianos, los cuales representan intereses de sectores poderosos económicamente y cuyo principal poder proviene de los sectores que los han patrocinado. En el primer caso es esencial el tema de la desmovilización plena de sus integrantes y la entrega de armas a cambio de las reformas de la agenda, mientras que en el segundo adquiere un gran protagonismo preguntarse si los patrocinadores de estos esfuerzos han tomado la decisión de no recurrir nunca más a los ejércitos mercenarios para el impulso de sus aspiraciones.



V. Propuestas

Si en el departamento de Antioquia el desarrollo de la guerra ha estado vinculado a dinámicas estructurales como la lucha por la tierra y por el poder político, estos temas deben estar en el centro de la agenda de paz para la región, pues la erradicación de la confrontación armada y su cambio por la lucha política sin hacer uso de la violencia requiere la adopción de medidas de transformación social, dado que es evidente que no basta la decisión personal de los integrantes de los grupos armados para que desaparezcan las dinámicas de confrontación que dieron origen al conflicto.

Esto no significa, en todo caso, una aspiración idílica a una transformación integral y radical de la sociedad de manera súbita, pero el realismo de la negociación tampoco puede reducirse a la consecución de una paz barata que no toque los intereses de quienes por décadas se han beneficiado de la confrontación armada para ampliar sus propiedades y activos.

✓ En el centro de esta discusión y de la construcción de propuestas está la adopción de un modelo de desarrollo centrado en el mejoramiento de las condiciones de vida de los casi seis millones de habitantes de Antioquia, cuya inmensa mayoría sobrevive en condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión. A esto se debe sumar un componente de reflexión sobre las implicaciones humanas, políticas, sociales, económicas y ambientales del creciente negocio minero en una buena parte del departamento, el cual ha estado asociado en el pasado reciente al accionar de grupos armados ilegales, pero que aún en el caso de eliminación de estas relaciones criminales se debe abrir en la sociedad una discusión en torno a las consecuencias de su implementación. Existe el riesgo de que sectores de la sociedad aspiren a una paz sin contraprestación alguna, para profundizar sus márgenes de rentabilidad en la industria extractiva.

✓ Junto con este componente de desarrollo regional, basado en el bienestar humano, se deben implementar acciones para garantizar que las colectividades políticas alternativas, del espectro político de la izquierda, puedan impulsar sus propuestas sin que exista el riesgo de su eliminación física como ha ocurrido en el pasado. Si bien es cierto que la Unión Patriótica es el emblema de esta situación, la eliminación de los adversarios políticos ha estado en el centro de las motivaciones de la violencia en el país y en el departamento, afectando no solo a los partidos de izquierda, sino a líderes e integrantes de todas las colectividades comprometidas con ideas de democratización.

✓ Ya en otra perspectiva, hay un núcleo central para ser considerado en el proceso, relacionado con la garantía integral de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Como se sabe, la verdad es un derecho de las víctimas y un deber que compromete al Estado y la sociedad. Deberán, pues, incluirse mecanismos idóneos que permitan satisfacer de manera adecuada las expectativas de las víctimas sobre asuntos clave como la identificación de fosas y de cuerpos de personas secuestradas, desaparecidas, reclutadas, etc. Así como entender las razones que se tuvieron en estas decisiones pero, también, avanzar en la construcción de un relato de memoria histórica que permita pasar del caso a caso y construir una comprensión más estructural y omnicomprendiva. En un departamento con unos niveles de victimización como los señalados, este es un tema fundamental.

Igualmente, se deben implementar acciones de reparación integral. Como se sabe, esto significa, además de las indemnizaciones establecidas por ley, y de las medidas de restitución y rehabilitación (jurídica y sicosocial), el desarrollo de acciones de reparación colectiva en las cuales será fundamental el compromiso tanto de los actores estatales como de los grupos insurgentes para adoptar medidas tendientes a reparar el tejido social destruido por décadas de violencia. Ello, mediante el compromiso con acciones como el desminado humanitario, la construcción de bienes públicos colectivos (escuelas, centros de salud, salones comunales, etc.) y las peticiones públicas y sinceras de perdón, entre otras medidas.

También se deben considerar en esta campo acciones de lo que ha denominado Rodrigo Uprimny reparaciones transformadoras, es decir, aprovechar el desarrollo de acciones de reparación para transformar las condiciones de vida de miles de víctimas y de sus comunidades, las cuales ya eran de una enorme precariedad antes de que fueran, además, victimizadas.

✓ Finalmente, se debe aprender de manera inteligente de las experiencias de desmovilización adelantadas durante los últimos 25 años. Hay mucho conocimiento adquirido, se conocen los aciertos y los desaciertos. Hay que evitar la reincidencia criminal y promover procesos que redunden en la aceptación social de las personas que de manera genuina están dispuestas a abandonar el uso de las armas, entendiendo que la condición de desmovilizado no es ni un símbolo de estatus ni un estigma, y que debe ser una condición



temporal que con el tiempo debe ser transformada para convertirse en sujetos de derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas de la sociedad.

Los retos de Medellín

El proceso de paz que se está adelantando a nivel nacional es una buena ventana de oportunidad para avanzar en la ciudad en algunos asuntos, pues aunque no son lo mismo la violencia vivida en Medellín desde 1980 y el conflicto armado colombiano, son evidentes sus conexiones y continuidades. En este sentido, se debe aprovechar para impulsar acciones locales al menos en los siguientes campos:

- ✓ Profundizar en la construcción de la verdad histórica de los fenómenos de violencia que ha vivido la ciudad en las últimas décadas. Si bien es cierto que Medellín es la ciudad que más estudios posee sobre el tema de las violencias urbanas, no existe una mirada de conjunto que nos permita avanzar como sociedad en la comprensión de estas, sus conexiones y especificidades. La verdad histórica es un deber como sociedad en relación con las víctimas, es una obligación para esclarecer, en la medida de lo posible, por qué nos pasó lo que nos pasó, y es una forma de evitar que en el presente y en el futuro se repitan estas acciones.
- ✓ Debemos pensar en la forma en que vamos a profundizar y a fortalecer los esfuerzos de reparación integral a las víctimas, en lo cual hay avances evidentes representados por esfuerzos como la Unidad Municipal de Víctimas y el Museo Casa de la Memoria, reconocidos por entidades como la Corte Constitucional. Fortalecer estas estrategias implica, entre otras cosas, que esto sea una decisión de Estado en lo local, y que no esté atado a las contingencias de los cambios en los gobiernos locales o a la voluntad y compromiso de funcionarios/as por sus convicciones personales.
- ✓ En cuanto a garantías de no repetición se requiere pensar, del amplio conjunto de medidas que se han identificado en este campo, cuáles son las más pertinentes y oportunas para ser implementadas en la ciudad de modo que nunca más vuelva a pasar lo que nos ha pasado en materia de violencias y victimización. En ese sentido, requerimos trabajar en torno a iniciativas como la implementación de planes de formación en derechos humanos respecto de funcionarios/as, en especial integrantes de la fuerza pública. De manera simultánea con esta formación, se deben identificar procesos emblemáticos

en los cuales quede clara la absoluta convicción y determinación de que el Estado local no avala ni es cómplice del accionar ilegal de funcionarios suyos vinculados a violaciones de derechos humanos. También se pueden adoptar acciones para que las políticas públicas en lo local, de manera coherente y real, tengan como base un enfoque de derechos humanos.

Finalmente, Medellín es reconocida como una ciudad con una amplia y larga experiencia de desmovilizaciones, algunas exitosas pero también muchas de ellas fallidas. La ciudad tiene con qué hacer un aporte en torno a las lecciones aprendidas, para que las personas que se desmovilicen encuentren un ambiente de reintegración integral a la sociedad, pero también para evitar su revinculación a grupos armados o, lo peor, que se repitan falsas desmovilizaciones como las de los grupos paramilitares de la ciudad en 2003 y 2005.

El reto que tenemos como sociedad es la eliminación de la guerra y la violencia como mecanismo legítimo de acción para conseguir el mantenimiento del orden o su transformación. Puede que durante algunas décadas sobreviva una condición de coexistencia no letal, o lo que también se denomina coexistencia contenciosa, es decir, que vivamos juntos pero sin que esto presuponga ni el perdón ni la reconciliación, (los cuales son un atributo subjetivo y personal que no debe imponerse) ni que convivamos manteniendo versiones y visiones encontradas de lo que nos pasó pero, eso sí, renunciando a la venganza. Así, puede que al final, luego de muchos años, nos despertemos en una sociedad en que ser víctima o victimario sea un recuerdo del pasado lejano.



VI. Proyecciones

A partir del seminario, consideramos varias opciones que se pueden impulsar:

Es evidente la necesidad de aprovechar este proceso para el fortalecimiento y cualificación de la capacidad de las organizaciones sociales, en especial en los territorios. Sería fundamental poder impulsar la réplica bien sea del seminario o de un ejercicio similar, que permita la discusión y recoja lo que hay en las subregiones, en los municipios e incluso en veredas y corregimientos. Si la paz se construye en el territorio esto requiere tanto del fortalecimiento de la sociedad civil como de la institucionalidad pública democrática, una institucionalidad que sea un referente legal y legítimo de regulación en territorios abandonados o controlados por grupos armados ilegales.

De igual manera, es preciso profundizar la reflexión en torno a cuáles serían esos elementos territoriales de la agenda de paz, tanto en sentido estricto de cara a la culminación del proceso de negociaciones con un acuerdo de paz con elementos de agenda, como en la construcción de una paz estable y duradera que implica elementos de otro tipo y que se ha denominado la agenda de la democracia.

Si en el centro de la reparación transformadora están los derechos de las víctimas, esto significa que existen varios desafíos sobre cómo construir en los territorios componentes como la verdad y la reparación integral, en especial la reparación colectiva y las garantías de no repetición.

Cada una de estas líneas de acción, sea de manera individual o combinándolas, son opciones para impulsar una nueva fase del seminario, aprovechando las alianzas logradas en el proceso anterior entre organizaciones sociales, académicas e instituciones. Un reto para impulsar esta iniciativa puede ser buscar el respaldo de organismos de cooperación internacional.



Barrancabermeja -
Magdalena Medio

Seminario
Los procesos de paz en Colombia:
Experiencias y propuestas desde las regiones

¡Construimos paz desde la región!

MEDELLÍN * SINCELEJO
TIBÚ * CALI * PASTO
BARRANCABERMEJA



USAID





Reconocimiento

El presente documento de propuestas de paz, ha sido posible gracias al esfuerzo, aporte y contribución de las siguientes organizaciones sociales e instituciones de Barrancabermeja y del Magdalena Medio participantes en las sesiones del seminario:

Organizaciones sociales y comunitarias que forman el Consejo Municipal de Paz de Barrancabermeja y el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, la Diócesis de Barrancabermeja - Pastoral Social, el Observatorio de Paz Integral (OPI), la Alcaldía municipal, la Secretaría de Gobierno, Personería municipal, la Defensoría del Pueblo y Ecopetrol.

Igualmente, procesos organizativos del sur de Bolívar como: La Asamblea Constituyente de Micoahumado- Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz, la Asociación de Productores Alternativos de Simití (ASPROAS), el Comité Cívico del Sur de Bolívar (CCSB), la comunidad de Las Pavas a través de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), la comunidad del Guayabo en Puerto Wilches (AGROPEGU), la Fundación MANOS UNIDAS por San Pablo, y el proceso de la Asociación de Campesinos Trabajadores del Carare (ATCC) en el corregimiento de La India del municipio de Landázuri.

Las organizaciones locales participantes son todas miembros del Consejo Municipal de Paz de Barrancabermeja, defensoras de derechos humanos y colectivos de víctimas, entre las que se cuentan la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA), la

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), la Minga Afromagdalénica, ASOEDUCADORES Afro, el Colectivo 16 de Mayo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado (ASORVIMM), el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Agroquímica, Gases, Ramas Afines y Derivados (SINTRAINQUIGAS), las Hermanas Juanistas de la Pastoral de los Trabajadores, el Servicio Jesuita de Refugiados (SJR), la Fundación Gente en Acción, Mujer Paz Pan y Vida y la Corporación Red de Mujeres del Magdalena Medio.

Todas estas iniciativas han surgido en medio de la guerra como una alternativa para la defensa de la vida y la permanencia en el territorio, y son un gran ejemplo de construcción de paz en medio del conflicto armado y social en el Magdalena Medio.



I. Contexto del Magdalena Medio: una región en construcción

La región del Magdalena Medio se encuentra ubicada en el corazón de Colombia, entre las cordilleras Oriental y Central, entre el Salto de Honda en el Tolima hasta Río Viejo en Bolívar, con una extensión de 30.177 km² y una población aproximada de 900.000 habitantes, producto de oleadas migratorias de colonización económica y migración forzada resultado de la violencia sociopolítica que ha vivido el país. Conformada por 32 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Santander y Cesar, goza de una ubicación privilegiada que la convierte en pieza fundamental en las actividades económicas y políticas del país y en la internacionalización de la economía. Sus grandes riquezas naturales hacen de ella uno de los principales pulmones del mundo, actualmente en riesgo debido a la producción industrial petrolífera, los desarrollos industriales afines y conexos, las explotaciones agroindustriales de palma africana y los latifundios ganaderos, todos en detrimento de la economía tradicional campesina productora de alimentos agrícolas, sobre todo cacao y café, y de productos animales resultado de una pesca artesanal destinada a la comercialización y el autoconsumo.

El Magdalena Medio ejemplifica muy bien las diversas formas de producción propias de una región que tiene las características de zona de frontera interior y de enclave. Allí conviven la producción industrial del complejo de refinación y petroquímica y los desarrollos industriales afines y conexos junto a una producción agropecuaria heterogénea, que va desde las explotaciones agroindustriales de la palma africana, pasando por la presencia de explotaciones latifundistas ganaderas (carnes y lácteos), hasta diversos niveles de producción de economía agrícola: campesinos con cierta estabilidad alrededor de la producción cacaotera y cafetera y campesinos precarios, producto de los procesos de colonización.

Actividades como la transformación de cemento y carburos, arenas silíceas y la explotación aurífera a gran escala amenazan la economía del minero artesanal en la Serranía de San Lucas, así como la exploración y explotación de yacimientos de carbón, gas y esmeraldas en Santander y Cesar, que degradan los procesos socioculturales del territorio. De otro lado, a pesar del compromiso e iniciativas del campesinado por avanzar hacia la sustitución de cultivos de uso ilícito siguen siendo víctimas de técnicas de erradicación

erróneas como las fumigaciones indiscriminadas, que afectan sobre todo la producción de alimentos, la salud y las reservas hídricas.

También es notoria la actividad pesquera y su comercialización, la fabricación de cemento y carburos, la extracción de la arena silíceas, la explotación de la minería y, recientemente, el descubrimiento de yacimientos de carbón, gas y esmeraldas. A lo cual hay que agregar:

- ✓ La variedad de actividades comerciales y turísticas que se entrecruzan y pasan necesariamente por la región hasta el centro del país, a puertos y puntos estratégicos del mercado internacional y a centros turísticos nacionales.
- ✓ La infraestructura vial presente y futura: la Troncal del Magdalena Medio, carretera de la Costa Atlántica que se convierte en la conexión del sur con el norte del país; la Troncal de la Paz, que une el nororiente de Antioquia con el sur del Bolívar; la vía Medellín - Puerto Berrio - Cimitarra - Landázuri - Vélez - Tunja; la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, que conecta el centro de Colombia con el mar Caribe, y la recuperación de la red férrea que comunica al centro con el norte del país.
- ✓ Los proyectos actuales, unos en etapa de factibilidad y otros en proceso de ejecución: la hidroeléctrica del río Sogamoso - municipio de Betulia, la termoeléctrica de Puerto Olaya, San Luis y Barrancabermeja, la refinería en Puerto Nare, la explotación de gas en Cimitarra, el estudio sobre yacimiento de petróleo en el mismo municipio y los proyectos relacionados con la CORMAGDALENA.
- ✓ La importancia de Aguachica, unidad especial de planeación, constituida en polo fronterizo de desarrollo en enero de 1996.

En esta región, Barrancabermeja (Santander) se destaca como el mayor centro de servicios y consumos, cuya influencia es considerable como punto de desarrollo económico, social y político así como por su capacidad acogedora y solidaria con los pobladores de la zona en la búsqueda de alternativas para la resolución de los conflictos. Actualmente se destacan los municipios de Puerto Berrio y Aguachica, que juegan el papel de puntos nodales.

En este contexto, el Magdalena Medio apunta — dentro de los planes de desarrollo económico, social y político del país— como pieza fundamental en el siglo XXI, que permitirá fortalecer el intercambio y el desarrollo



industrial y comercial tanto nacional como internacional. Por lo tanto, el país se juega las nuevas y estables posibilidades de desarrollo y de paz en el Magdalena Medio, como una región decisiva y de interés nacional.

Desde el punto de vista sociocultural existe una amplia diversidad, en la cual se identifica como predominante la cultura ribereña, que se estaría estructurando históricamente a partir de la herencia rebelde de los aborígenes Yariguíes, entrecruzados con el código de honor de los santandereanos, la alegría y originalidad de los costeños y el empuje y creatividad de los paisas. Cultura cimentada en una larga experiencia y trayectoria de luchas (sociales y políticas) y confrontaciones que han venido presentándose casi siempre en medio de las adversidades de la naturaleza y el modo de ser de los pobladores en cuanto a estar ajustándose a una convivencia social propia de la región, pero particularmente con la ausencia del Estado y difíciles formas de presencia, sobre todo la represiva, la cual se ubica más como un factor generador de conflictos y de choque que como elemento mediador y protector de la sociedad.

Se colige que si bien es cierto que la región existe como realidad geográfica, realmente está en un proceso de formación como realidad sociocultural, con una dinámica propia de los conflictos que de alguna manera la identifican como región-problema, si se tiene en cuenta que los conflictos eje, tanto los sociales como los políticos, aún no han tenido solución y con el tiempo tienden a agravarse, volviéndose más complejos en sus componentes y actores.¹

Este contexto va en contravía de las intenciones planteadas por el Gobierno nacional en su política de paz, toda vez que las decisiones de intervención del territorio se toman desde el nivel central, obedeciendo a intereses transnacionales que desconocen las necesidades y los planes de vida de los pobladores de la región. Estas actuaciones han derivado en procesos de desplazamiento forzado, despojo, desarraigo, desaparición forzada, ruptura del tejido social y pérdida de gobernabilidad, con la consecuente desconfianza hacia la institucionalidad y en perjuicio del ejercicio de la democracia, la participación ciudadana y el ordenamiento territorial definidos en nuestro marco constitucional.

¹ Vargas Velázquez, Alejo. "Desarrollo regional y paz: dos caras de un mismo problema".

II. Documento regional

Convivencia y paz: realidad y perspectivas en la región del Magdalena Medio

Ubencel Duque²

Barrancabermeja ha jugado un papel preponderante en el concierto de movilizaciones sociales a lo largo de la historia social y política de la región. Varios autores consideran que dichas luchas y movilizaciones han presentado transformaciones en sus motivaciones y objetivos. Se han desplazado de las demandas concretas de la infraestructura a las exigencias de respeto de los derechos humanos y otros ítems estrechamente ligados al conflicto armado. Especialmente en la década del noventa e inicios del milenio, las iniciativas por la defensa de los derechos humanos, la paz y la convivencia han dominado el espectro organizativo.³

El contexto que anima estas manifestaciones colectivas y la exigencia de derechos en torno al espacio urbano construido (vivienda, servicios públicos, infraestructura física y ambiente sano) se manifiesta como segregación socio-espacial, económica, política y cultural en amplios sectores de los habitantes de la ciudad: es generalizada la percepción de una desigualdad social (en clave de pobreza vs. riqueza). Pero luego se privilegia, en la movilización social durante los ochenta y los noventa del siglo pasado, el derecho a la vida y a la integridad que, al decir de la investigadora en mención, sobrepasa en más del doble las acciones colectivas ocurridas en la década anterior por motivos relacionados con la vivienda y el entorno, lo cual responde al incremento en

² El autor es DUQUE, Rojas, Ubencel. Extracto del documento “Convivencia y paz: realidad y perspectivas en la región del Magdalena Medio”. Filósofo, magister en desarrollo educativo y social, y director de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

³ Madariaga, Patricia, 2006, “Región, actores y conflicto: los episodios”, en Mauricio Archilaet ál., Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio” 1990-2001, Bogotá, ed: CINEP, v., p.48.



dichas décadas de las masacres, asesinatos, desapariciones y torturas en la ciudad y la región⁴.

Con respecto a la dinámica de la movilización y la lucha social que ha experimentado el Magdalena Medio, autores como Patricia Madariaga⁵ han destacado las desarrolladas en medio del conflicto armado, cuyos actores en ocasiones se han entremezclado con las acciones organizativas ciudadanas, fenómeno más notorio en algunos momentos y procesos que en otros. La autora destaca tres ejes de luchas sociales:

1. Un primer grupo de luchas articuladas a la cuestión laboral, en la cual el sindicalismo de las industrias petroleras ha jugado el eje central. La Unión Sindical Obrera (USO), epicentro del movimiento obrero, especialmente en Barrancabermeja, amplió su demanda de tipo estrictamente laboral a otras de tipo cívico, lo cual fortaleció las demandas de otros sectores sociales. Su herramienta de presión fue tradicionalmente la huelga. Los motivos de protesta han estado relacionados con retenciones salariales, despidos y violaciones del contrato de trabajo. Posteriormente a las muertes de sindicalistas y otras formas de violencia ejercidas contra la dirigencia y la base sindical, las luchas incluyeron el tema de los derechos humanos, con un énfasis político en su visión del conflicto armado.
2. Un segundo grupo relacionado con la cuestión campesina, especialmente las luchas por la tierra, surgidas a partir de la colonización y titulación de predios. En la década del 80 fueron predominantes las marchas campesinas del sur de Bolívar como forma de protesta impulsada por la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio. Otras herramientas de protesta fueron las invasiones de tierras, los bloqueos de vías y la toma de entidades. A finales de los noventa e inicios del nuevo milenio las luchas campesinas disminuyeron en parte, afectadas por el conflicto armado, incluyendo en sus reivindicaciones “el respeto de los derechos humanos y el rechazo de políticas económicas y sociales del gobierno e incumplimiento de pactos”.⁶

⁴ García, Martha, 2006, “Barrancabermeja: ciudad en disputa permanente”, en Mauricio Archilaet ál., “Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio” 1990-2001, Bogotá, ed: CINEP, v., p.267

⁵ Madariaga, Patricia, 2006, “Región, actores y conflicto: los episodios”, en Mauricio Archilaet ál., Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001, Bogotá, ed: CINEP, p.45.

⁶ Op.cit. páginas 46,47

3. Un tercer grupo de conflictos sociales vinculados en la región a los pobladores urbanos, especialmente en Barrancabermeja. Sus demandas se orientaron sobre todo a la obtención de servicios públicos y a la solución de problemas de vivienda. Estas reivindicaciones fueron dando forma a movimientos cívicos donde confluían diversos sectores sindicales, estudiantiles y populares. Su articulación fue conocida como la Coordinadora Popular de Barrancabermeja, que impulsó como principal forma de protesta los paros cívicos, los cuales tuvieron su surgimiento y auge en las décadas del setenta y el ochenta, para luego casi desaparecer en los noventa⁷.

Estos procesos han permitido poner en el escenario las distintas visiones del conflicto y la necesidad de construir condiciones culturales y políticas para el respeto de la persona humana y las posibilidades de convivencia, como también han proporcionado la oportunidad de discutir la manera como se une el desarrollo con el enfoque creativo del conflicto en la lucha contra la violencia directa y la estructural, dejando entrever con cierta claridad:

- ✓ Que los actores de la paz se construyen en un proceso de paz.
- ✓ Que la búsqueda de una paz sólida, fruto de la justicia social y el desarrollo, es condición necesaria y relevante para una transformación positiva de los conflictos inherentes a la región del Magdalena Medio.
- ✓ Que estos esfuerzos y propósitos regionales han surgido en momentos de alta conflictividad, evidenciando:
 - Lo absurdo de la solución militar para resolver los conflictos regionales.
 - El derecho y deber que tiene la población de vivir dignamente y construir un hogar común donde quepamos todos.
 - La necesidad de transformaciones profundas de distinto tipo y de todos los ámbitos del orden nacional y regional, en las personas, en las instituciones, en las políticas y en el posicionamiento del Estado en la región, para no caer en parálisis y frustración cuando desde la región se creen condiciones y propuestas para construir proyectos de sentido de vida y desarrollo.
 - La capacidad de unión para hacerle frente a la violencia, pero también la debilidad para construir procesos autónomos cuando no se cuenta con el apoyo suficiente y la voluntad política necesaria para ello.

⁷Op.cit. página 47.



La población del Magdalena Medio constituye una sociedad de resistencia, creadora de alternativas para la superación de la violencia. Siempre ha abrigado la esperanza de una salida digna a los conflictos, y por eso ha gestado y se ha comprometido con experiencias diversas para conseguir tal fin. Muchas veces desde su propia creatividad, otras en conjunto con el Estado; como también compartiendo las propuestas que han surgido de los procesos de paz entre el Gobierno nacional y grupos alzados en armas, acogiendo en su seno insurgentes que han optado por la vinculación a la vida social y política.

La anterior relación reafirma la vocación de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio en su lucha incansable por la construcción de paz como proceso social, que pasa necesariamente por la salida política y negociada del conflicto. Plantea ineludiblemente el desafío de construir la memoria de resistencia, libertad y desarrollo político plural y de paz en un territorio en el cual la vida marca el horizonte de sentido.



III. Elementos clave en paz y reconciliación

a. Elementos comunes sobre la paz

- ✓ La paz se entiende como la concreción de garantías para vivir con dignidad y participar políticamente con respeto de los derechos humanos.
- ✓ Implica la garantía de empleo de cada uno de los ciudadanos para el sustento de su familia, la justicia social y el derecho a la tierra (campo) y al territorio.
- ✓ Debe pasar por las transformaciones que requiere el país en lo social, ambiental, económico y político, para no perpetuar a los victimarios en los espacios de decisión.
- ✓ Es justicia social, de manera que debe abordar la desigualdad y la falta de oportunidades y se la debe concebir como la garantía de los bienes de mérito y la armonía de las personas con el territorio.
- ✓ La paz comienza con el reconocimiento del propio cuerpo, del territorio y del otro u otra, para poder autovalorarse y valorar a los otros.

b. Elementos comunes sobre la reconciliación

- ✓ La reconciliación requiere procesos complejos porque abarca lo individual, lo colectivo y las garantías para la no repetición.
- ✓ En la región se han llevado a cabo procesos de reconciliación individual, pero no ha habido procesos colectivos. “Nadie conoce cómo es un país en paz”.
- ✓ La reconciliación debe contemplar el cese bilateral del fuego: parar la guerra para hablar, lo que implica madurez política de los grupos armados legales e ilegales en conflicto.
- ✓ Para la reconciliación se requieren procesos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición así como protección y seguridad de las víctimas.

✓ La reconciliación es verdad e implica sinceridad desde los victimarios. Sin perdón no hay reconciliación. Se hace necesario llevar a cabo procesos de fortalecimiento para lograrla. ¿Está preparada la población para escuchar la verdad?

Hay que hablar de conversión para que se dé la reconciliación.

c. Elementos diferenciados

✓ Realizar procesos colectivos para transformar la cultura de guerra y desandar ese camino.

✓ Frente a la paz hay un alto compromiso y deseo de los sectores populares por alcanzarla, pero al mismo tiempo se observa una escasa voluntad de las élites en el mismo sentido.

Surgen dos grandes interrogantes:

¿Cómo desarmar el espíritu de las élites guerreristas?

¿Cómo lograr que depongan los intereses de élites políticas y económicas?



IV. Lecciones aprendidas de los procesos de paz en el Magdalena Medio

- ✓ Se requiere una verdadera participación de las regiones en la conformación y liderazgo de los Consejos Municipales de Paz, que involucre una mayor vinculación de los procesos regionales y facilite el acceso a la información producto de los diálogos. No se puede hablar de paz si no se construye desde las regiones.
- ✓ Se requieren garantías para el debate en las regiones y para que sus propuestas lleguen al destino deseado y no sean utilizadas únicamente para legitimar decisiones ya tomadas.
- ✓ Las negociaciones en medio del conflicto armado agravan la situación de derechos humanos y generan graves consecuencias humanitarias en las comunidades donde el conflicto se desarrolla. Por lo tanto, las negociaciones que se realizan bajo estas condiciones no son recomendables, porque mientras las partes dialogan, en los territorios las comunidades sufren los rigores de la guerra. Bombardeos, combates, desplazamientos y balas perdidas están presentes en la vida cotidiana, volviendo a revictimizar a las víctimas. Se requiere un “alto al fuego bilateral” el cual es demandado a las partes por las víctimas y la población en general.
- ✓ La paz no se logra solo con el desarme, sino cuando se garanticen las condiciones de vida digna representadas en el acceso a la tierra, el mejoramiento de la producción y el ingreso, la transformación y comercialización, la recuperación de la pesca y la agricultura tradicional, la salud y la educación acordes con las necesidades, condiciones y aspiraciones de los pobladores del territorio.
- ✓ Es necesario un diálogo abierto y sincero como estrategia para humanizar la guerra. El énfasis se debe poner en la vida humana, como lo alcanzó la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), abriendo el diálogo para el acuerdo humanitario. En los acuerdos de paz se hace necesario recuperar el valor de la palabra y no solo el valor de la norma o la Ley.
- ✓ Cualquier proceso de paz debe tener en cuenta la realidad local, social, política, económica y ambiental e involucrar a los diferentes sectores

poblacionales: jóvenes, mujeres, adultos mayores y grupos étnicos. Como sociedad civil heterogénea se puede avanzar por caminos diferenciados en la búsqueda de la paz.

- ✓ Se ha aprendido a resistir y persistir para permanecer en el territorio a través del dialogo e interlocución en el que primen el respeto a la autonomía de las comunidades y la garantía de la vida.
- ✓ Se reconoce la importancia de la visibilidad de los procesos de paz y del seguimiento y acompañamiento internacional.
- ✓ Se ha recurrido a la espiritualidad para hacer resistencia en la región; por lo tanto, se rescata el valor de lo espiritual en medio del conflicto. Por ejemplo: los diálogos pastorales y comunitarios.
- ✓ Se debe reconocer el papel de las mujeres en la construcción de paz en la región del Magdalena Medio, ejemplo de defensa de la vida mediante sus propuestas de resistencia pacífica.



V. Propuestas de paz del Magdalena Medio

Eje político

- ✓ Avanzar en pactos de gobernabilidad en los procesos electorales permitiría superar la crisis del ejercicio de la democracia y garantizar el acceso a una participación ciudadana real donde se lleven a cabo procesos de construcción conjunta de desarrollo territorial. Esto, a través de estrategias que permitan la alternatividad política para el acceso a la administración del Estado, el aprendizaje de buenas prácticas por parte de las comunidades sobre los procesos de gestión e implementación de políticas públicas construidas por ellas mismas así como la elaboración del estatuto de la oposición.
- ✓ Que las comunidades elaboren propuestas de programas de gobierno vinculadas al ordenamiento territorial con miras a defender la soberanía nacional y el uso del suelo, el subsuelo y el espectro electromagnético mediante la revisión y negociación de Tratados de Libre Comercio (TLC) y de estrategias internacionales como la Alianza del Pacífico, considerando condiciones justas para los colombianos.
- ✓ Garantizar la participación política autogestionaria y el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno como pilares para la pedagogía de la paz, a través de pactos sociales (propuestas municipales de desarrollo y paz) que adecúen y dispongan normativamente el acceso de las comunidades a los procesos de participación política, limitando la subordinación de estas a dinámicas clientelistas y politiquerías de modo que se garanticen el respeto a la legislación y el acatamiento de la ética política.
- ✓ Adoptar mecanismos político-administrativos que fomenten y propicien los ejercicios de autogestión de las comunidades y los movimientos y las organizaciones sociales, soportados en políticas públicas de financiamientos para garantizar su sostenibilidad.
- ✓ Realizar acciones públicas permanentes y afirmativas por parte del Estado, reivindicando la legitimidad y necesidad de los procesos comunitarios y organizativos que favorezcan la participación y control ciudadano como estrategias con carácter vinculante.

- 
- ✓ Evitar que las multinacionales paguen su seguridad al Ejército colombiano. Esto deslegitima la protección de la población civil y las políticas de seguridad ciudadanas.

Eje organizativo

- ✓ Continuar construyendo la Red Integral de Paz en el Magdalena Medio y Sur de Bolívar con miras a fortalecer y consolidar las iniciativas de paz regional existentes en el territorio, avanzando en el objetivo común de la paz, rompiendo esquemas (protagonismo/individualismo) que conlleven consensos a través de la concreción de planes o rutas de acción y evitando la dispersión y el desgaste.
- ✓ Persistir en el acuerdo o hermanamiento —desde la unidad— de las organizaciones sociales en el territorio del Magdalena Medio y sur de Bolívar con un sentido solidario, para poder avanzar en un proceso donde todas y todos los colombianos cansados de la guerra limen asperezas y hagan a un lado las diferencias políticas para unificar fuerzas. No más parcelas, sino toda la fuerza de Colombia luchando por una paz verdadera con justicia social para todas y todos con énfasis en la paz como ejercicio colectivo y no individual.
- ✓ Dar transcendencia a las propuestas de paz surgidas desde las comunidades, involucrando otros actores y agentes externos a través de la construcción de procesos ascendentes que propicien la articulación urbano-rural en lo local con proyección a lo regional, departamental y nacional. Desde este enfoque se podrá alimentar de manera eficaz la participación de las comunidades en los diálogos y posibles acuerdos, para el logro efectivo de la paz y la reconciliación.
- ✓ Promover y desarrollar iniciativas de formación política desde los movimientos sociales para las comunidades, buscando fortalecer la capacidad para la toma de decisiones en el libre ejercicio de la defensa y la exigencia de sus derechos con cargo al presupuesto público.
- ✓ Fortalecimiento de las juntas de acción comunal en los barrios y veredas, con miras a la transformación de prácticas clientelistas y politiqueras en verdaderas propuestas de paz y desarrollo.

Eje sociocultural y familiar

- ✓ Establecer una política pública de paz integral, como derecho síntesis con enfoque interétnico, diferenciado y de carácter permanente, que garantice condiciones para la no violencia y que contenga estrategias de formación ciudadana en derechos humanos, justicia, servicios públicos, vivienda, salud y educación pertinentes en relación con las necesidades del territorio.
- ✓ Recuperar las culturas ancestrales y tradicionales del Magdalena Medio, reconocer la tradición oral y la cuentería, con enfoque de interculturalidad, para involucrar a la población joven con miras a mantener este legado histórico y recuperar la identidad cultural, las costumbres, los alimentos tradicionales y las semillas nativas.
- ✓ Proteger y recuperar el tejido familiar y comunitario, resquebrajado y deteriorado por la presencia de las multinacionales y de los actores armados presentes en el territorio, a través de acompañamiento sicosocial individual, familiar y comunitario dirigido y adecuado, pues se requieren procesos de sanación colectiva para avanzar en el posconflicto.
- ✓ Exaltar el papel de la familia en la transformación de la cultura social y comunitaria, desde los padres, los hijos y demás miembros del núcleo familiar, para prevenir el reclutamiento y el trabajo forzado por parte de actores legales e ilegales. Desmontar toda la estrategia de prostitución que llega detrás de los megaproyectos, que comprometen los derechos y la dignidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
- ✓ Desarrollar procesos de formación y capacitación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el desarrollo de habilidades y capacidades para la paz y el aprovechamiento del tiempo libre. Acompañados de transformaciones en el modelo pedagógico del proceso educativo con principal énfasis en la construcción de ética social para la vida digna.

Eje económico / ambiental

- ✓ Apoyo a la producción campesina, a la generación de empleo y al desarrollo de la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) mediante el apoyo a la red de productores mediante procedimientos como el otorgamiento de capital semilla por parte del gobierno, que garantice el acceso a los mercados y condiciones de competitividad a nivel regional y nacional, con inversión en



infraestructura vial como estrategia de prevención del desplazamiento y la desnutrición.

✓ Fortalecimiento de la economía campesina a través de la constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) u otras figuras que favorezcan el mejoramiento del nivel de vida del campesinado, donde prime la producción acorde con el cuidado y protección del medio ambiente, con desarrollo sostenible y sustentable.

✓ Hacer efectivos los protocolos internacionales para la recuperación y protección de las cuencas hídricas, ciénagas y humedales que están siendo deteriorados por la explotación indiscriminada de retroexcavadoras y monocultivos.

✓ Implementar un ordenamiento territorial acorde con las condiciones del territorio, donde haya clarificación de la propiedad de la tierra, restitución de bienes y recuperación de baldíos y procesos de deslinde y realinderamiento de complejos cenagosos, designación de áreas de conservación y/o protección que prevengan la minería a cielo abierto, el despojo y el deterioro del medio ambiente.

✓ Cambio del modelo de desarrollo y de las políticas agrarias que contrarresten la economía extractiva en la región a través de iniciativas como la finca integral campesina y la minería y pesca artesanal mediante procesos de tecnificación focalizada.

✓ Fortalecer los procesos de consulta con las comunidades en lo referente a licencias ambientales para exploración y explotación minera.

✓ Eliminar los incentivos a los monocultivos, en especial a los proyectos agroindustriales para promover, proteger y cualificar la economía campesina, regresando a los cultivos tradicionales con alternativas reales de comercialización.

✓ Implementar proyectos productivos que incluyan toda la cadena de producción, transformación, distribución y comercialización así como proyectos de tecnificación de la pequeña producción agrícola.

✓ Regular la compra y acumulación de tierras por parte de las transnacionales y empresarios locales para evitar la depredación de los recursos renovables y no renovables.

✓ Dar oportunidades a la gente de la región que viene siendo reemplazada por personal de otras regiones, incluso con procedimientos menos rigurosos, mediante la cualificación de la mano de obra por parte de instituciones como la academia y el SENA de modo que se incluya prioritariamente a las víctimas y a la población marginada.

Conflicto armado – crisis humanitaria

✓ Establecer una comisión regional integral compuesta por organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, entidades de control del Estado (Procuraduría, Defensoría) y la comunidad internacional para que asuma el papel de seguimiento y verificación de los procesos de desmovilización y desarme que impidan la impunidad por parte de los actores alzados en armas.

✓ Efectuar consultas a las comunidades receptoras de población desmovilizada para la generación de entornos favorables a la convivencia, reconciliación y reintegración comunitaria, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

✓ Implementar la reparación colectiva regional en el Magdalena Medio, reconociendo la afectación sufrida por todos y todas a causa del conflicto armado, de manera que se comprometa una real voluntad del Estado en cuanto a reparar mediante respuestas efectivas.

✓ Proteger y favorecer la autoprotección de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos del Magdalena Medio.

✓ Empezar procesos de construcción y visibilización de verdad histórica y verdad judicial así como de no repetición de los hechos.

✓ Establecer penas alternativas a las partes en conflicto, que excluyan los delitos de lesa humanidad, diferenciando los tipos de delito y el nivel de responsabilidad.

✓ Mantener la exigencia del fin del conflicto armado como condición necesaria para que las nuevas generaciones vivan en una Colombia distinta.

✓ Establecer el servicio social alternativo frente a la prestación del servicio militar obligatorio, que limite paulatinamente las estructuras dispuestas para la guerra (servicio social en salud y servicio agropecuario, entre otros).

VI. Proyecciones

La Región del Magdalena Medio y el sur de Bolívar cuentan con una larga tradición de lucha por la construcción de un territorio en paz con justicia social y por el derecho a la vida digna y el goce efectivo de los derechos humanos, liderada por organizaciones sociales históricas que han intentado acallar y desplazar la manera de convertir la región en un gran centro de megaproyectos. Modelo este último que desconoce las comunidades rurales y urbanas, cuyas voces y sueños hacen parte de otra propuesta de desarrollo y de vida en la que se consolidan experiencias de construcción de paz y resistencia para la defensa y permeancia en el territorio.

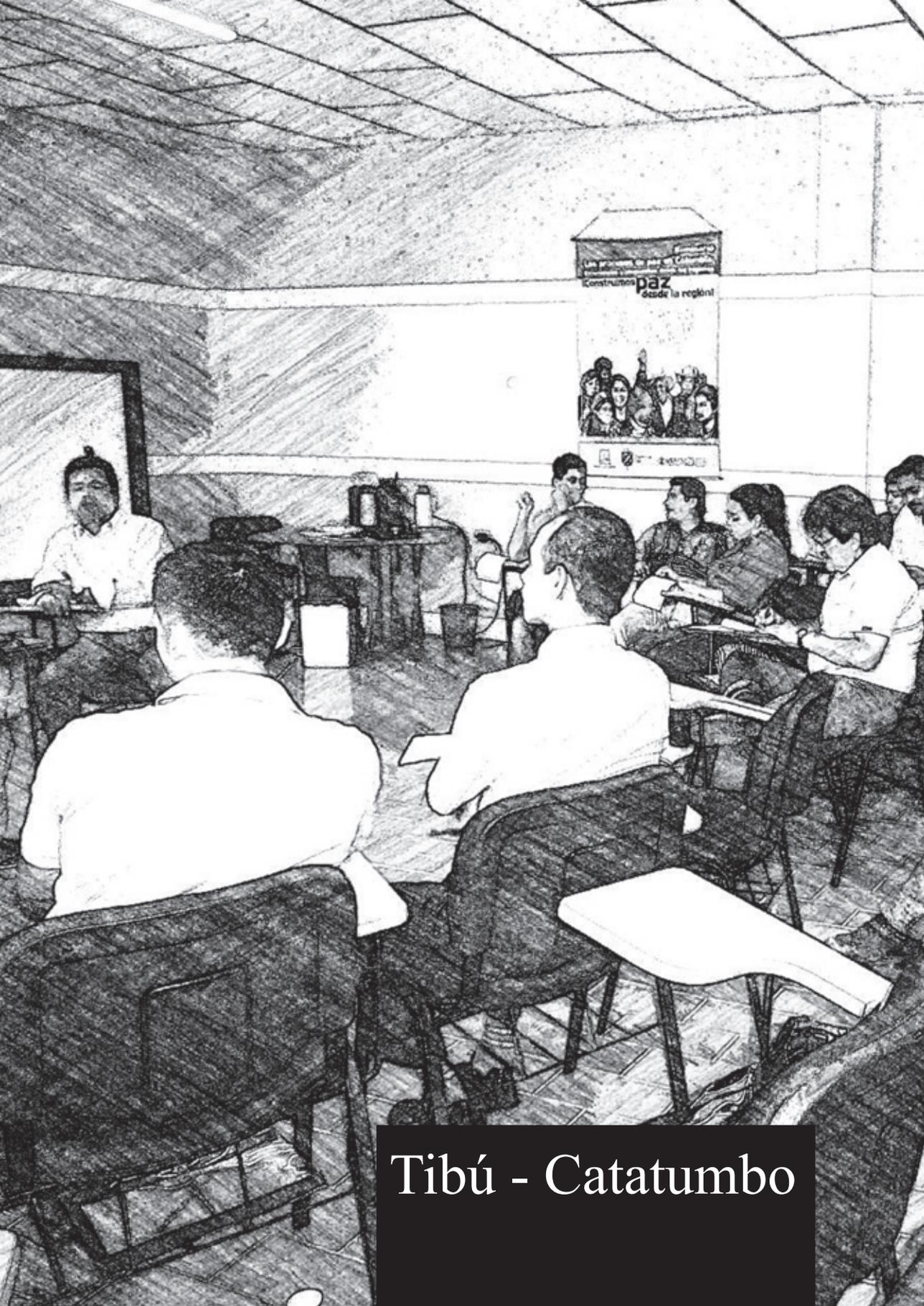
Proponemos entonces:

- a. Compartir en el interior de las organizaciones los documentos y conocimientos adquiridos en el seminario.
- b. Seguir consolidando las iniciativas de paz de la región y las propuestas que se han venido planteando desde la misma.
- c. Continuar el debate activo en torno a las expectativas de los participantes y sus organizaciones frente al logro de la paz y la reconciliación.
- d. Promover el conocimiento de la historia de los procesos de paz en Colombia. Avanzar en la construcción de la memoria de la guerra y la paz de la región del Magdalena Medio, desde las organizaciones sociales, campesinas y populares.
- e. Insertar la cátedra de historia del territorio, sobre paz y derechos humanos, como se hizo en los años 90 del siglo XX.
- f. Ser parte activa en futuros escenarios que se promuevan para la construcción de la paz regional.

“De la forma como hagamos el desarrollo depende el tipo de paz que hagamos en la sociedad”

APC Micoahumado





Tibú - Catatumbo





Reconocimiento

El presente documento de propuestas de paz, ha sido posible debido al esfuerzo, aporte y contribución de las siguientes organizaciones sociales e instituciones en Tibú, región del Catatumbo, participantes en las sesiones del seminario:

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Norte de Santander, Diócesis de Tibú, Parroquia Torcoroma, Secretaría de Juventud (ASOJUNTOS), Familias Desplazadas, Organización de Comerciantes de Tibú, Junta de Acción Comunal vereda La Paz, Consejo Municipal de Juventud, Hogar Juvenil Campesino de Tibú, Centro de Conciliación, Parque Natural Catatumbo - Bari, Docentes Campo Giles, Fundación de Amigos por la Paz, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Consejo Territorial de Planeación, Asociación de Padres de Hogares Comunitarios, Asociación de Juntas de Acción Comunal Campo Dos, Delegación Nacional de ASOJUNTAS, Universidad Francisco de Paula Santander, Docentes del corregimiento La Gabarra, y Asociación de Jóvenes de Tibú.

I. Contexto

“La paz elementalmente no se obtiene con el cese al fuego. Paz es justicia social en lo político y lo económico”¹.

La región del Catatumbo está conformada por 11 municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, donde conviven personas llegadas de otras partes de la región (colonos), campesinos propios cuyos padres alguna vez fueron colonos y el pueblo indígena Motilón Barí, habitantes milenarios. Esta región se sitúa en la cuenca del río Catatumbo, que atraviesa el departamento de Norte de Santander desde el suroccidente al nororiente.

“La gran mega diversidad ha ubicado el Catatumbo como una de las siete reservas forestales de Colombia”². También han sido reconocidos por el Gobierno nacional dos resguardos indígenas de la etnia Motilón Barí y varias zonas se han constituido como reservas forestales, incluyendo el Parque Natural Binacional Catatumbo – Barí.

El Catatumbo ha sido una de las regiones incluidas dentro de la aplicación de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT), cuyo objetivo es “fortalecer la presencia del Estado en regiones afectadas históricamente por organizaciones armadas ilegales y los cultivos ilícitos; con el fin de establecer condiciones para la prosperidad y el efectivo ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales”³.

Frente al conflicto armado, “Desde mediados de los años 60 se instalaron allí las guerrillas. Primero el ELN, en la década de los 80 el EPL y en los 90 las FARC. A partir de 1999 llegaron los paramilitares, cometiendo masacres sucesivas, entre las que destaca la de La Gabarra, en la que fueron asesinadas cerca de 30 personas el 21 de agosto de 1999”⁴. En la actualidad, el ELN y las FARC mantienen fuerte presencia en la región así como un pequeño reducto del EPL y también grupos en conexión con las bandas criminales emergentes conformadas por exparamilitares y narcotraficantes.

¹ Esaú Valderrama. Seminario Los Procesos de Paz en Colombia. Municipio de Tibú, agosto 7 de 2014.

² Ley 2 de 1959.

³ <http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=641&conID=4594>

⁴ <https://es-us.noticias.yahoo.com/farc-niegan-participaci%C3%B3n-protestas-campesinas-regi%C3%B3n-colombiana-163614065.html>



II. Documento regional

El Catatumbo: una mirada en perspectiva de paz y desarrollo con justicia social

Emiro Edsadis Carvajal Parra⁵

La Paz se debe reflexionar desde el territorio.

La riqueza natural del Catatumbo se agrega a su importancia geoestratégica por su condición de frontera con Venezuela y por la existencia de yacimientos minerales que hacen que grandes proyectos de capital nacional y extranjero, desde hace más de cien años, estén presentes en la región.

La historia de conflictos y confrontaciones en el territorio se pueden resumir en varias etapas históricas: un primer momento, comprendido entre 1907 y 1948, asociado a la invasión de los territorios indígenas por empresas extranjeras para explotar “el oro negro”.

El presbítero Víctor Hugo Peña Pérez (2014) reseña al respecto cómo la empresa Texas Petroleum Company, bajo la Concesión Barco, asumió la explotación petrolera a través de la Colombian Petroleum Company (Colpet) y la South American Gulf Oil Company (Sagoc) y entró en confrontación con la tribu barí.

Un segundo momento, de avivamiento, conocido como “la trocha petrolera”, generó oleajes de movilidad humana en la búsqueda de las riquezas naturales de la región como oro, agua, uranio, carbón, etc.

Peña Pérez señala cómo entre 1948 y 1972 el territorio fue concesionado exclusivamente a las empresas petroleras. Apareció el término de colono, aplicado a los propios ciudadanos colombianos que no tenían legalmente la posesión de la tierra, lo que los convirtió en extranjeros en su propio país.

⁵ Carvajal P., Emiro, (2014). Extracto de la ponencia “El Catatumbo: una mirada en perspectiva de paz y desarrollo con justicia social”. Su autor es filósofo, abogado, docente y coordinador en Tibú de los seminarios Los Procesos de Paz en Colombia. Agosto 23.

El tercer momento corresponde al periodo entre 1972 y 1992, cuando la explotación petrolera se constituyó en el principal renglón de la economía. La hegemonía de este modelo económico trajo afectaciones a las costumbres e identidad de la región. Posteriormente vino una etapa de crisis al enunciarse el cierre de los campos petroleros, dando paso a un nuevo periodo donde los cultivos ilícitos adquirieron gran magnitud y modificaron el modelo económico, sustentado ahora en el fenómeno del narcotráfico.

Un cuarto momento se refiere al narcotráfico y a sus problemáticas conexas como: aumento de la presencia armada, incremento de la población flotante, vinculación, explotación y trabajo de menores conocidos como “niños y niñas raspachines”, aumento de la inflación y del costo de vida, muertes y desplazamiento.

En este sentido, Jesús María Ortega (2014), en la ponencia regional “Los conflictos culturales en Colombia: El caso de Tibú” enuncia que el reconocimiento de estas condiciones locales permite dar una mirada introspectiva a cada uno de los componentes que integran toda la estructura social de la región, examinando sus particularidades, los daños de los hechos acaecidos en la zona y los consiguientes procesos de deterioro de la paz y la armonía entre los habitantes.

Conflicto armado

La radiografía del conflicto armado marca sus inicios en la década de los 60 con la aparición del Ejército de Liberación Nacional. La presencia guerrillera se incrementó en la década de los 80 con la aparición del Ejército Popular de Liberación y aunque las FARC ya hacían presencia en la región, esta logró consolidarse a partir de la década de los 90.

La presencia activa de las fuerzas militares en el territorio, en aras de consolidarse en el territorio, se incrementó a finales de los 90. Igualmente, en 1998 ya hacían presencia los grupos paramilitares bajo la dirección de los hermanos Castaño.

Sánchez, Ramón (2014) recuerda cómo en 1999 llegaron las brigadas móviles del Ejército y comenzó una serie de sindicaciones contra líderes sociales y comunales, que afectaron la fortaleza del movimiento social. A la par, surgió el paramilitarismo, sometiendo a las comunidades al horror de las masacres y a la región a una crisis humanitaria por los hechos victimizantes contra la



población civil. Todo ello hasta el 2004, cuando se produjo la desmovilización del Bloque Catatumbo, que operó bajo el mando de Salvatore Mancuso.

Verdad Abierta enuncia de qué modo en el Catatumbo, a partir del 2002, se presentó la más alta tasa de victimización: tuvieron lugar 25 masacres en las que fueron asesinadas 203 personas, hubo 430 víctimas de mina antipersonal y 71.825 casos de desplazamiento forzado.⁶

La presencia estatal

Todos los planes de desarrollo de los últimos gobiernos propenden por la paz, el desarrollo armónico y el bienestar para los colombianos, pero lo real, que se constata en lo cotidiano, es que la solución de las problemáticas sociales que padecen los “catatumbos” no pasa de los estudios técnicos. Por estas razones, la constante queja de los pobladores frente al abandono estatal, que se vuelve agresivo cuando solo se ocupa de la seguridad de las empresas con presencia exagerada del pie de fuerza militar, se convierte en clamor y exigencia política de una democracia más real y participativa.

La región ha conocido diversas políticas de Estado encaminadas a consolidar la presencia estatal y la paz en la región, tales como el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE); las “Zonas Especiales de Orden Público”; la Recuperación Social del Territorio (ERST), con el fin de articular los mecanismos sociales, económicos, políticos y militares en las regiones; el Programa Contra Cultivos Ilícitos (PCI); el Plan Colombia y la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT), entre otros.

Organizaciones sociales y construcción de paz

Esaú Valderrama hace una exposición, desde la dinámica cotidiana, sobre el concepto de paz territorial. Considera que a una paz no solamente se llega con que dejen de sonar los fusiles; la paz tiene muchas cosas de fondo, como el tema de los derechos ciudadanos a la educación, salud, tenencia de tierras para los campesinos, servicios públicos y derechos de las víctimas, entre otros.

⁶ <http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/3800-una-lupa-al-conflicto>

Las comunidades durante décadas han exigido y presentado propuestas de mínimos vitales en aras de superar las problemáticas estructurales que han dado vida a múltiples violencias.

Dentro de estas experiencias es importante recordar cómo en 1987 se produjo el “Paro del Nororiente” así como la “Marcha Cocalera” a finales de los 90, el Plan de Vida Motilón Bari y los Planes de Desarrollo y Paz para el Catatumbo. Todo ello, al lado de proposiciones frente a las fumigaciones, tal como la erradicación manual y programas alternativos para la sustitución de estos cultivos de uso ilícito, y la “Asamblea Catatumbo Paz y Desarrollo (ACPD).

En ese sentido, encontramos organizaciones en el territorio como ASOCBARI, que define la resistencia pacífica de una etnia desde la cosmovisión indígena, la cual entiende como prioritaria la “Conservación de la naturaleza, del medio ambiente, porque es parte de nuestra vida, nos vio nacer y es parte de la pervivencia del nuestro pueblo”.⁷

Otra expresión relevante de sociedad civil en la actualidad es el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), el cual “se autorreconoce como una articulación de base campesina, enraizado en los movimientos comunal y cooperativo, quienes reivindican los derechos de las comunidades campesinas a una vida en condiciones de dignidad”.⁸

De igual manera, la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) surge como una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social a través de la defensa y permanencia en el territorio, promoviendo una “verdadera reforma agraria integral y democrática, que resuelva las necesidades de tierra, créditos, asistencia técnica, obras de beneficio social, e impulso a la agroindustria sobre la base del bien común, seguridad social, vivienda rural, y el desarrollo planificado de la economía agropecuaria”.⁹

Para concluir, frente a los diversos retos del territorio en torno a la construcción de la paz y acogiendo las palabras del joven Fabricio Sánchez (2014) de la Organización de Jóvenes de Tibú, la paz no es estática ni cerrada, es la interacción armónica entre la sociedad y el gobierno en el marco de una verdadera democracia donde se haga efectivo el Estado social de derecho.

⁷ <http://www.asocbari.org/>

⁸ http://ciscatumbo.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=30

⁹ <http://vocesnuestras.blogspot.com/>



III. Enfoques de paz y reconciliación

El fortalecimiento de la paz requiere la participación activa de los actores sociales a través de redes, nodos, plataformas y aliados en el sentido de concebir la paz como una red, una arcilla que se moldea por diversas manos y multiplicidad de voces.

- ✓ La paz requiere la reconstrucción del tejido social que ha sido lesionado forzosamente por la violencia así como fortalecer las relaciones de confianza y respeto.
- ✓ La paz requiere la construcción de una memoria oral y escrita desde las voces y protagonistas de la historia de la región.
- ✓ La paz es articuladora, diversa, multicultural; es sinónimo de unidad y el resultado de una construcción colectiva. La paz no es excluyente.
- ✓ La paz sugiere que al igual que se desarrolla la infraestructura también se deben desarrollar mecanismos para la tramitación y transformación pacífica de los conflictos.
- ✓ La construcción de la paz requiere que al lado de las voces masculinas se adhieran el sentir y opinión de las mujeres, los jóvenes y los niños, niñas y adolescentes; muchas veces víctimas.
- ✓ La paz es respeto a la autonomía y soberanía de las comunidades y actores sociales organizados que trabajan por ella en la región.
- ✓ La paz requiere de nuevos modelos territoriales.
- ✓ La paz es vida digna y justicia social.
- ✓ La paz está sujeta a las transformaciones de los modelos tanto económico como político.
- ✓ La educación y la cultura son un medio para el logro y consolidación de la paz.

Paz y medio ambiente son indisolubles. La paz es vivir en un ambiente sano, es análoga al respeto a la tierra, a cuidar y preservar sus recursos naturales.

Una verdadera paz debe ser integral. La paz pasa por los propios acuerdos, por la inclusión de derechos como la educación, la salud, la vivienda, la tenencia de la tierra, el empleo, la seguridad social, la recreación, la reincorporación y reinserción de los desmovilizados como también por el tema de las víctimas y de los pobres históricos, etc. Debe incluir el establecimiento de unas veedurías posconflicto de talla nacional e internacional, por el tiempo que se considere, cuando el proceso de transición haya alcanzado mayor madurez y estabilidad.

- ✓ La paz es el valor agregado de la convivencia.
- ✓ La paz debe tener lugar de cara al país. Con un ingrediente de verdad, transparencia y respeto a las comunidades, donde el Estado sea vigilante y no cómplice, como pasó con los paramilitares que por la mañana se “desmovilizaron” en acto público y por la tarde siguieron en las mismas.
- ✓ La utilización de los mecanismos alternos para la transformación de conflictos nos permite alcanzar una mejor convivencia, sobre todo en las comunidades, donde se deben abordar problemas de violencia diferentes al conflicto armado.
- ✓ La paz hay que hacerla entre todos, el país no puede polarizarse en el tema. No puede ahogarse en medio de los rencores y dividir a Colombia en dos bandos: los que están a favor y los que están en contra de los procesos de paz.
- ✓ La paz surge de procesos de reconciliación fundamentados en verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
- ✓ La paz requiere la democratización de los medios de comunicación, es decir, medios para la paz.
- ✓ La reconciliación es un proceso que emergerá no del fin de la confrontación armada sino del cambio de sistema político, económico, religioso, social y cultural del país. Un sistema que ponga fin a la marginalidad, la exclusión, la inequidad e injusticia, causas subyacentes al surgimiento del conflicto social y armado que persiste en Colombia.



IV. Lecciones aprendidas

- ✓ La necesidad de definir agendas sociales para la construcción de la paz, el desarrollo sostenible y la justicia social en medio del conflicto político, social y armado.
- ✓ Respetar las opiniones de los diferentes actores civiles e institucionales en una región donde la diversidad es grande.
- ✓ Reconocer las limitaciones que se tienen sobre el aprendizaje de los procesos de paz en Colombia como hechos históricos de relevancia para la construcción de país y ciudadanía.
- ✓ Saber que existen organizaciones que desarrollan una labor comprometida con la paz y el desarrollo sostenible de la región, pero que no logran articularse en puntos de encuentro sino que están aisladas en sus diferencias.
- ✓ Que es preciso conocer que han existido experiencias valiosas de diseño y de acciones hacia la paz y armonía de la región, construidas endógenamente y que deben ser términos de referencia para las nuevas propuestas de paz desde la región.
- ✓ Que el trabajo en equipo posibilita ampliar los conceptos y elaborar de manera más amplia y precisa propuestas a favor de la paz y la justicia social.
- ✓ Que en la región y en Colombia quienes han sido afectados por el conflicto social y armado son víctimas que deben ser atendidas por el Estado en su proceso de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
- ✓ Que se debe hacer conciencia de la necesidad de construir una plataforma regional que facilite el encuentro e intercambio entre todas las fuerzas de la sociedad civil que trabajan por lograr la paz y desarrollo sostenible en la región.
- ✓ Que la riqueza generacional y de género no es de ninguna manera obstáculo para construir la paz de Colombia.
- ✓ Que los esfuerzos de unidad producen más resultados positivos que el trabajo individual.

- ✓ Que la paz elemental no es solo el producto del cese al fuego. Para los territorios no puede haber una paz sin garantías, todos hablamos de paz, pero esta no puede materializarse sin justicia social, económica, política, etc.
- ✓ Que la región ha sido afectada por la guerra y todos necesitamos la paz; por lo tanto, es importante avanzar y tener acercamientos de paz con los actores armados a través de diálogos regionales.
- ✓ Que la sociedad civil no puede continuar siendo espectadora en el terreno de una negociación política donde el objetivo principal sea la superación del conflicto. Es un sector que ha padecido los rigores de la confrontación; por tanto, debe jugar un papel preponderante en la construcción de la paz o en el renacer de un país en el marco del posacuerdo o periodo de transición.
- ✓ Que el hermetismo de las informaciones sobre lo que se discute en las mesas de negociación tiene sus pros y sus contras. De tal forma, es importante crear una estrategia de comunicación permanente, apalancada en una metodología que llegue a todos los rincones del país, donde las propias comunidades sean consultadas sobre si una u otra propuesta es viable o no, si tiene el respaldo de sus habitantes o no. De lo contrario, los acuerdos entre el gobierno y el actor armado pueden generar ruptura o crear ambientes de resistencia en los territorios antes del propio proceso de refrendación.
- ✓ Que todo proceso de paz debe tener un impacto político. En el caso de las negociaciones de paz adelantadas entre los gobierno de Barco y Gaviria con organizaciones insurgentes, la importancia radicó en la necesidad de reformar la carta política de 1886, cuyo resultado fue una nueva Carta Magna donde se consagró una gama de nuevos e importantes derechos para el pueblo colombiano.
- ✓ Que en los acuerdos surgidos en el marco de los diálogos de paz es importante establecer una comisión de verificación y seguimiento que opere en el periodo de posacuerdo.
- ✓ Que la paz no tiene un único significado, goza de muchas interpretaciones y percepciones. La construcción de la paz no está restringida a una mesa de conversaciones, hace referencia a hechos que estimulen la inclusión de la sociedad en ellas, como pasó con el Consejo Nacional de Paz.



V. Propuestas

Ámbito económico

- ✓ Que se reconozca la población campesina a la que primero se le llamó colonos, después productores, luego desplazados y ahora con el censo agropecuario otra vez productores.
- ✓ Defender el derecho a vivir en dignidad y rechazar toda acción que atente sobre la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
- ✓ Defender el derecho a la tierra y al territorio, fortaleciendo la economía campesina para afianzar el derecho a la soberanía alimentaria, conforme a las prácticas y saberes culturales de la población.
- ✓ Crear un plan de ordenamiento territorial para la vida y por el respeto a los usos del suelo y a las costumbres del territorio.
- ✓ Practicar la consulta obligatoria, previa e informada a los pueblos indígenas cuando se trate de megaproyectos para la explotación de los recursos naturales y para el establecimiento de monocultivos.
- ✓ Crear el acceso a la propiedad de tierras productivas estableciendo una real medida como la UAF, para incentivar la producción tradicional, la forma de conocimiento y saberes ancestrales, y el uso de recursos físicos y materiales (tecnificación) acorde con la visión de un desarrollo sostenible.
- ✓ Entender que la producción económica debe ser respetuosa de las reservas naturales y de los ecosistemas.
- ✓ Acerca de la demanda laboral, los empleos deben estar orientados para la vida, sin transgredir la identidad y la cultura de los pueblos.
- ✓ Fortalecer la industria agropecuaria, de tal forma que gran parte de la materia prima que se requiere en los procesos de agroindustria no tenga que comprarse y pueda ser producida en la región.
- ✓ Preservar, proteger y conservar las semillas nativas de la región.
- ✓ Nacionalizar la industria minero-energética y convertir a la región en

un ente administrativo autónomo que maneje y controle la inversión de los recursos producidos.

- ✓ Someter la economía a lo social para que produzca los cambios radicales y estructurales que permitan comenzar a construir una agenda de paz.

Ámbito político

- ✓ Crear autonomía territorial con participación de las comunidades, sus procesos sociales y las representaciones organizativas sociales y comunitarias en el territorio.
- ✓ Defender un ambiente sano en armonía con una política de desarrollo social, económico y cultural para una vida en paz.
- ✓ Fortalecer la unidad de los procesos sociales como construcción de tejido de vida autónomo del territorio, que permita la integración de las fuerzas vivas de la sociedad civil en la región del Catatumbo.

Ámbito social

- ✓ Crear la Universidad Pública del Catatumbo, la cual, además de tener un componente de paz, debe ofrecer una educación superior acorde con la vocación del territorio.
- ✓ Entender que la paz pasa por lograr la alfabetización de los territorios.
- ✓ Fundar escuelas para la paz: la educación debe descentralizarse, de tal manera que los estamentos educativos en conjunto (docentes, alumnos y padres de familia) tengan una mayor creatividad y participación a la hora de diseñar los PEI.
- ✓ Pensar en los forjadores de paz: lo exigido a los estudiantes de grado 10 y 11 deberá ser consecuente con el papel de la escuela como formadora y transformadora.
- ✓ Crear el observatorio de conflicto y paz del Catatumbo, con un equipo interdisciplinario y con el apoyo de actores sociales para que realice el monitoreo, seguimiento, lectura, análisis de realidad, informes y publicaciones sobre los puntos críticos del contexto de la región.



- ✓ Hacer campañas de promoción y sensibilización por la paz, en contra de la guerra, la exclusión social, la discriminación y a favor de la defensa del territorio y la no violencia contra la mujer.
- ✓ Apoyar las diferentes expresiones artísticas que se desarrollen en el territorio.
- ✓ Recrear el diálogo intercultural e interétnico así como el diálogo intergeneracional o entre pares.
- ✓ Promover y apoyar la apertura de canales de comunicación comunitaria con el apoyo del estamento público, en especial en los territorios en disputa armada.
- ✓ Promover la paz desde los empleados oficiales y servidores públicos, con ética ciudadana y educación en valores humanos, para que puedan superarse algunas prácticas en las que muchas personas han incurrido.
- ✓ Promover y fortalecer escenarios para la transformación de los conflictos como son las casas de justicia.
- ✓ Fortalecer el tejido social y de los actores sociales: ampliar los escenarios de participación ciudadana como, por ejemplo, a través de ejercicios de gobernabilidad frente a los temas relevantes del territorio. Educar en derechos humanos y en mecanismos de participación ciudadana. Fortalecer la incidencia política.
- ✓ Crear una cultura de paz: la conciliación como metodología que puede contribuir a la transformación del sujeto y a la transformación social que se requiere para fortalecer no solo el tejido social sino para lograr la paz.

Ámbito de derechos humanos y víctimas

- ✓ Reconocer que hay víctimas y que por lo tanto se deben brindar los espacios para que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, restableciendo los derechos fundamentales vulnerados.
- ✓ Que se haga partícipe a la población del Catatumbo al elaborar las narrativas que integrarán la historia sobre el conflicto social y armado interno de Colombia.

- ✓ Profundizar en el fenómeno paramilitar como una estrategia para el despojo de tierras y la responsabilidad del Estado dentro de esta estrategia en la región del Catatumbo, para que las víctimas de las acciones sean reconocidas como víctimas del Estado.
- ✓ Constituir subcomisiones de la verdad departamentales que construyan, desde el contexto, esa recuperación.
- ✓ Realizar un ejercicio de evaluación y análisis de la Ley 975 sobre los impactos y efectos reales en las víctimas, determinando si ha servido para impartir justicia o profundizar impunidades
- ✓ Que los militares que han cometido crímenes tan atroces como los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales sean juzgados por la justicia ordinaria.
- ✓ Realizar actos simbólicos de reparación y monumentos históricos en lugares emblemáticos donde ocurrieron la masacre de Tibú, la masacre de Carbonera y la masacre de La Gabarra.
- ✓ Llevar a cabo un catastro alternativo, que tenga en cuenta una evaluación y valoración de todos los bienes que les fueron arrebatados a las víctimas.
- ✓ Direccionar los recursos de la guerra para la inversión social en reformas a la política de la educación, la salud, la vivienda y tenencia de las tierras.
- ✓ Reestructurar las fuerzas militares y eliminar el servicio militar obligatorio.
- ✓ Crear una galería histórica de las víctimas del conflicto social y armado interno del país.



VI. Proyecciones

- ✓ Acompañar el diseño y construcción de una plataforma de la sociedad civil en la región del Catatumbo, que permita reunir a los diferentes actores de la sociedad civil e instituciones que vienen trabajando en clave de paz y desarrollo sostenible. Justificable, puesto que la gran debilidad de los procesos sociales alternativos endógenos es que no tienen un punto de encuentro y están cada vez más rivalizados y desunidos por sus diferencias.
- ✓ Acompañar y apoyar los procesos que vienen adelantando los jóvenes desde las organizaciones juveniles como la Asociación de Jóvenes de Tibú (ASOTILIJU). Especialmente en sus actividades artístico-culturales y de incidencia política que desarrollan en la región. Desde esta fortaleza, proponer a las organizaciones juveniles del Catatumbo encuentros permanentes a favor de la paz con justicia social y desarrollo sostenible.
- ✓ Por ser una región que hace parte de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), es necesario empezar a fortalecer relaciones con experiencias de sociedad civil e instituciones que puedan aportar a los procesos de paz endógenos desde el vecino país venezolano, dado que la visión de contexto frente a la frontera se ha quedado limitada al utilitarismo del contrabando y a las actividades ilícitas, dejando de lado todo el potencial de unidad en los aspectos de paz, integración y armonía fronteriza.
- ✓ Conformar, educar y prestar acompañamiento jurídico a un grupo de líderes que tengan las herramientas legales para exigir las reivindicaciones propias del contexto, debido a que el abandono estatal es evidente y se hace necesario encaminar acciones jurídicas para que el establecimiento cumpla con lo que le impone la Constitución y la Ley.



Bogotá D.C.





Reconocimiento

El presente documento de propuestas de paz, ha sido posible Gracias al esfuerzo, aporte y contribución de las siguientes organizaciones sociales e instituciones de Bogotá, participantes en las sesiones del seminario:

Iglesia Menonita Teusaquillo, Centro de Memoria Histórica, Mujeres por la Paz, Derechos Humanos- Secretaría Distrital de Gobierno (DDHH SDG), Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Futuro para Todos (Framtid for Alle), Programa de Atención a Personas Desmovilizadas de Bogotá, Colegio San Bartolomé de La Merced, Universidad Nacional, Planeta Paz, Derechos Humanos Fundación Social, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y Corporación Nuevo Arco Iris.

I. Bogotá: un acumulado de experiencias y lecciones. Criterios y acciones generales emprendidas como insumos para la construcción de una política de paz distrital

El Distrito Capital ha sostenido un curso de acciones e implementado, dentro del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, un marco general para pensar en la paz el cual permite identificar orientaciones generales para la construcción de una política en este sentido. No obstante, tal política no ha sido formulada de manera explícita por parte del distrito. Teniendo la claridad del abordaje de la paz como construcción del Estado con participación ciudadana decisiva, la hoja de ruta que se propone da cuenta de la experiencia del distrito a través de ciertas acciones emprendidas, así como también de los aspectos normativos que a nivel nacional operan en la construcción de una política de paz y ofrecen referencias para que el distrito aborde el tema.

Aspectos normativos

La Ley 434 de 1998, por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, es un marco de referencia para la generación de una política de paz, en tanto que ha creado una estructura pensada para tal fin (el Consejo Distrital de Paz) y establece que dicha política debe ser de Estado y además participativa.

De igual forma, se reafirma el carácter de integralidad que se le da a la paz en el artículo 2º: “La política de paz del Estado que desarrollarán las autoridades de la República, el Consejo Nacional de Paz y los Consejos Territoriales de Paz se orientarán por los siguientes principios rectores:

✓ Integralidad. Para la consecución y mantenimiento de la verdadera paz no es suficiente la sola eliminación de la guerra; se requiere simultáneamente de un conjunto de medidas integrales de carácter socio-económico, cultural y político que combatan eficazmente las causas de la violencia...

No obstante, en lo fundamental, esta ley no ha sido aplicada en el ámbito nacional y por ello no se ha materializado en una política pública.



Un segundo fundamento de política pública nacional es el documento Conpes 3554 de 2008 sobre la reintegración, también un esfuerzo para pensar en una política pública para la paz, particularmente para la reintegración, la reconciliación y la convivencia que permitan avanzar en escenarios de orden nacional. Se reconoce por ser el único documento de política pública que contiene elementos para una política de paz. Sin embargo, en este documento no se concibe expresamente una política de paz ni se define la reconciliación, así como tampoco se concretan lineamientos para la construcción de tal política ni se reconoce el conflicto armado y la posibilidad de su tratamiento político. De tal manera, resulta un insumo importante sobre el cual es preciso apoyarse, pero superando sus limitaciones.

Sobre la atención a víctimas, la Ley 1448 de 2011 establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, que posibilitan hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición como también que se reconozca su condición de víctimas y se les dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

Acciones y criterios desde el distrito

Bogotá ha adoptado un conjunto de acciones como antecedente para la construcción de una política de paz:

- ✓ Las administraciones distritales han trazado e implementado políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones en la materia. Y también lo han hecho desde el punto de vista territorial, como parte de un enfoque que permite dar cuenta de las particularidades regionales pero sin perder el concepto global. Por ejemplo, parte de la problemática del conflicto armado, especialmente el desarrollado con las FARC, ha tenido presencia muy fuerte en la localidad rural de Sumapaz, la más grande de la ciudad en términos espaciales. A lo largo de la historia, Sumapaz ha sido escenario del conflicto armado y generación tras generación su población no habla de guerra sino de guerras en su territorio.
- ✓ Las últimas administraciones distritales, en su planeación y gestión, han incorporado elementos importantes para la definición —por parte de la ciudad— de visiones, enfoques, políticas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo, convivencia, derechos humanos, paz y reconciliación. Destacamos los enfoques de calidad de vida, desarrollo humano, prioridad por

lo social, superación de la pobreza y la vulnerabilidad social; los criterios de equidad en el desarrollo y los enfoques diferenciales, de género, diversidad de género, ciclo vital, étnico, multicultural, poblacional y territorial; el tránsito de los énfasis en políticas con acento en la infraestructura para el desarrollo económico de la ciudad, funcional al modelo de desarrollo económico capitalista con un enfoque neoliberal, y la dinamización de procesos con énfasis en lo social, entre otros.

✓ En la lucha contra la discriminación, las violencias, la exclusión y la intolerancia, el Distrito ha pasado de un modelo que soslayaba los enfoques anteriormente referidos y que prefería la represión y las medidas policiales, a un enfoque con énfasis en la construcción de tolerancia y convivencia pacífica con fundamento en los derechos humanos y el propósito de reconciliación, mediante (a) el fortalecimiento de la justicia informal, (b) la promoción y fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, (c) la promoción de la solidaridad, (d) la construcción de pactos de convivencia y (e) la promoción del desarme, concertación, no violencia y desarrollo de procesos de cultura y pedagogía para la paz.

Sin embargo, dichas medidas no se han realizado con la contundencia y continuidad debida, lo que ha hecho que aún pervivan problemas con niveles de gravedad preocupantes: intolerancia, violencia sexual, de género, intrafamiliar, contra la niñez y la mujer, discriminación y/o estigmatización contra mujeres, grupos juveniles (“barras bravas”, las llamadas “tribus urbanas” y los llamados “parches juveniles”, etc.), adultos mayores, afrodescendientes, comunidad LGBTI, defensores de derechos humanos y de la paz y desplazados, entre otros.





II. El marco general: la Bogotá Humana, fundamento y antecedente para la construcción de una política de paz en el Distrito Capital

Como antecedentes más próximos de la construcción y puesta en marcha de una política pública de paz en el distrito, es importante evidenciar los elementos de paz que trae el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”.

La actual administración de Gustavo Petro propone como ejes centrales de su gestión el mejoramiento del desarrollo humano de la ciudad basado en la disminución de la discriminación y la segregación; la planeación de una ciudad que crece de forma sostenible ambientalmente alrededor del agua y enfrenta el cambio climático; el fortalecimiento de lo público mediante la gestión de la participación y decisión ciudadana, y el fortalecimiento de la transparencia, la seguridad y la democracia local.

Es en este último eje, que plantea el fortalecimiento de lo público, es donde se concentran los elementos que con mayor fortaleza apuntan a acciones de paz mediante la construcción de unos territorios de vida y paz que promueven la protección, la seguridad, la garantía de los derechos humanos y la convivencia a través de la consolidación de una ciudad que habla de memoria, reparación colectiva de víctimas y reconstrucción de tejido social como factores de construcción de paz y reconciliación.

El reconocimiento y respeto de la diversidad de personas, territorios y contextos de ciudad permite involucrar de forma heterogénea las reivindicaciones de derechos y los acuerdos de convivencia que la ciudadanía necesita para pensar en las condiciones democráticas de la paz. Sumado a esto, la garantía y fortalecimiento de los movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y de nueva ciudadanía previstos en el Plan de Desarrollo, son fundamentales para la futura discusión y construcción de una política pública de paz para Bogotá. Tanto como el reconocimiento de la necesidad de reparar integralmente, dar una atención digna y oportuna y vincular a la ciudad a las miles de víctimas del conflicto armado que el distrito ha recibido.

Se han desarrollado algunas acciones y declaraciones sobre el papel que el distrito puede jugar como cartas en el proceso de negociación:

- ✓ Llamado a la movilización y apoyo al proceso de negociaciones de paz en La Habana, teniendo en cuenta que la paz va mucho más allá de dichas negociaciones.
- ✓ Preparar la ciudad para acoger una nueva generación de la paz.
- ✓ En una eventual solución del conflicto, “Bogotá se ofrecería a la compra de alimentos para fortalecer la población campesina del país, que es la que más ha sido golpeada por el conflicto”.
- ✓ La articulación de diferentes alcaldes de todo el país, a través del desarrollo de las cumbres de Mandatarias y Mandatarios por la Paz.
- ✓ Compromiso con la búsqueda de la reconciliación, la atención y reparación integral de las víctimas.
- ✓ La administración definió darle impulso a la concreción de la participación de la sociedad en este proceso a través de la promoción de los Consejos de Paz. Mediante el Decreto 140 de 2013 convocó e instaló el Consejo Distrital de Paz, como herramienta de movilización, reflexión y construcción de paz en Bogotá, y órgano de consulta de la administración para definir compromisos y lineamientos.



III. Una ruta para la construcción de paz en el distrito: aprovechar el acumulado, fortalecer desarrollos y consolidar una política

1. Desarrollar un proceso de construcción de la política de paz del distrito con enfoque participativo y democrático, que involucre a la sociedad civil bogotana en todas sus expresiones para que se defina de manera concertada.

Proponemos la definición de una ruta de construcción concertada con el Consejo Distrital de Paz, cuyos elementos centrales sean:

- ✓ Una fase previa, preparatoria, de definición y análisis de actores por involucrar así como de ambientación, sensibilización de la ciudad y definición metodológica del proceso de construcción de la política.
- ✓ Una fase deliberatoria, participativa, de construcción de consensos y acuerdos y de definición de propuesta, que entre otras cosas defina un marco conceptual y político, el estado de los procesos de construcción de paz en el distrito y la problemática alrededor de ello (diagnóstico y línea de base) que identifique las conflictividades relacionadas con el conflicto social y armado y sus impactos en la ciudad, los escenarios, los actores involucrados, su proceso y evolución, los impactos y efectos y la afectación de la cultura y las relaciones. Fase que defina una propuesta de política para el distrito y una propuesta de implementación en la ciudad, así como de evaluación, monitoreo y seguimiento.
- ✓ Una tercera fase de definición de la política por parte de la administración de la ciudad en cuanto a las competencias, funciones administrativas, operativas y de recursos que correspondan.
- ✓ Fortalecer y apoyar el Consejo Distrital de Paz para hacerlo un equipo central y protagónico en la construcción de paz en el distrito, no solo como consejero del alcalde sino como movilizador de la sociedad bogotana en la construcción de paz, así como:
- ✓ La generación de espacios de intercambio de saberes sobre la paz y la

construcción de agendas sociales para la paz, desde cada territorio en Bogotá.

- ✓ En la construcción de una cultura de paz y reconciliación, el fortalecimiento de la educación, la pedagogía y la cultura de paz, que viabilice otros lenguajes y formas de habitar en la ciudad desde la diversidad étnica, de géneros y de nuevas ciudadanías, así como desde lo local y territorial.
- ✓ El reconocimiento de la diversidad etno-cultural que garantice la no violación y el ejercicio de los derechos, velando por acciones afirmativas que generen su desarrollo con perspectiva contra el racismo, la segregación, la xenofobia, el sexismo-machismo, la discriminación y la estigmatización.
- ✓ Las garantías para la movilización social sin ningún tipo de estigmatización a quienes defienden los derechos y la paz.
- ✓ La reconstrucción de la memoria histórica ligada a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a partir de la responsabilidad estatal, social y de los medios de comunicación como generadores de opinión pública.
- ✓ Pensar la verdad, la justicia y reparación integral de las víctimas del conflicto social, político y armado como garantías para la no repetición de los hechos.
- ✓ El reconocimiento al derecho a la objeción de conciencia, donde ningún niño, niña o joven se inserte en las dinámicas de la guerra, profundizando acciones pedagógicas en escuelas.
- ✓ El reconocimiento de Bogotá como territorio con una dimensión urbana y rural donde se tejen relaciones de convivencia y reconciliación y de ordenamiento administrativo, político, cultural y social en el que se sientan las reivindicaciones de la ciudadanía en el ejercicio activo de sus derechos y la defensa de los recursos naturales para el bien común y de las generaciones venideras.
- ✓ El apoyo e implementación de nuevos ordenamientos territoriales como: las zonas de reserva campesina, la reserva de la sociedad civil, delimitación de zonas metropolitanas, que garanticen los derechos y la permanencia del campesinado en el territorio y la viabilidad de la soberanía alimentaria en el distrito.



2. Formación de una generación para la paz mediante escenarios institucionales, de movilización y de participación

Es preciso partir de una amplia deliberación para la construcción de una “generación para la paz” mediante el compromiso de abrir todo tipo de escenarios posibles para ello, como las mesas territoriales, poblacionales y sectoriales para la paz y el desarrollo y concreción del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz. Además deberá facilitar, promover y abrir todos los espacios y escenarios para la movilización ciudadana por la paz, que permita empujar este proceso desde a sociedad y habilitar que en los escenarios académicos se generen espacios pedagógicos y políticos para la reflexión y la capacitación, mediante la creación de la cátedra de la paz.

Paralelo a todo ello se requiere que el distrito desarrolle un plan de construcción de sujetos sociales y políticos para la paz.

Se necesita que proponga y defina unas líneas claras de acción, como la Escuela de Gestores y Constructores de Paz. De manera que se haga efectiva la transversalización de la construcción de liderazgos de paz en la gestión participativa en el distrito, en el desarrollo de todos los asuntos que demanden la participación de la ciudadanía en la construcción y gestión de ciudad, la lucha contra la segregación, el fortalecimiento de lo público y el ordenamiento alrededor del agua, entre otros empeños.

a. Institucionalidad para la paz

Requerimos de una ciudad que genere espacios y condiciones para la reconciliación de las actuales y nuevas generaciones de bogotanos. Las instituciones distritales han desarrollado procesos y acciones de paz, pero ahora se requiere disponerlos y fortalecerlos para apoyar, desarrollar y facilitar procesos de construcción de paz en todos los sectores de la administración. Se necesita desarrollar un proceso institucional para que cada entidad del distrito se piense para la paz y diseñe sus respectivas adecuaciones organizacionales, de mentalidad y acción para ello.

b. Las víctimas: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición

En la ciudad, la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas y la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación vienen desarrollando acciones a favor de más de 400.000 personas. Se requiere proyectar este

programa hacia la cultura de la paz y la reconciliación en el sentido de la reparación simbólica y colectiva para que sus impactos sean mayores.

c. Revisar y fortalecer el programa de reincorporación a la vida civil

Es necesario prever que de consolidarse unos pactos de paz que incluyan la desmovilización y el desarme de las guerrillas, se necesita la coordinación con entes gubernamentales y estatales para reformular un nuevo diseño de los compromisos, las garantías y los programas de reintegración social, política y económica a la vida civil. Existe una experiencia acumulada de complementación y coordinación con la ACR y otros entes. Pero la nueva situación exige revisar y rediseñar la política y el programa de inserción y reintegración, con base en la coordinación de esfuerzos nacionales y locales y la adopción de nuevos desarrollos institucionales y de actuación. El programa reformulado en materia de reintegración debe tener énfasis en enfoques: colectivo, político, social, económico, de género, familia, relación con las comunidades receptoras, aportes del empresariado y compromisos activos con las dinámicas en pro de la verdad, la justicia y reparación integral de las víctimas.

d. La construcción de la Universidad de la Paz

El papel de la educación en la construcción del ciudadano como sujeto político y social para la construcción de la paz y la justicia social merece ser considerada como un proceso concebido más allá de la terminación del conflicto armado. Podría desarrollar observatorios para hacer seguimiento al proceso de paz, a los conflictos, y a los procesos de reconciliación como también programas de extensión hacia territorios donde la carencia de oferta universitaria es notable. Podría ser el escenario natural donde la población vulnerable, de víctimas y de los propios excombatientes y exmilitares licenciados en una perspectiva de posconflicto, hagan su paso a la reincorporación a la vida civil a través del estudio en los diferentes programas.



IV. Acercamiento a los enfoques pertinentes para la construcción de la política de paz

Enfoques diferencial, territorial y de derechos en la construcción de paz y reconciliación en el distrito

En estos aspectos, el distrito avanza en la formulación de políticas y enfoques; sin embargo, aún dista de su implementación en muchos aspectos.

Enfoques diferenciales

La construcción de la política pública de paz trata también sobre elementos estructurales que se relacionan con la democracia y el goce efectivo de los derechos humanos. Como primera medida, se debe reconocer la manera diferencial como los sujetos, los cuerpos, los proyectos de vida y los colectivos sociales son afectados por la violencia e igualmente la necesidad que existe en la administración local de dar respuesta a las situaciones heterogéneas de las poblaciones, como también reconocer y transformar los distintos sistemas de valores de dominación que confluyen y se perpetúan en el marco de este contexto de guerra.

Resulta ineludible la asunción de distintos enfoques diferenciales que promuevan la participación e inclusión de sectores tradicionalmente discriminados y/o vulnerados y que den respuestas adecuadas a necesidades, posiciones, habilidades, capacidades, intereses, condiciones y contextos que tienen las personas, las cuales determinan el desarrollo individual y colectivo.

Como mínimo, la política pública de paz que asuma el distrito debe contemplar los siguientes enfoques diferenciales:

Enfoque de género

Se considera fundamental la transformación de comportamientos que justifican la violencia en todos los escenarios de la vida social. Se deben confrontar y tratar directamente las percepciones relacionadas con las masculinidades estereotipadas, que sostienen la sumisión de las identidades femeninas y la subordinación, exclusión o negación de otro tipo de identidades de género.

La paz empieza también por construir formas educativas más humanas y equitativas, acordes con las potencialidades de cada ser humano. Sumado a esto, existe la obligación de los Estados de garantizar la participación de grupos históricamente discriminados por su sexo e identidad de género.

La asunción de un enfoque de género en la política de paz implica, entre otras cosas:

- ✓ Garantizar la participación activa de las mujeres y a las comunidades LGBTI en todos los niveles de representación.
- ✓ Promover acciones afirmativas dentro de la política pública de paz que permitan el goce pleno de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales a las mujeres y las comunidades LGBTI.
- ✓ Fortalecer la atención a las víctimas del conflicto armado desde un enfoque que tenga en cuenta las particularidades culturales, estructurales y de impacto de la violencia armada en las mujeres y las comunidades LGBTI en cuanto al tratamiento de temas como la violencia sexual, el desplazamiento, el despojo, la protección y las cargas extraordinarias que asumen, para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
- ✓ Incluir un enfoque de género en los programas de atención a excombatientes con acciones específicas para las mujeres y personas de las comunidades LGBTI que pertenecieron, de diversas maneras, a grupos armados.

Enfoque de ciclo vital

Un enfoque de ciclo vital parte del reconocimiento de que los seres humanos atraviesan por distintas etapas en su vida, que marcan sus vivencias, sus formas de relacionamiento con otros, sus necesidades, sus percepciones e intereses. Un enfoque de ciclo vital en la política de paz debe entender las condiciones mínimas que niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores requieren para la reconstrucción de tejidos sociales inclusivos y respetuosos.

Enfoque étnico

En Bogotá confluye gran cantidad de grupos étnicos que han vivido ancestralmente en este territorio y otros que, como consecuencia de la violencia social y política del país, han tenido que llegar al distrito capital a enfrentarse a nuevos espacios donde se ven abocados a luchar por la pervivencia de su



cultura. Los pueblos indígenas, rom y las comunidades afrocolombianas que habitan actualmente en Bogotá se enfrentan a dinámicas contradictorias de una ciudad que en muchas ocasiones los excluye, estigmatiza, discrimina y desconoce, a pesar de la existencia de políticas sociales nacionales y distritales para su protección.

Enfoque de discapacidad

Debe pensarse la paz desde la perspectiva de la discapacidad, de forma tal que se generen condiciones de participación de personas con distintas capacidades en los proyectos de ciudad para el desarrollo, la democracia y la paz; es preciso que se busque integrar a todas aquellas personas que como consecuencia de la guerra han quedado discapacitadas y se piense en una ciudad que dé acceso a espacios, servicios y derechos adecuados para ellos.

Enfoque territorial

Mencionamos los siguientes territorios como ejemplo del impacto de la conflictividad en una región particular, sin menoscabo de la necesidad de una política pública general:

- Sumapaz, territorio de paz

Dada la importancia de Sumapaz, esta localidad debe pensarse como un escenario especial de construcción de paz y reconciliación; además, las estrategias y acciones que se implementen allí podrán tener directa relación con la construcción de paz integral también de la Provincia de Sumapaz, lo que la relaciona directamente con varios municipios de Cundinamarca. Ese esfuerzo amerita facilitar la articulación institucional de los alcaldes de la provincia y de la sociedad civil de dicho territorio. Proponemos generar espacios de articulación y coordinación entre la alcaldía local y las demás entidades que allí operan. Lo mismo deberá propiciarse con las organizaciones de la sociedad civil. Todo ello inscrito en un plan de acción territorial, provincial y regional de paz.

- La Región Centro, territorio de paz

La presencia de conflictividades, violencias y del propio conflicto armado en Bogotá así como la agudeza de los problemas sociales se expresa con mayor énfasis en unos territorios que en otros. En Bogotá se estigmatizan no solo sectores sociales y poblaciones sino también territorios. Dada la

importancia de la ciudad en el plano nacional se respaldan las acciones de la administración encaminadas a fortalecer la articulación de un importante bloque de ciudades y municipios para la paz en el país. Especial atención debe darse a los municipios de la Sabana y la Región Centro. La articulación de dichos municipios, la definición de una agenda conjunta y la implementación de un plan de trabajo para la paz en la Sabana de Bogotá y en la región, es una tarea central para la construcción de paz en este ámbito geográfico.

Enfoque de derechos: seguridad humana

El enfoque de seguridad humana atiende una perspectiva multicausal e integral para el tratamiento de los problemas de seguridad y convivencia en el distrito porque incorpora las políticas sociales y económicas, el goce de una vida digna con derechos y libertades y la protección frente a las amenazas contra la seguridad individual y colectiva como garantía para la paz y la reconciliación en la ciudad. Se trata de una política de convivencia y seguridad con énfasis en la prevención, en los programas del distrito para atender la intolerancia, las violencias y la inseguridad.

En perspectivas de paz y reconciliación, por tanto, se requiere fortalecer, entre otros aspectos, la justicia comunitaria, los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, la no violencia, la educación y la pedagogía para la paz, los programas de desarme ciudadano, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, la promoción y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, los pactos de convivencia, la movilización y desarrollo de la protesta social por las vías pacíficas, la atención, reconocimiento e inclusión de los jóvenes y sus formas de expresión culturales, sociales, políticas y deportivas.



V. A manera de síntesis

1. El concepto de paz adoptado va más allá de la superación del conflicto y de la sujeción a la firma o no de acuerdos con las FARC y con el ELN.
2. Persiste una concepción de construcción del Estado que comprende, entre otros, la construcción de justicia, fortalecimiento de la democracia, convivencia, participación, reconocimiento e implementación de derechos.
3. La generación de una política pública para la paz debe estar por encima de posibles acuerdos, ser estructural y reflejar problemas de la institucionalidad del país.
4. Es preciso tomar como referentes para la construcción de una política de paz, el marco normativo y de documentos, pero superando sus limitaciones.
5. Se debe tener en cuenta que El Consejo Distrital, en aplicación de la ley 434 y en virtud de la concepción de una estructura para la paz, es favorable a la generación de un espacio para la convergencia de ideas en torno a una política de paz que cuente con el apoyo del gobierno, la legitimización de la sociedad y la concertación.
6. Es necesario prepararse para la primera generación de paz, partiendo del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos políticos activos y ciudadanos que deben ser integrados a los asuntos públicos.
7. La construcción de una política de paz debe ir acompañada de una fuerza social que la empuje, legitime el proceso y que, en la medida en que sea necesario, también exija la construcción de esa política.
8. En concordancia con todo lo anterior, la ruta propuesta para la elaboración de una política pública para la paz no se supedita al acuerdo con las FARC (y eventualmente con el ELN) y aunque pueda debilitarse si tales acuerdos no prosperan y fortalecerse si sucede lo contrario, la ruta continúa, pase lo que pase, porque así está concebida.

Este documento es el resultado del seminario Los procesos de paz en Colombia: experiencias y propuestas desde las regiones, que se realizó en Barrancabermeja, Tibú, Sincelejo, Pasto, Cali, Medellín y Bogotá, D. C. Cada capítulo es el resultado de la construcción colectiva de las organizaciones participantes y por lo tanto los contenidos no fueron editados.

ISBN: 978-958-58025-3-7



FUCUDE
Fundación Cultural Democrática



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



Organización
Internacional
para las
Migraciones